



APRUEBA NORMAS TÉCNICAS DEL SISTEMA POSTPENITENCIARIO

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 238

DIVISIÓN DE REINSECCIÓN SOCIAL
MCC/MC/VECN



10 FEB 2022

SANTIAGO, 08 FEB 2022

HORA: 17:00

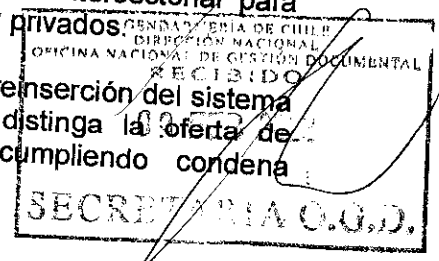
SUBDIRECCIÓN DE REINSECCIÓN SOCIAL

Hoy se resolvió lo que sigue:

VISTOS: Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 3, de 2016, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; en el Decreto Supremo Nº 1.597, de 1981, del Ministerio de Justicia, que Aprueba el Reglamento Orgánico del Ministerio de Justicia; del Decreto Ley Nº 2.859, que Fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, de 1979; en el Decreto Ley Nº 409 de 1932 del Ministerio de Justicia, que establece normas relativas a reos; en el Decreto Ley Nº 321 de 1925 del Ministerio de Justicia, que establece libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad; en la Ley Nº 20.588 de 2012 del Ministerio de Justicia que establece indulto general; en la Resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón; y en la demás normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1. Que, de conformidad con lo dispuesto en el literal i), del artículo 2, del DFL Nº3, de 2016, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a esta Cartera Ministerial le corresponde entre otras funciones "Dictar normas e impartir instrucciones a que deben sujetarse sus servicios dependientes y fiscalizar su cumplimiento".
2. Que, por otra parte, el sistema postpenitenciario, a través de los Centros de Apoyo para la Integración Social (C.A.I.S), pone a disposición de las personas que desean adscribirse al proceso de eliminación de antecedentes penales, y a las personas beneficiadas con el indulto conmutativo o la libertad condicional, una oferta de servicios para apoyar su reinserción social a la que pueden acceder de manera voluntaria mientras dure el control administrativo de estos beneficios legales.
3. Que, en el ámbito de la justicia penal y respecto de las leyes referidas a la ejecución de las penas, hay consenso en cuanto a la importancia de contar con mecanismos de apoyo postpenitenciario para fortalecer los soportes sociales de la población que egresa del sistema penitenciario, y de esta manera favorecer su integración a la comunidad y disminuir reincidencia.
4. En este sentido, se releva la importancia de ofrecer programas de apoyo postpenitenciario a las personas controladas en los Centros de Apoyo para la Integración Social (C.A.I.S) en virtud de alguno de los beneficios legales contemplados por la regulación vigente, que permitan atender sus necesidades de intervención para disminuir reincidencia; y de vinculación con la red intersectorial para acceder a prestaciones sociales dispuestas por organismos públicos y privados.
5. Que, la estrategia de reinserción del sistema postpenitenciario debe contemplar un abordaje diferenciado que distinga la oferta de servicios dispuestas para las personas que se encuentran cumpliendo condena.



(beneficiadas con la libertad condicional o con indulto conmutativo); de aquellas que ya cumplieron condena y que se encuentran en proceso de eliminación de antecedentes penales.

6. Que, las normas técnicas detallan la estrategia de reinserción dispuesta por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en conjunto con Gendarmería de Chile, para el desarrollo de las acciones tendientes a la reinserción social de la población postpenitenciaria ante las instancias judiciales, la comunidad y las personas afectas a estos beneficio legales.

7. Que, las normas técnicas que por este acto se aprueban, contienen procedimientos administrativos y lineamientos técnicos respecto a la oferta programática dispuesta para la población atendida en los Centros de Apoyo para Integración Social (C.A.I.S.), a seguir por todos aquellos profesionales que participan en el control de estos beneficios legales.

8. Que, los lineamientos establecidos en estas normas técnicas son el resultado de un trabajo realizado en conjunto con Gendarmería de Chile, cuyo contenido refleja la revisión de la experiencia comparada y los estudios nacionales vinculados a la reinserción social de la población postpenitenciaria.

RESUELVO

1°. - **APRUEBÁNSE** las siguientes Normas Técnicas para el Sistema Postpenitenciario, cuyo texto íntegro es el siguiente:

NORMAS TÉCNICAS DEL SISTEMA POSTPENITENCIARIO

Introducción

El apoyo postpenitenciario es asumido como una responsabilidad del Estado, a través de los Centros de Apoyo para la Integración Social (C.A.I.S.) de Gendarmería de Chile, en conjunto con los programas dispuestos por algunas municipalidades y organismos públicos que ofrecen ayuda a las personas que han cumplido condena para reinsertarse a la sociedad. Con ello, la institución no solo se ocupa del adecuado cumplimiento de las condenas dictadas por los tribunales de justicia, sino también, de propiciar que quienes egresen del sistema penitenciario logren reintegrarse a la vida de forma adecuada, con las herramientas y el apoyo necesario para desenvolverse como ciudadanos respetuosos de las leyes.

Una de las particularidades que distingue al sistema postpenitenciario es la diversidad de su población, tanto respecto a la situación judicial de las personas atendidas por los C.A.I.S., como por el contenido de la sanción que determinó su ingreso a Gendarmería. De esta manera, es posible encontrar a personas que han dado cumplimiento a una pena sustitutiva o privativa de libertad, junto a personas que se encuentran en libertad condicional. De esta población, hay quienes durante su condena participaron de un proceso de intervención orientado a modificar sus factores de riesgo de reincidencia, situación que se observa especialmente en la población proveniente de la libertad vigilada y libertad vigilada intensiva; pero también, aunque en menor medida, en personas que egresan de una pena privativa de libertad. Pese a que la participación en programas de reinserción social debiese ser una parte central del cumplimiento de la condena, en los C.A.I.S. es posible encontrar a personas que no participaron de esta oferta, ya sea porque la pena que motivó su ingreso a Gendarmería no lo contempla en sus requisitos, o bien, porque la persona no manifestó voluntad de participar de un proceso de intervención que no tiene carácter obligatorio, en el caso de quienes cumplen una pena de cárcel.

Esta multiplicidad de situaciones requiere que el sistema postpenitenciario pueda implementar una oferta de servicios que facilite la integración social y contribuya a que las

personas se alejen del delito, a través de una respuesta diferenciada, que no solo esté articulada a partir de las probabilidades de reincidencia de la población, sino que tome en cuenta su vinculación con el sistema penitenciario, el tiempo que ha transcurrido desde que han cumplido su condena y el tipo de apoyo que mejor se ajusta a las necesidades de estas poblaciones.

En este escenario, el abordaje de las dimensiones sociales vinculadas al delito se torna una necesidad que no puede desconocerse, considerando los altos niveles de exclusión social de la población atendida por Gendarmería, particularmente en quienes cumplen una pena de cárcel. Se ha documentado que esta población, presenta desventajas en el ejercicio de sus derechos sociales, en dimensiones tales como educación, trabajo, habitabilidad y salud entre otras, lo que generaría una ruptura con la sociedad y con el sentido de "ciudadanía" que puede vincularse con una mayor propensión a cometer delitos y a un aumento en los niveles de reincidencia (Wakefield y Uggen, 2010; Nilsson, 2003).

Por otro lado, tampoco puede desconocerse que algunas de estas dimensiones también han sido identificadas como factores de riesgo de tipo socio-económicos y comunitarios, observándose un traslape entre los hallazgos obtenidos en estudios de meta-análisis con alguna de las dimensiones de exclusión social (Fundación Paz Ciudadana, 2016). Por lo tanto, y dada la vasta evidencia sobre los factores de riesgo que se vinculan con la comisión de delitos, es importante que las intervenciones orientadas a modificar la conducta delictiva se complementen con prestaciones que garanticen el ejercicio de los derechos sociales; pudiendo éstas últimas, ocupar en algunos segmentos de la población, un lugar central en la oferta de apoyo postpenitenciario, en la medida que pueden perpetuar o incluso, acrecentar ciertas formas de exclusión social que promueven reincidencia y dificultan la integración a la sociedad.

Este documento describe la oferta diferenciada que se ha dispuesto para la población que es atendida por el sistema postpenitenciario, entregando lineamientos generales para efectuar las derivaciones, ya sea a la red intersectorial o a los programas de reinserción social disponibles en los C.A.I.S. De este modo, las presentes normas técnicas establecen los procedimientos técnicos a realizar de parte de los profesionales que atienden a esta población, así como tipo de oferta que se ha diseñado y sus criterios de ingreso y/o población objetivo. Estas normativas no describen en detalle los programas de reinserción social disponibles, ya que su contenido y directrices pueden consultarse en los respectivos manuales.

Asimismo, y considerando que gran parte del quehacer del sistema postpenitenciario se vincula con el control de la población que está en proceso de eliminación de antecedentes penales, en proceso de aclaración prontuarial, con el beneficio del indulto conmutativo o en libertad condicional¹, estas normas técnicas detallan los procedimientos administrativos que deben realizarse como parte del control de estas poblaciones.

Finalmente, estas normas técnicas se organizan de la siguiente manera: el primer capítulo trata sobre el marco normativo que orienta las acciones realizadas por el sistema postpenitenciario; el segundo capítulo hace una descripción del marco conceptual a la base de las actividades de reinserción de esta población; el tercero y cuarto describen los procesos administrativos y técnicos según los diversos tipos de población que atienden los C.A.I.S.; el quinto, aborda lo relacionado con los procesos de supervisión técnica y monitoreo; el sexto detalla las acciones de difusión, gestión de redes y de convenios de este sistema; y finalmente, se concluye con un capítulo en que se establecen las funciones y responsabilidades tanto de Gendarmería de Chile, como del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respecto al quehacer del sistema postpenitenciario.

¹ Estas normas técnicas incluyen los procedimientos administrativos y técnicos para la población en libertad condicional que ha obtenido el beneficio antes del mes de enero 2019; fecha en que se modificó el Decreto Ley N°321 incorporando la figura del delegado de libertad condicional y la supervisión de este beneficio a través de un plan de intervención individual cuyos lineamientos han sido desarrollados en la Norma Técnica de la Libertad Condicional.

Capítulo I

Marco normativo

El Departamento Postpenitenciario, dependiente de la Subdirección de Reinserción Social de Gendarmería de Chile, aboca sus energías y experticia técnica a acompañar el transitar de su población objetivo en el camino de la integración social (Gendarmería de Chile, 2019). Este proceso de acompañamiento a su población usuaria está regulado por una serie de cuerpos normativos, de distinto rango legal, de nuestro ordenamiento jurídico.

En el presente capítulo se revisarán las principales normas, a nivel nacional e internacional, que enmarcan el quehacer del Sistema Postpenitenciario en lo general, distinguiendo sus distintos tipos de población objetivo, en lo particular.

1. Normativa de Derecho Internacional

La prestación de servicios a quienes cumplen algún tipo de pena y a quienes ya dieron cumplimiento a su/s condena/s, es una acción que se enmarca y fundamenta en un enfoque de derechos, basado en un marco jurídico nacional e internacional, que apuntan al resguardo de los derechos fundamentales de toda persona, señalados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Política de Chile y tratados internacionales que Chile ha suscrito. Algunos extractos importantes en relación a lo anterior se expresan a continuación (Comité Asesor para la Reinserción Social, 2018).

Como marco general, cabe destacar la Declaración Universal de Derechos Humanos² que, en su artículo 2°, señala que "toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía".

Respecto de la población postpenitenciaria propiamente tal, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)³ refieren que es conveniente que, antes de que el recluso termine de cumplir su pena, se adopten las medidas necesarias para asegurarle un retorno progresivo a la vida en sociedad. Este propósito puede alcanzarse, según los casos, con un régimen preparatorio para la puesta en libertad, organizado dentro del mismo establecimiento penitenciario o en otra institución apropiada, o mediante la libertad condicional bajo una vigilancia que no deberá confiarse a la policía y que comprenderá una asistencia social eficaz (Regla 87).

La Regla 88, numeral 1°, alude a que en el tratamiento de los reclusos no se hará hincapié en el hecho de su exclusión de la sociedad, sino, por el contrario, en el hecho de que continúan formando parte de ella. Con ese fin se buscará, en lo posible, la cooperación de organismos de la comunidad que ayuden al personal del establecimiento penitenciario en la tarea de reinsertar a los reclusos en la sociedad.

Por su parte, la Regla 90 destaca que el deber de la sociedad no termina con la puesta en libertad del recluso. Por consiguiente, se habrá de disponer de los servicios de organismos gubernamentales o privados capaces de prestar al ex recluso una ayuda pospenitenciaria eficaz que contribuya a disminuir los prejuicios contra él y le permita reinsertarse en la sociedad.

² Declaración Universal de Derechos Humanos, fue adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.

³ Resolución 70/175, ONU, "Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos" (Reglas Nelson Mandela), 2015. Desde su creación y adopción en el año 1955, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos fueron reconocidas como la base para la elaboración de políticas penitenciarias en el tratamiento de las personas privadas de libertad. Sin embargo, con el paso del tiempo y producto del desarrollo en el ámbito legislativo internacional en lo que al tratamiento del recluso se refiere, se hizo necesaria su actualización. Se inició así un proceso de discusión y revisión de las diversas materias que regulaba, concluyendo tal labor en el año 2015 con la adopción de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos o Reglas Nelson Mandela, a modo de homenaje al difunto presidente de Sudáfrica.

Finalmente, la Regla 108 describe lo siguiente:

1. Los servicios y organismos, oficiales o no, que ayuden a los reclusos liberados a reinserirse en la sociedad velarán por que se proporcione a estos, en la medida de lo posible, los documentos y papeles de identidad necesarios, alojamiento y trabajo dignos y ropa apropiada para el clima y la estación, así como los medios necesarios para que lleguen a su destino y puedan subsistir durante el período inmediatamente posterior a su puesta en libertad.
2. Los representantes acreditados de esos organismos tendrán todo el acceso necesario a los establecimientos penitenciarios y a los reclusos. Se les consultará en cuanto al futuro de cada recluso desde el momento en que comience a ejecutarse la pena.
3. Convendrá centralizar o coordinar todo lo posible las actividades de dichos organismos, a fin de asegurar el aprovechamiento óptimo de su labor.

En lo relativo a población femenina en el ámbito postpenitenciario, destacan las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok⁴), las que puntualizan que las autoridades penitenciarias, en cooperación con los servicios de libertad condicional y de asistencia social, los grupos comunitarios locales y las organizaciones no gubernamentales, elaborarán y ejecutarán programas de reinserción amplios para el período anterior y posterior a la puesta en libertad, en los que se tengan en cuenta las necesidades específicas de las mujeres (Regla 46). Agrega en su Regla 47, que tras su puesta en libertad, se prestará apoyo suplementario a las mujeres que requieran ayuda psicológica, médica, jurídica y práctica, en cooperación con los servicios comunitarios, a fin de asegurar que su reinserción social tenga éxito.

2. Normativa nacional específica según población objetivo

2.1. Población objetivo con condena/s cumplida/s

El Decreto Ley N°645, sobre el Registro General de Condenas, de 18 de octubre de 1925, prescribe en su artículo 1° la creación de un Registro General de Condenas sobre la base del prontuario penal, esto es, un documento público que da fe de la identidad de una persona y de las anotaciones judiciales que registra, bajo la dependencia del Servicio de Registro Civil e Identificación. En este prontuario penal se inscribirán todas las sentencias condenatorias definitivas y ejecutoriadas por delitos y simples delitos, así como por las faltas a que se refieren los artículos 494, N°19, 494 bis y 495, N°21, del Código Penal.

Asimismo, el artículo 3° del citado cuerpo legal prescribe que se procederá a filiar y a abrir prontuario penal a las personas declaradas procesados por crímenes, simples delitos y cuasidelitos. A los infractores de faltas se les filiará y abrirá prontuario cuando hayan sido condenados por tercera vez.

De este prontuario podrán eliminarse los antecedentes penales que en él se contengan, de acuerdo al procedimiento regulado en el Decreto Ley N°409, de 1932, que establece normas relativas a reos⁵. Este decreto establece un sistema de eliminación de antecedentes penales, regulando en su artículo 1° inciso primero que toda persona que haya sufrido cualquier clase de condena y reúna los requisitos legales, tendrá derecho después de dos años de haber cumplido su pena, si es primera condena, o de cinco años, si ha sido condenado dos o más veces, a eliminar los antecedentes penales que figuren en su Prontuario Penal (Extracto de Filiación y Antecedentes Penales), a que se le considere como si nunca hubiere delinquido para todos los efectos legales y administrativos y se le indulten todas las penas accesorias a que estuviere condenado.

⁴ Resolución 65/229, ONU, "Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes" (Reglas de Bangkok), 2011.

⁵ Además del Decreto Ley N°409, se podrá eliminar antecedentes penales de dicho prontuario, por medio del Decreto Supremo N° 64 de 1960, que reglamenta la eliminación de prontuarios penales, de anotaciones y el otorgamiento de certificados de antecedentes.

Cuando la persona hubiere sido condenada a la pena de inhabilitación absoluta temporal del artículo 39 bis, de conformidad con el artículo 372, ambos del Código Penal, el derecho a obtener este beneficio sólo se podrá ejercer transcurridos diez años desde el cumplimiento de la pena, sin importar el número de condenas que dicha persona tuviere" (artículo 1°).

Para tener derecho a este beneficio, se requiere que la persona ex-condenada reúna las siguientes condiciones (artículo 2°):

- a) Haber observado muy buena conducta en la prisión o en el lugar en que cumplió su condena, cuando se trate de pena de prisión, presidio, reclusión o relegación.
- b) Conocer bien un oficio o una profesión;
- c) Poseer conocimientos mínimos de cuarto año de escuela primaria;
- d) Haber estado en contacto con el Patronato de Reos durante dos años, por lo menos, si es primera vez condenado, y cinco años si ha sido condenado dos o más veces, y ser recomendado por este organismo. Donde no exista Patronato de Reos, esta recomendación será hecha por la autoridad administrativa, la judicial y la de Carabineros de la respectiva localidad, una vez transcurridos los mismos plazos señalados, los que se contarán desde la fecha en que los interesados se hayan presentado ante estas autoridades para ser observados. El tiempo que permanezcan en observación ante estas autoridades, se tomará en cuenta en caso de que el Patronato de Reos los acoja después bajo su tutela.

La única excepción la constituye la regulación establecida en el artículo 13 inciso 5° de la Ley N°18.216, en relación a los funcionarios de FF.AA. y Carabineros en servicio, pues el tiempo de sujeción a la vigilancia del juez institucional o de permanencia en reclusión parcial en la unidad militar o policial correspondiente, se computará como período sometido a la vigilancia de Gendarmería.

- e) No haber sufrido ninguna condena durante el tiempo de prueba y hasta la fecha de dictarse el decreto respectivo. Se debe verificar en el Extracto de Filiación y Antecedentes, el cual debe tener una vigencia no superior a 60 días (artículo 10 del Decreto Ley 463, de 1974).

Quedan exceptuados de las condiciones señaladas en las letras b) y c) del artículo 2°, recientemente mencionado, las personas que, por su edad o estado físico, según certificado médico, no estén en condiciones de estudiar o de trabajar (artículo 4°), siendo en estos casos facultad del/la Secretario/a Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos otorgar el beneficio.

Reunidos estos requisitos, la persona condenada tendrá derecho a que "se le considere como si nunca hubiere delinquido para todos los efectos legales y administrativos" y a que "se le indulten todas las penas accesorias a que estuviere condenado." En relación a este último derecho, el vocablo indulto debe tomarse en su sentido natural y obvio, como perdón, remisión, condonación, y no como la facultad del Presidente de la República para otorgar indultos particulares.⁶

Cabe destacar que, para efecto de la eliminación de antecedentes, no sólo debe tenerse a la vista el cumplimiento de la pena privativa de libertad o sustitutiva impuesta, sino que además todas aquellas penas consideradas principales, tales como inhabilidades absolutas (temporales o perpetuas) y multas. A este respecto, es importante considerar aquellas modificaciones legales que han incidido en esta materia^{7 8}.

Consideraciones Especiales sobre el artículo 372 del Código Penal. Inhabilitaciones absolutas temporales y perpetuas.

La Ley N°19.927 de 14 de enero de 2004, incorporó en el artículo 372 del Código Penal la pena de inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con

⁶ Maldonado, Francisco. "Informe en derecho sobre algunos problemas prácticos e interpretativos en la aplicación del Decreto Ley N°409, de 1932, del Ministerio de Justicia, sobre regeneración y reintegración del penado a la sociedad, y la Ley N°19.856, de 2003, que crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta", p.33.

⁷ Subsecretaría de Justicia. Oficio N°5805, que instruye sobre criterios de aplicación del Decreto Ley N°409, de 1932, 2013.

⁸ Ministerio de Justicia, División Jurídica. Memorandum N°197, 2012.

personas menores de edad. Esto implica la privación y la incapacidad de obtenerlos antes de transcurrido el tiempo de la condena de inhabilitación.

En cuanto al inicio de la pena de inhabilitación absoluta temporal, esta se cuenta desde que se hubiere dado cumplimiento a la pena privativa de libertad, obtenido la libertad condicional en la misma, o iniciada la ejecución de alguno de los beneficios de la Ley N°18.216 como sustitutiva de la pena principal.

Posteriormente la Ley N°20.594, de 19 de junio de 2012, reemplazó el inciso segundo del artículo 372 del Código Penal y agregó un inciso tercero a esta misma norma, estableciendo la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, y ampliando el ámbito de aplicación de la pena de inhabilitación absoluta temporal de los condenados por delitos sexuales contra mayores de 14 y menores de 18, a otros delitos.

De esta forma, se incorpora la privación y la incapacidad perpetua para obtener cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.

Asimismo, la Ley N°20.594, modificó el Decreto Ley N°645 agregando un inciso tercero al artículo primero de esta norma, a través de la cual crea una sección especial, denominada "Inhabilitaciones impuestas por delitos de connotación sexual cometidos contra menores de edad" en la que se registrarán todas las inhabilitaciones absolutas perpetuas o temporales establecidas en el artículo 39 bis del Código Penal y que hayan sido impuestas por sentencia ejecutoriada.

Finalmente la Ley N°20.685 de 20 de agosto de 2013, modificó el Decreto Ley N°409 incorporando un nuevo inciso al artículo 1° y estableciendo que cuando la persona hubiere sido condenada a la pena de inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, el derecho a solicitar la eliminación de antecedentes penales sólo se podrá ejercer transcurridos 10 años desde el cumplimiento de la pena, sin importar el número de condenas que dicha persona tuviere.

Lo anterior, implica que solo en los casos que exista una condena a la pena de inhabilitación absoluta temporal por hechos ocurridos con posterioridad al 20 de agosto de 2013, se otorga la facultad de solicitar la eliminación de antecedentes penales sólo después de transcurridos 10 años desde el cumplimiento de la pena, sin importar el número de condenas que dicha persona tuviere. De esta forma, se puede dar inicio al proceso de control en el C.A.I.S. o Establecimiento Penitenciario respectivo, una vez cumplida la pena, y de manera ininterrumpida durante 2 o 5 años según corresponda, pero la solicitud solo se puede presentar ante la Seremi una vez transcurridos los 10 años desde que ha cumplido la pena.

Consideraciones Especiales sobre Ley N°18.290, de Tránsito. Manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas.

Mediante la Ley N°20.580, de 15 de marzo de 2012, se introducen modificaciones a la Ley N°18.290, de Tránsito, aumentando las sanciones por manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, y bajo la influencia del alcohol. En el mismo sentido, la Ley N°20.770, de 16 de septiembre de 2014, que modifica la Ley del Tránsito, en lo que se refiere al delito de manejo en estado de ebriedad, causando lesiones graves, gravísimas o, con resultado de muerte.

En este contexto, destaca la pena de suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados, la cual conlleva la imposibilidad de usarla durante el tiempo de la condena y la de inhabilitación conlleva la cancelación de la licencia de conducir o la imposibilidad de obtenerla. Si se causare alguna de las lesiones indicadas en el número 1° del artículo 397 del Código Penal o la muerte de alguna persona, se impondrán las penas de inhabilitación perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica.

De esta forma, en aquellos casos que exista una condena por la conducción de vehículos motorizados en estado de ebriedad, o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o

sicotrópicas, se ha interpretado que en razón de la modificación a la Ley N°18.290, la suspensión o cancelación de la licencia para conducir vehículos motorizados, junto con las penas de presidio y multa tienen el carácter de pena principal, toda vez que se establecen copulativamente.

En el mismo sentido ha razonado la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica en causa Rol N°656-2019, al rechazar por resolución de fecha 14 de agosto de 2019, el recurso de protección deducido en contra del Secretario Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Arica y Parinacota, estableciendo que "de la norma legal antes referida se colige que el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad lleva aparejada las siguientes penas principales, a saber, la de presidio menor en su grado mínimo, multa de dos unidades tributarias mensuales y la de suspensión de licencia para conducir por el término de dos años".

En los casos que se hubiere cancelado la licencia de conducir, el juez, transcurridos 12 años desde que se canceló la licencia, podrá alzar esta medida cuando nuevos antecedentes permitan estimar fundadamente que ha desaparecido el peligro para el tránsito o para la seguridad pública que importaba la conducción de vehículos motorizados por el infractor (artículo 208).

2.2. Población objetivo que está en proceso de cumplimiento de condena

2.2.1. Población objetivo con Libertad Condicional

La libertad condicional es un medio de prueba de que la persona condenada a una pena privativa de libertad y a quien se le concediere, demuestra, al momento de postular a este beneficio, avances en su proceso de reinserción social. Es un beneficio que no extingue ni modifica la duración de la pena, sino que es un modo particular de hacerla cumplir en libertad por la persona condenada y según las disposiciones que se regulan en este Decreto Ley y en su reglamento. Este beneficio se encuentra regulado en el Decreto Ley N°321, 12 de marzo de 1925.

Esta norma, fue modificada sustancialmente mediante la Ley N°21.124 de 18 de enero de 2019. Se hace necesario abordar ambas versiones de este Decreto Ley, distinguiendo sus principales énfasis, diferentes requisitos de postulación, funciones para Gendarmería, y cumplimiento de requisitos para su población beneficiaria a fin de que no sea revocado el mencionado beneficio. Cabe señalar además, que actualmente coexisten, como población objetivo del Sistema Postpenitenciario, libertos/as condicionales sujetos a diferentes condiciones de cumplimiento de su Libertad Condicional, según se le fue otorgado este beneficio con anterioridad o posterioridad a la modificación legal de este cuerpo normativo.

Población objetivo que obtuvo la Libertad condicional previa modificación legal de la Ley N°21.124 de 18 de enero de 2019.

El Decreto Ley N°321, de 1925 previo a su modificación por la Ley N°21.124, establece en su artículo 2° que todo individuo condenado a una pena privativa de libertad de más de un año de duración, tiene derecho a que se le conceda su libertad condicional, siempre que cumpla con los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido la mitad de la condena que se le impuso por sentencia definitiva. Si hubiere obtenido, por gracia, alguna rebaja o se le hubiere fijado otra pena, se considerará ésta como condena definitiva. El artículo tercero, del mismo cuerpo legal establecía que a los condenados a presidio perpetuo calificado sólo se les podrá conceder la libertad condicional una vez cumplidos cuarenta años de privación de libertad efectiva. Cuando fuere rechazada la solicitud, no podrá deducirse nuevamente sino después de transcurridos dos años desde su última presentación.

A los condenados a presidio perpetuo se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional una vez cumplidos veinte años. A los condenados por los delitos de parricidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación de persona menor de catorce años, infanticidio, los contemplados en el número 2 del artículo 365 bis y en los artículos 366 bis, 366 quinquies, 367, 411 quáter, 436 y 440, todos del Código Penal, homicidio miembros de las Policías y Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus

funciones y elaboración o tráfico de estupefacientes, se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional cuando hubieren cumplido dos tercios de la pena.

A los condenados a más de veinte años se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional una vez cumplidos diez años de la pena, y por este solo hecho ésta quedará fijada en veinte años.

Los condenados por hurto o estafa a más de seis años, podrán obtener el mismo beneficio una vez cumplidos tres años.

Los condenados por los incisos tercero y cuarto del artículo 196 de la Ley de Tránsito podrán obtener el mismo beneficio una vez cumplidos dos tercios de la condena.

A los condenados a presidio perpetuo por delitos contemplados en la Ley N°18.314, que fija la penalidad por conductas terroristas y, además condenados por delitos sancionados en otros cuerpos legales, se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional, una vez cumplidos 10 años de pena, siempre que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 1 de enero de 1989 y el 1 de enero de 1998, y los condenados suscriban en forma previa una declaración que contenga una renuncia inequívoca al uso de la violencia.

2. Haber observado conducta intachable en el establecimiento penal en que cumple su condena, según el Libro de Vida que se le llevará a cada uno.
3. Haber aprendido bien un oficio, si hay talleres donde cumple su condena; y
4. Haber asistido con regularidad y provecho a la escuela del establecimiento y a las conferencias educativas que se dicten, entendiéndose que no reúne este requisito el que no sepa leer y escribir.

Por su parte el Decreto N°2.442 de 1926, derogado por el Decreto Supremo N°338, de 2020, que contenía el Reglamento de la Ley de Libertad Condicional establecía la Libertad Condicional como una recompensa para la persona condenada a una pena privativa de libertad por más de un año, que por su conducta y comportamiento intachables en el establecimiento penal en que cumple su pena, por su interés en instruirse, y por su empeño en adquirir un oficio o los medios de ganarse la vida honradamente, haya demostrado que se encuentra corregido y rehabilitado para la vida social (artículo 2°). Agrega además que el período de libertad condicional durará todo el tiempo que le falte al penado para cumplir su condena, y la pena se reputará cumplida si obtiene su indulto o si terminare el período de libertad condicional sin que haya sufrido una nueva condena o sin que se haya revocado su libertad condicional (artículo 3°).

Respecto de las obligaciones que quedan sujetos los/las libertos/as condicionales, el artículo 6° del Decreto Ley N°321, establecía:

1. A no salir, sin la autorización debida, del lugar que se les haya fijado como residencia.
2. A asistir a una escuela o establecimiento de instrucción y a desempeñar el trabajo que se les haya designado.
3. A presentarse una vez cada semana, dónde corresponda.

Por su parte, el Decreto Supremo N°338, de 2020, que aprueba el reglamento del Decreto Ley N°321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad y modifica el Decreto Supremo N°518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, establece en su artículo transitorio que respecto de aquellas personas que hubiesen obtenido la libertad condicional con anterioridad a la entrada en vigencia de la modificación al artículo 6° del Decreto Ley N°321, de 1925, dispuesta por el artículo transitorio de la Ley N°21.124, se aplicarán las siguientes reglas:

- a) Las personas beneficiadas están sujetas a la supervisión administrativa de Gendarmería de Chile para el control del beneficio de libertad condicional.
- b) El beneficio podrá ser revocado en caso de que la persona sea condenada por cualquier delito o, por incumplir la supervisión a que se refiere el literal anterior. Asimismo, en el

caso de lo establecido en el inciso final⁹ del artículo 4° del Decreto Ley N°321, de 1925, la libertad condicional se podrá revocar si la persona beneficiada no mantiene el requisito exigido por el número 2 del artículo 2°¹⁰ del citado Decreto Ley.

c) Se aplicarán, en lo pertinente, los artículos 18, 26¹¹ y 31¹² del presente reglamento. Para efectos de esta Norma Técnica, es relevante explicitar lo referido en el artículo 18 del Decreto Supremo N°338 de 2020, recientemente citado, el que hace referencia a la extensión de la libertad condicional. Al respecto, señala que el período de libertad condicional durará todo el tiempo que le falte a la persona privada de libertad para cumplir su condena. La pena se considerará cumplida si terminare el período de libertad condicional, sin que este beneficio haya sido revocado o si la persona obtuviere la libertad completa, conforme a lo señalado en el artículo 8° del Decreto Ley N°321, de 1925.

Población objetivo que obtuvo la Libertad Condicional post modificación legal

La población penal que obtiene el beneficio de libertad condicional bajo el régimen del Decreto Ley N°321 modificado por la Ley N°21.124 de 18 de enero de 2019 no va a ser abordada en estas Normas Técnicas, pues mediante Res. Ex. N°364, del 19 de marzo de 21, se aprobaron las Normas Técnicas específicas para la Libertad Condicional, no obstante, se hace relevante señalar brevemente las principales modificaciones a la organización de la Libertad Condicional que trajo aparejada la Ley N°21.124:

- a) Se establece expresamente que consiste en un beneficio y no en un derecho.
- b) Los bimestres de muy buena conducta exigidos aumentaron de 3 a 4 (se mantiene en 3 para penas inferiores a 541 días).
- c) Se incorpora como requisito el contar con un informe de postulación psicosocial, elaborado por Gendarmería, *“que permita orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia, con el fin de conocer sus posibilidades para reinserirse adecuadamente en la sociedad.”*.
- d) Se modifican algunos de los tiempos de cumplimiento exigidos para poder postular:
 - Antes se exigían 10 años para personas condenadas a penas de más de 20 años. Ahora se exigen 20 años para personas condenadas a penas de más de 40 años.
 - Respecto de los tipos penales a los que se les exigen 2/3 de condena se agregan el femicidio, la violación, el homicidio de miembros de bomberos de Chile en ejercicio de sus funciones, los delitos considerados como de lesa humanidad, y los contemplados en la Ley N°20.357.
 - Respecto de mujeres embarazadas o con hijos menores de 3 años, cumpliendo condena por delitos a los que se les exigen 2/3, el tiempo exigido baja a la mitad de la condena. Regla nueva que se incorpora reconociendo la especial situación de esta población.
- e) Para las personas condenadas por delitos considerados como de lesa humanidad, se exige como requisito adicional el haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento del delito o confesado su participación en el mismo, o aportado antecedentes serios y efectivos de los que tenga conocimiento en otras causas criminales de similar naturaleza

⁹ Inciso final del artículo 4° del Decreto Ley N°321, de 1925. “La Comisión podrá conceder también la libertad condicional en favor de aquellas personas condenadas que cumplan el tiempo mínimo de su condena en los dos meses siguientes a los indicados en el inciso primero.”

¹⁰ Número 2 del artículo 2° del citado Decreto Ley: “Haber observado conducta intachable durante el cumplimiento de la condena. Será calificado con esta conducta la persona condenada que tenga nota “muy buena”, de conformidad al reglamento de este Decreto Ley, en los cuatro bimestres anteriores a su postulación. En caso que la condena impuesta no excediere de quinientos cuarenta y un días, se considerará como conducta intachable haber obtenido nota “muy buena” durante los tres bimestres anteriores a su postulación”.

¹¹ Artículo 26 del Decreto Supremo N°338, de 2020: “Colaboración con entidades públicas y privadas. Gendarmería de Chile propenderá y facilitará, a través de distintos medios, la participación de entidades públicas y privadas en materias relacionadas con educación, capacitación y colocación laboral, en beneficio de las personas con libertad condicional. A través de los delegados de libertad condicional, apoyará y articulará el acceso de la persona supervisada a la red de protección del Estado, según se requiera. Los organismos estatales y comunitarios que otorguen servicios relativos a la salud, educación, capacitación profesional, empleo, vivienda, recreación y otros similares deberán considerar especialmente toda solicitud que los delegados de libertad condicional formulen para la adecuada intervención de las personas bajo su supervisión”.

¹² Artículo 31 del Decreto Supremo N°338, de 2020: “Comunicación de la revocación. Cuando se haya revocado la libertad condicional a alguna persona, Gendarmería de Chile comunicará la resolución al tribunal respectivo, para que disponga su detención, cuando ella fuere procedente, y posterior ingreso al establecimiento penitenciario que correspondiere, a fin de que cumpla el tiempo que le falte para completar su condena”.

(atenuantes del 11 N°8 o 9 del Código Penal o con un certificado del tribunal competente). Además, se valorarán los siguientes factores:

- Si la concesión del beneficio no afecta la seguridad pública por riesgo de comisión de nuevos delitos de igual naturaleza.
- Si ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las resoluciones en la etapa de investigación y enjuiciamiento.
- Si con el otorgamiento pudiese presumirse que no proferirá expresiones o realizará acciones que afecten a las víctimas o a sus familiares.

f) Se establece un sistema de supervisión, a cargo de Gendarmería, que lleva a cabo un delegado de libertad condicional. Para tales efectos se establece un plan de intervención y reuniones periódicas con el beneficiado (a lo menos mensuales durante el primer año).

g) Se modifican las causales de revocación del beneficio, manteniéndose la causal de revocación por nuevo delito, asociándolas al incumplimiento del plan de intervención individual diseñado para la persona, por lo tanto, a la supervisión que realice el delegado de libertad condicional del caso, la que deberá ser informada a la Comisión de Libertad Condicional para que se pronuncie sobre la continuidad o revocación.

h) Se incorpora un deber para el Estado de promover y fortalecer la formación educacional, la capacitación y la colocación laboral de los beneficiados con libertad condicional.

2.2.2.- Población objetivo con Indulto General Conmutativo

Esta población está conformada por aquellas personas privadas de libertad beneficiadas por la Ley N°20.588, del 01 de junio de 2012, del Ministerio de Justicia, que establece indulto general. Esta norma establece en su artículo 1°, la concesión de un indulto general, consistente en la conmutación del saldo de las penas privativas de libertad que les resta por cumplir y, en su caso, de la multa, por la sujeción a la vigilancia de la autoridad en los términos del artículo 4°.

La población beneficiaria de esta ley consiste en:

1. Mujeres que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se encuentren privadas de libertad en virtud de una condena por sentencia ejecutoriada y que satisfagan las siguientes condiciones copulativa (artículo 1°):

a) Tener cumplidos dos tercios de la pena. Tratándose de mujeres con hijos cuya edad no supere los dos años, se entenderá cumplido este requisito si les faltaren hasta seis meses para enterar los dos tercios de la pena.

b) Haber observado, durante los tres últimos bimestres, una conducta sobresaliente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°19.856, que crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta.

c) Suscribir un compromiso de no volver a cometer un crimen o simple delito.

2. Las personas condenadas por sentencia ejecutoriada que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, estuvieren beneficiados con el permiso de salida controlada al medio libre (artículo 2°), y;

3. Las personas que, por sentencia ejecutoriada, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, estuvieren cumpliendo condena de reclusión nocturna (artículo 3°).

En los últimos dos casos, para acceder a este indulto, la persona condenada debió suscribir un compromiso de no volver a cometer un crimen o simple delito.

Esta norma establece además que las personas condenadas a las que se les hubiere conmutado la pena quedan sometidos a la vigilancia de la autoridad, consistente en fijar residencia en la oportunidad prevista en el artículo 7° de esta ley¹³, y firmar una vez al mes

¹³ Artículo 7° de la Ley N°20.588: "Corresponderá al Jefe de la Sección Control Penitenciario verificar la procedencia de los indultos que establece esta ley, previa constatación de los requisitos pertinentes en cada caso. Para tal efecto, cada interesado deberá firmar ante el Alcaide

por el lapso correspondiente al doble del tiempo que les reste para el cumplimiento de su condena, con un máximo de tres años siguientes a la concesión del indulto conmutativo, ante el Patronato de Reos más cercano a su domicilio o, en su defecto, ante el establecimiento de Gendarmería de Chile más cercano al domicilio que registre el condenado (artículo 4º).

Capítulo II

Marco conceptual

Este capítulo presenta las definiciones conceptuales que delimitan las actividades de reinserción social implementadas por el sistema postpenitenciario. Estas actividades tienen como población objetivo a todas las personas que atiende este sistema, por lo tanto, es fundamental que la oferta de servicios tome en consideración el apoyo postpenitenciario que requiere la población que ya cumplió su pena; como de la población que se encuentra en la última etapa del cumplimiento de condena y que está reintegrándose al medio libre. De este modo, al contemplar personas que se encuentran eliminando antecedentes penales, o bien, regularizando su situación prontuarial, o que su condena está siendo cumplida en la comunidad al obtener el beneficio de la libertad condicional o por un indulto conmutativo, se requiere de un marco conceptual que pueda abarcar la amplitud de acciones y estrategias de intervención que darán sustento a los procedimientos, acciones y programas dispuestos para la población postpenitenciaria.

A continuación, se presentan los lineamientos generales del enfoque de derechos, enfoque de género y los lineamientos técnicos específicos a la intervención postpenitenciaria¹⁴; todos los cuales orientarán el desarrollo de las actividades de reinserción de esta población.

1.- Enfoque de derecho

Como se explicó en el marco normativo, la prestación de servicios a la población objetivo del sistema postpenitenciario, es una acción que se enmarca y fundamenta en un enfoque de derechos, basado en un marco jurídico nacional e internacional, que apunta al resguardo de los derechos fundamentales de toda persona, señalados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Política de Chile y tratados internacionales que Chile ha suscrito (Comité Asesor para la Reinserción Social, 2018).

El enfoque basado en los derechos humanos es definido como un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que, desde el punto de vista normativo, está basado en las normas internacionales de derechos humanos y, desde el punto de vista operacional, está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos. Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el desigual reparto de poder que obstaculiza el desarrollo (ACNUDH, 2006, en Subsecretaría de Derechos Humanos, 2017). Esto se concreta en una labor central del sistema postpenitenciario que es el favorecimiento de la integración jurídica, ciudadana y social de las personas que han cumplido pena o que se encuentran cumpliendo algún beneficio en la comunidad (Martínez, 2008), como parte de las acciones que el Estado debe promover para restituir los derechos que pudieron verse afectados por el cumplimiento de una pena sustitutiva o privativa de libertad de la población que se acerca a los C.A.I.S. en busca de apoyo para su integración social.

Hay dos argumentos principales en favor del enfoque basado en los derechos humanos: un argumento intrínseco, que reconoce que esta perspectiva es la correcta desde el punto de vista moral o jurídico; y un argumento instrumental, que reconoce que un enfoque basado en los derechos conduce a resultados mejores y más sostenibles en materia de desarrollo humano (Agost, et al., 2013, en Subsecretaría de Derechos Humanos, 2017). Es, por tanto,

del establecimiento en que esté cumpliendo su condena o ante la Dirección Regional de Gendarmería de Chile, según se trate de una pena privativa o restrictiva de libertad, la respectiva solicitud, la que irá acompañada del compromiso de no volver a cometer un crimen o simple delito. La procedencia del indulto respectivo deberá ser comunicada por Gendarmería de Chile al tribunal encargado de la ejecución de penas que corresponda dentro del plazo de cinco días”.

¹⁴ El concepto de intervención postpenitenciaria hace referencia “al conjunto de acciones que favorecen la integración de la persona a la sociedad, ya sea en una fase final de cumplimiento o bien habiendo cumplido la condena” (Comité Asesor para la Reinserción Social, 2018, p. 15).

fundamental que el sistema postpenitenciario incorpore esta perspectiva y que promueva el desarrollo de capital humano y social en pos de una reinserción social efectiva, la que podría impactar en la reducción de la reincidencia futura.

En el caso específico de la población que se encuentra en el sistema postpenitenciario, es importante generar acciones que puedan garantizar el acceso a los servicios requeridos en materia de apoyo jurídico, a través de las oficinas de aclaración prontuaria, eliminación de antecedentes penales y el acceso a los otros beneficios legales contemplados al que puede acceder la población, así como el de recibir apoyo psicosocial diferenciada según los requerimientos de la población objetivo.

De este modo, se espera que los C.A.I.S. implementen acciones dirigidas al acompañamiento y entrega de información, orientación y ayuda para superar la experiencia carcelaria, que contemple el fortalecimiento de las habilidades sociales y laborales de cada persona, así como la restitución de la igualdad de condiciones jurídicas (Martínez, 2008). La entrega de un apoyo postpenitenciario en materia de educación y empleo, vivienda, acceso a la atención de salud física y mental, y el apoyo familiar son otras áreas que promueven el ejercicio de los derechos de esta población. Es así como se debe resguardar que las acciones que se realicen, en el marco del quehacer del sistema postpenitenciario, deben basarse en el ejercicio de derecho de las personas, de manera tal que impacte en el desarrollo individual, potenciando así el proceso de integración social.

El sistema postpenitenciario ha articulado una serie de mecanismos que propenden al ejercicio de derechos de la población que se encuentra adscrita al sistema, resguardando el cumplimiento de la normativa y ejerciendo acciones de control y supervisión, tanto a población que se encuentra condenada como a población que ya cumplió condena, facilitando el acceso a programa de reinserción de manera voluntaria.

2.- Enfoque de género

La población penitenciaria femenina y la población con diversidad y disidencias de género enfrentan importantes desafíos en su proceso de reinserción social. Debido, en gran parte, a las dificultades que enfrentan en el acceso a la justicia con igualdad de condiciones que los hombres, sus elevadas tasas de victimización por abuso físico o sexual antes del encarcelamiento, sus elevados niveles de vulnerabilidad por la alta discriminación con la que viven, el alto nivel de problemas de salud mental y dependencia a drogas o alcohol; y en el caso de las madres, su responsabilidad sobre el cuidado de sus hijos o familiares, la estigmatización experimentada en su retorno a la comunidad y el abandono de sus familias. Estas demandas particulares deben ser asumidas con un estándar diferente al aplicado a los hombres para evitar caer en una discriminación hacia la población que constituye un grupo vulnerable que requiere de un abordaje que sea sensible al género (UNODC, 2008; 2014). De acuerdo a lo anterior, el estándar debe estar determinado según las necesidades específicas del tipo de población con la que se está trabajando.

Incorporar un enfoque de género implica tener en cuenta el *conjunto de prácticas, símbolos, estereotipos, creencias, normas y valores sociales que se construyen a partir de la diferencia sexual, la que define y prescribe modos y posibilidades de ser y hacer diferenciados para hombres y mujeres desde la primera infancia y a lo largo del curso de la vida* (Programa VAE, 2018, p. 47). El cumplimiento de condena, y especialmente el paso por la cárcel, marca las trayectorias de las personas en forma distinta, por lo tanto, el retorno al medio libre y los procesos de reinserción social en general, también deben concebirse como un proceso marcado por el género.

De este modo, es fundamental que todas las acciones implementadas por el sistema postpenitenciario, y los C.A.I.S. en particular, tomen en consideración y se articulen en torno a las posibles diferencias en los factores de riesgo de reincidencia de la población atendida; como en la capacidad de respuesta a la intervención y adherencia a los servicios de apoyo postpenitenciario de ambas poblaciones.

También, requiere tener a la vista que las vías de involucramiento delictivo entre hombres, mujeres y población con identidad de género diferente, los que tienen a la base experiencias de vida marcadas por un contexto de género que define sus trayectorias vitales; y que estas particularidades deben incorporarse en los procesos de reinserción de las mujeres, de lo

contrario, pueden convertirse en obstáculos que dificultan la mantención de un estilo de vida alejado del delito (Salisbury y Van Voorhis, 2009). Esto supone reconocer rutas de ingreso y salida al delito diferenciadas entre hombres y el resto de la población, por lo que las estrategias de supervisión, apoyo y oferta programática deben considerar estas distinciones. Un manejo de casos que sea sensible al género se traduce en mejores resultados en términos de su paso por el sistema penal, como en sus niveles de reincidencia, e implica al menos:

- Tener en cuenta que los procesos de evaluación y planificación de los servicios o la intervención, según corresponda, deben recoger información respecto a las áreas que son más sensibles para las mujeres que se involucran en el delito, incluyendo sus historias de abuso y victimización, responsabilidades parentales, entre otras (Covington, 2007; Salisbury y Van Voorhis, 2009).
- Brindar apoyo y orientación que pueda ayudar a enfrentar las problemáticas que caracterizan a las mujeres que egresan del sistema penitenciario, tal como los problemas de salud física y mental, consumo de sustancias, experiencias traumáticas, dificultades económicas, habilidades para la vida y de empleabilidad (Covington, 2007; Blanchette & Brown, 2006; ONUDC, 2013).
- Disponer de programas amplios diseñados para ofrecer intervenciones que tomen en cuenta las necesidades específicas de las mujeres posterior a su liberación, desarrollar sus potencialidades y habilidades para la construcción de proyectos futuros que no reproduzcan situaciones de desigualdad o discriminación. Desde la perspectiva de los hombres, es importante que además, se promuevan cambios que impliquen una equidad en las relaciones de género desde la construcción de las masculinidades (VAE, 2018).

De este modo, las actividades de reinserción y/o apoyo en el tránsito a la comunidad desde un enfoque sensible al género implica pensar necesariamente en que las mujeres y la población con identidad de género diferente, que llegan a cometer delitos, se enfrentan a situaciones en su mayoría complejas. El reingreso a la sociedad supone desafíos importantes para esta población que sale de prisión. La salida de la cárcel en muchos casos implica volver a las situaciones de exclusión social que contribuyeron a la formación de caminos delictuales en sus vidas.

Por sobre estas condiciones de desventaja previas, deben enfrentarse con la carga adicional de poseer antecedentes penales, de haber roto o debilitado ciertos vínculos sociales y en el caso de las madres, haber pasado periodos desvinculadas de la crianza de sus hijos y alejadas de sus familias (Ministerio de Desarrollo Social, 2019). En este sentido, su proceso de reinserción, no puede estar solo determinado por las necesidades criminógenas, sino que debe incorporar las temáticas que aluden a la condición de mujer, maternidad en algunos casos e historias de vulnerabilidad, en otros de manera complementaria.

Es así, que las acciones de intervención que se establezcan en el plan de integración de este grupo, deben considerar el abordaje de elementos que están a la base de este tipo de población, de su situación vital y su condición de vulnerabilidad, al momento de evaluar aquellos factores que aluden a las necesidades criminógenas. Esta diferenciación supone otorgarles a las necesidades no criminógenas un peso equivalente o, en algunos casos, más importante que las necesidades criminógenas. Respecto a esto, la literatura reciente ha dado cuenta que los factores de riesgo y las necesidades de intervención están marcados por historias de maltrato, violencia y victimización e historias de marginalidad, por lo que el proceso de reinserción de esta población debe dar cuenta de esta diferenciación, la que explica y fundamenta los patrones delictuales (Larroulet, et al. 2020). Tener en cuenta estos aspectos al momento de la intervención, podría incidir en la capacidad de respuesta de las mujeres al momento de abordar otras áreas en el proceso, ya que trabajar estas carencias podría ser beneficioso al comenzar a trabajar las necesidades criminógenas más complejas.

Finalmente, y en el caso específico de la población femenina, recordar que los programas que solo están focalizados en los factores criminógenos son menos efectivos en disminuir la reincidencia en las mujeres. Esto, no solo "porque se centran en factores menos relevantes o que operan en forma diferente para las mujeres, sino porque no se ocupan de aquellos factores que son exclusivos o más relevantes para ellas" (Hedderman, 2004, p.241).

3.- Lineamientos técnicos de la intervención postpenitenciaria

A continuación, se presentan los principales enfoques que orientan la intervención postpenitenciaria para las distintas poblaciones que forman parte de este sistema, más allá del enfoque de derecho y la perspectiva sensible al género que son los marcos comprensivos transversales a todo el actuar del sistema postpenitenciario.

En primer lugar, es importante mencionar que la reinserción social es entendida como el proceso hacia la plena integración a la sociedad de una persona que ha infringido la ley penal. Es, además, una tarea especializada que debe incidir en la mayor cantidad de factores que han contribuido al involucramiento delictivo, con el objetivo de disminuir la reincidencia y promover la integración social, teniendo como uno de sus principales principios la restitución de sus derechos (Ministerio de Justicia y DDHH, 2017).

Como una manera de organizar los servicios provistos y los objetivos que persiguen en el proceso de reinserción social, se distinguen dos grandes componentes que *delimitan las áreas y la amplitud de las acciones de intervención postpenitenciarias para estructurar la oferta en función de los tipos de población y sus necesidades específicas* (Ministerio de Justicia y DDHH, 2017; FPC-CESC, 2015):

- **Componente de derecho:** Refiere al conjunto de acciones cuyo acceso debe promoverse para cautelar los derechos de la población, entre las cuales se encuentra el acceso a salud, educación, deporte, cultura, entre otros (United Nations Office on Drugs and Crime, 2007, en FPC-CESC, 2015). Este componente no está dirigido directamente a reducir el riesgo de reincidencia, sino a reducir los efectos negativos que la sanción produjo en el sujeto y a facilitar su inserción social, o bien, a incidir de manera indirecta, fortaleciendo los soportes sociales que favorecen el abandono de la actividad delictual. Este componente apunta a abordar todos aquellos aspectos que son relevantes en el desarrollo de vida de las personas, lo que impactará directamente en algunos factores de riesgo/necesidad. Las prestaciones consideradas en este componente son gestionadas por medio de convenios y derivaciones a la red, acciones que realizan los C.A.I.S. a modo de resguardar el acceso de las personas a educación, empleabilidad (capacitación y colocación laboral), acceso a la salud, derivación a programas de tratamiento de drogas y alcohol, asistencia jurídica y apoyo familiar y comunitario.
- **Componente de intervención:** Refiere al conjunto de acciones focalizadas en abordar los factores criminógenos vinculados con el delito, con la finalidad de disminuir el riesgo de reincidencia. Este componente es aplicable a subgrupos de la población del sistema postpenitenciario, definidos a partir de los criterios de focalización, dados por el tipo de vinculación con el sistema penitenciario y sus necesidades de intervención. Las prestaciones de este componente se traducen -mayoritaria pero no exclusivamente- a la entrega de una oferta de programa con evidencia de resultados que responden a las mejores prácticas internacionales en la materia y al enfoque de género. Por lo general, consisten en intervención psicosocial criminológica en el área de los delitos sexuales, violencia intrafamiliar, conducta violenta, actitudes procriminales.

En términos de los enfoques que orientan la intervención postpenitenciaria se integran de manera transversal los lineamientos del modelo RNR con el paradigma del desistimiento delictivo como marcos comprensivos para el desarrollo de las actividades de reinserción.

Por un lado, el modelo RNR propone una serie de principios que permiten estructurar la intervención postpenitenciaria, con lineamientos claros para priorizar la atención de los casos, las necesidades de intervención y el desarrollo de programas a partir de las prácticas efectivas para disminuir la reincidencia (Serin y Lloyd, 2017). Como complemento, el paradigma del desistimiento busca entender los mecanismos que promueven los cambios individuales en el comportamiento delictivo, enfatizando en la necesidad de involucrar a las personas en este cambio, con foco en la agencia individual, en sus recursos y potencialidades, por medio de un proceso de acompañamiento que posibilite la visualización de estos recursos y habilidades. De este modo, es el desarrollo de capital humano (capacidades) y capital social (colaboración y vinculación con el entorno en busca de un fin) que contribuye al abandono paulatino de un estilo de vida delictivo y, por tanto, disminuye su reincidencia.

3.1. Modelo Riesgo, Necesidad y Responsividad (RNR)

El modelo RNR es uno de los modelos más influyentes para la intervención en contexto penitenciario orientada a disminuir la reincidencia delictiva. Es también uno de los más estudiados por lo que su aplicabilidad para población que cumple condena cuenta con sustantiva evidencia que ha insumado el desarrollo de las prácticas efectivas en materia de reinserción social (Gendreau, 1996).

Los principios del modelo RNR sintetizan el conocimiento en materia criminológica, otorgando un marco teórico fundamentado en la teoría del aprendizaje social para indicar a quién, qué y cómo desarrollar programas e intervenciones que cambien las asociaciones, actitudes y refuerzos vinculados con el delito (Andrews y Bonta, 2010). De esta manera el modelo no solo entrega una comprensión del fenómeno, sino que además orienta la forma de gestionar el cambio orientado a disminuir reincidencia, a partir de los siguientes principios, que en mayor medida se acercan a los procesos de intervención que requiere la diversa población del sistema postpenitenciario, en particular, aquella que participa del componente de intervención (Andrews y Bonta, 2010):

a) **Respeto por la persona:** el proceso de intervención no solo debe ajustarse a la normativa vigente, ya que un aspecto fundamental es la incorporación de la autonomía personal y el respeto humano, ético, justo y legal a las personas con quienes se interviene. Las relaciones humanas se basan en el respeto, por lo cual las personas que trabajan con población condenadas, deben ser entusiastas, colaboradoras y valorar la autonomía personal en su proceso de cambio.

b) **Teoría del comportamiento delictivo:** Todo proceso de intervención debe estar fundamentada a partir de una base teórica que dé cuenta de la comprensión psicológica del delito y el comportamiento de las personas que cometen delitos. (Andrews y Bonta, 2010). Los principios generales del modelo, apuntan a establecer parámetros y principios rectores en cuanto a la importancia de respetar la especificidad de cada persona. En el caso específico de la población del sistema postpenitenciario, se espera una ética del cuidado (Andrews y Bonta, 2010) donde el contexto, la vinculación con el sistema y la situación particular de cada persona, debe ser considerada durante todo el tiempo que se mantenga vinculada con los C.A.I.S.

Por otro lado, se espera que la intervención tenga como fundamento estrategias y prácticas efectivas, que se describen en los siguientes principios (Andrews y Bonta, 2010):

a) **Riesgo:** consiste en ajustar la intervención al nivel de riesgo de reincidencia, lo que significa que la intensidad de las actividades de intervención, debe ser consistentes con el nivel de riesgo de reincidencia. Se debe evitar la incorporación de población con alto y bajo riesgo de reincidencia en un mismo grupo para desarrollar las intervenciones.

b) **Necesidad:** este principio distingue entre las necesidades criminógenas y no criminógenas. En primer lugar, destaca que las acciones de intervención deben privilegiar el abordaje de los factores de riesgo dinámicos que impactan en el nivel de riesgo de reincidencia, tal como las actitudes procriminales, patrón antisocial, pares antisociales, uso del tiempo libre, consumo de sustancias, etc. Junto a ello, es importante prestar atención a las necesidades no criminógenas, ya que estas también constituyen factores problemáticos que podrían entorpecer el proceso de intervención de las personas. El objetivo es lograr avanzar hacia la modificación de estas necesidades para transformarlas en fortalezas para el desenvolvimiento prosocial de las personas.

c) **Responsividad:** Implica (1) Privilegiar el uso de herramientas cognitivo-conductuales y del aprendizaje social, favorecen los cambios en los procesos de intervención. Estas estrategias están dadas por el desarrollo de habilidades, juego de rol y modelaje prosocial que, posibilitan la modificación del pensamiento delictivo y permiten el refuerzo de logros específicos. (2) Ajustar el proceso de intervención a las características personales, sociales y culturales de la persona. De esta manera, será posible que las personas respondan mejor a la intervención, con resultados que tendrán impacto y sentido en la población objetivo. Tomar en cuenta las necesidades asociadas al género, la cultura, así como la motivación, expectativas, aptitudes, habilidades, etc. permiten establecer relaciones de calidad; y además permite visualizar las dificultades que pueden interferir con la motivación y la adherencia a la intervención.

d) Intervención multimodal: se debe tener en cuenta la amplitud de necesidades criminógenas como no criminógenas al trabajar con las distintas poblaciones. Estas últimas no deben descuidarse ya que pueden operar como barreras para la consolidación de los cambios prosociales. Cuando se trabaja con población es importante considerar que las necesidades criminógenas son un área prioritaria, así como también aquellas necesidades no criminógenas que se encuentran a la base de la condición de vida de las personas y que por lo tanto constituyen un problema en su desarrollo individual. Estos no se deben descuidar y deben constituir elementos centrales durante la intervención.

e) Factores protectores o fortalezas: son entendidas como los recursos individuales que promueven el cambio, facilitan los procesos de intervención y promueven la disminución de la reincidencia. En general, se entienden como factores que podrían contrarrestar un factor de riesgo, en la medida que se aborden durante el proceso de intervención, ya que dan cuenta de un modo de funcionamiento asociado a características individuales, situación familiar, entorno social o su situación laboral.

f) Evaluación estructurada: el uso de instrumentos de evaluación que estén debidamente validados para la conducta que se busca modificar. Lo anterior implica el uso de una herramienta que facilitará la pesquisa y la posterior planificación y gestión del caso.

g) Discrecionalidad profesional: este principio establece la importancia de utilizar el juicio profesional estructurado en la toma de decisiones. Si bien es cierto, los principios arriba descritos son importante para cualquier proceso de intervención, es fundamental que cualquier decisión se tome también a partir de experiencia profesional. Esto se traduce en que para algunos casos puede ser más adecuado utilizar otros enfoques y prácticas que las sugeridas en el Modelo RNR, ya sea, por el uso del juicio profesional o por disposiciones administrativas establecidas por el Servicio.

Todo lo anterior, tendrá su aplicación en alguna de las actividades de reinserción del sistema postpenitenciario, las que serán descritas en el capítulo de procesos técnicos. De este modo, se espera que estos principios orienten la forma en que se articularán acciones en torno a la intervención postpenitenciaria, por medio de un proceso sistemático de acciones, ya que el modelo y sus principios se han diseñado para la correcta toma de decisiones, en el contexto de la gestión de caso para organizar y ejecutar la oferta programática.

3.2. Paradigma del desistimiento delictivo

El concepto de desistimiento refiere al proceso por el cual las personas abandonan sus actividades delictivas a lo largo de la vida. En consecuencia, se focaliza especialmente en conocer y explicar los procesos y mecanismos que subyacen al cese delictivo (Maruna y Farrall, 2004).

Agrupar un conjunto de teorías que ofrecen explicaciones para entender los motivos que llevan a las personas involucradas en el delito a la adopción de un estilo convencional, encontrando que estas rutas se vinculan con cambios dinámicos en las trayectorias de vida en la que intervienen procesos madurativos, subjetivos y estructurales. En otras palabras, promueve la agencia individual, los recursos personales, sociales, familiares y, oportunidades del entorno como elementos centrales del cese delictivo y que deben incorporarse a las prácticas orientadas a favorecer la reinserción social.

Es una perspectiva que se focaliza en las fortalezas en contraposición a los factores de riesgo, pero además de ello, pone el acento en los mecanismos de control social que apoyan los procesos de desistencia, entre los que se encuentran: las relaciones de pareja, encontrar un empleo estable y gratificante, ser padre o madre y rodearse de amistades apoyen un proceso de desvinculación con el delito. Estos vínculos favorecerían cambios en los patrones de comportamiento, los cuales podrían mantenerse en el tiempo si la persona asume un rol activo en la creación de nuevas oportunidades de participación social a través de la generación de capital humano y social (Sampson y Laub, 2016).

Las prácticas orientadas desde el desistimiento ofrecen una comprensión de los procesos a la base de los cambios individuales, poniendo como eje central la mirada en las personas, en sus fortalezas y recursos más que en la gestión de intervenciones dirigidas a poblaciones de alto riesgo que experimentan múltiples desafíos para abandonar el delito (Serin y Lloyd,

2017). Es un paradigma crítico de los procesos de intervención que se articulan solo en torno a la evaluación del riesgo de reincidencia y, por lo tanto, de la gestión de caso que toma como *único* criterio el nivel de riesgo para definir las actividades de reinserción, descuidando las necesidades e intereses que manifiestan las personas. Por lo demás, centrarse solamente en evaluar la reincidencia, puede encubrir otros cambios que ocurren a nivel individual que también son indicativos de que la persona ha iniciado un proceso de cambio (Droppelmann, 2015).

En este sentido, y respeto a su aplicabilidad en el contexto del proceso de reinserción social, se espera que la intervención esté orientada a recoger en cada una de sus etapas los logros y experiencias de cada persona, lo que supone poner la mirada y el foco en los recursos con los que cuenta la población para lograr los cambios. A su vez, se debe tener en cuenta que el abandono del delito es un proceso que ocurre en forma paulatina, con idas y venidas o con recaídas en la actividad delictiva. Se caracteriza por la ambigüedad, ya que las personas suelen manifestar dudas sobre sus capacidades para lograr los cambios necesarios para evitar volver a delinquir, cuestionando muchas veces, las ganancias y pérdidas de asumir un nuevo estilo de vida (Bottoms y Shapland, 2011). Esto supone que el profesional a cargo del proceso de intervención, debe reconocer las habilidades individuales, por medio de un proceso de supervisión y acompañamiento donde el vínculo que se establece, permitirá no solo visualizar en las personas sus habilidades, sino que además permitirá motivar el cambio hacia nuevas oportunidades de desarrollo individual, potenciando aquellos recursos con los que se cuenta. Así, el vínculo que se establece con el profesional a cargo del caso, posibilita el reconocimiento del desarrollo de capacidades de cada persona, al demostrar el sentido que hay detrás del proceso para la reinserción. De esta manera la supervisión debe ser en lo posible, estable durante el tiempo en que transcurre el proceso de intervención con la intención de no afectar la motivación y las oportunidades que se van desarrollando durante el proceso.

Hoy en día hay consenso sobre la importancia de entender los mecanismos que subyacen a la conducta delictiva y por sobre, entender que el cambio no siempre ocurrirá a través de intervenciones estructuradas y bien diseñadas, si no se considera que los procesos de enganche y desenganche delictivo son mucho más complejos. De este modo, junto con comprender el significado de los factores de riesgo y las necesidades criminógenas y no criminógenas, es importante identificar y contextualizar el rol que ejercen los factores protectores en este proceso, identificando de qué manera pueden mitigar el impacto de los factores de riesgo y contribuir a la obtención de resultados positivos (Andrews y Bonta, 2010). En esta línea, los postulados del paradigma del desistimiento han identificado que el cambio hacia lo prosocial, puede facilitarse cuando se incorporan prácticas que otorgan una mayor individualización a los procesos estructurados de reinserción. Por otra parte, y como ya fue planteado con anterioridad, aunque los factores de riesgo y necesidades criminógenas no pueden ignorarse, también es importante que no constituyan el único foco de trabajo, debiendo con esto incorporar todos aquellos aspectos que se relacionan a la conducta delictiva y que son considerados como necesidades no criminógenas y que están a la base de las condiciones individuales de cada población. La investigación reciente ha identificado que la incorporación de los factores protectores, los recursos y fortalezas de las personas ayudan a prevenir el desarrollo de resultados negativos e impulsan procesos de cambio que se mantienen en el tiempo (Baker, 2017; McNeill, y Weaver, 2010).

Para McNeill (2016), el cambio hacia la conducta prosocial es posible, y en la medida que se realiza acompañado de un proceso estructurado, basado y enfocado en los diferentes ámbitos de la vida personal bajo la lógica de que cada sujeto tiene sus propias necesidades y capacidades, que deben potenciarse bajo obtener mejores resultados que no solo impacten en la reincidencia, sino que sean significativos para la persona. Por lo tanto, más que imponer es importante negociar de qué manera es posible ofrecer el apoyo que requiere la persona de una manera integral.

Asimismo, la orientación y ayuda que los profesionales puedan ofrecer a los problemas diarios que enfrentan las personas que requieren un apoyo postpenitenciario ha sido visibilizado como un aspecto central en esta etapa crítica del proceso de reinserción. Consideraciones como que sus profesionales a cargo, los traten como personas y no como un número o un caso, que conozcan sus vidas y muestren interés por su bienestar; pero que a la vez mantengan cierta distancia y no establezcan una relación de amistad son características de la relación de trabajo que pueden ayudar a iniciar procesos de cambio (McNeill, 2016). Las perspectivas actuales acerca de la calidad de la supervisión y/o del

apoyo postpenitenciario están bastante influenciadas por la evidencia de las últimas dos décadas respecto a qué ayuda a que las personas desistan del delito (Appleton, 2010). Es así que hoy se sabe que el proceso de acompañamiento no puede ser el mismo para todas las personas, ya que las estrategias a utilizar para fomentar la adherencia deben ser diferenciadas y tener una orientación hacia el futuro, y a las perspectivas que éste pueda traer, más que focalizarse en el pasado (Farrall, 2002).

Es por lo anterior, que el modelo y los principios ya expuestos, configuran un marco conceptual adecuado para el proceso de intervención de la población del sistema postpenitenciario, el cual permite estructurar la intervención, de acuerdo a los tipos de población del sistema, ya que al ser una población diversa que cuenta con características distintas y por lo tanto necesidades diferentes, se determinarán las acciones tales como: la evaluación de caso, la supervisión, la planificación de la intervención, etc.

Capítulo III

Procesos administrativos asociados al control de beneficios de reinserción

El control de Beneficios de Reinserción dice relación con el control estadístico y procedimental de las medidas postpenitenciarias, cuya población objetivo corresponde a:

- Personas adscritas al Decreto Ley N°409.
- Personas que requieran realizar aclaración prontuaria.
- Personas que se encuentran con indulto conmutativo.
- Personas que se encuentran con el beneficio de la libertad condicional.

Este control es llevado a cabo por la sección de Control de Beneficios de Reinserción, la cual tiene como misión el control estadístico y procedimental de las medidas postpenitenciarias, además de ejercer como ente técnico en capacidad de brindar apoyo y orientación normativa y administrativa a las unidades de control de beneficios de reinserción a lo largo del país. Su objetivo está centrado en brindar un adecuado soporte tecnológico y orientación legal y administrativa a las unidades de control para que éstas puedan brindar un servicio confiable, de calidad y eficiencia a los ciudadanos que lo requieran, garantizando un adecuado cumplimiento de sus obligaciones Postpenitenciarias y el ejercicio de sus derechos ciudadanos, en pos de una reinserción social exitosa y permanente en el tiempo.

Los procesos administrativos involucrados en la gestión operativa del Control de Beneficios de Reinserción del Sistema Postpenitenciario pueden resumirse básicamente en tres fases comunes a todas ellas: Ingreso, Control y Egreso. Esto, puesto que poseen similares mecanismos de verificación administrativa y de certificación de controles. No obstante compartir hitos comunes, se diferencian entre sí en sus subprocesos y en el tiempo que estos implican, determinados por la normativa legal vigente que los rige y que se manifiesta en actos administrativos particulares y acentos diferentes, que a su vez determinan diferencias en los puntos críticos de cada fase.

A continuación, se describirán los procedimientos específicos a seguir respecto de cada población objetivo, los cuales se encuentran respaldados en las normas e instrucciones¹⁵ que los rigen, algunas de las cuales han sido revisadas en capítulos anteriores. En cada caso se entregará una breve explicación acompañado de un diagrama explicativo y se dará cuenta de sus fases de tramitación.

Consideraciones Generales:

a) Cada diagrama contempla el elemento "Estadística", el que corresponde a la información cuantitativa, que considera: total de usuarios en control, distribución de los movimientos del periodo (ingresos por tipo, egresos por tipo, resultado de la tramitación de solicitudes, etc.) que debe ser remitida al Departamento Postpenitenciario en formatos específicos para su consolidación, validación y estudio, respecto a las distintas poblaciones atendidas, según lo que se indique en las Orientaciones Técnicas anuales. Ello, con el objetivo de aportar antecedentes que posibiliten el análisis de un escenario determinado y, por consiguiente, apoyen y fundamenten la toma de decisiones (la evolución de las Metas de Incentivo

¹⁵ Compendios de Normas de Indulto General Conmutativo y de Libertad Condicional" y "Compendio de Normas e Instrucciones para la aplicación del Decreto Ley N°409.

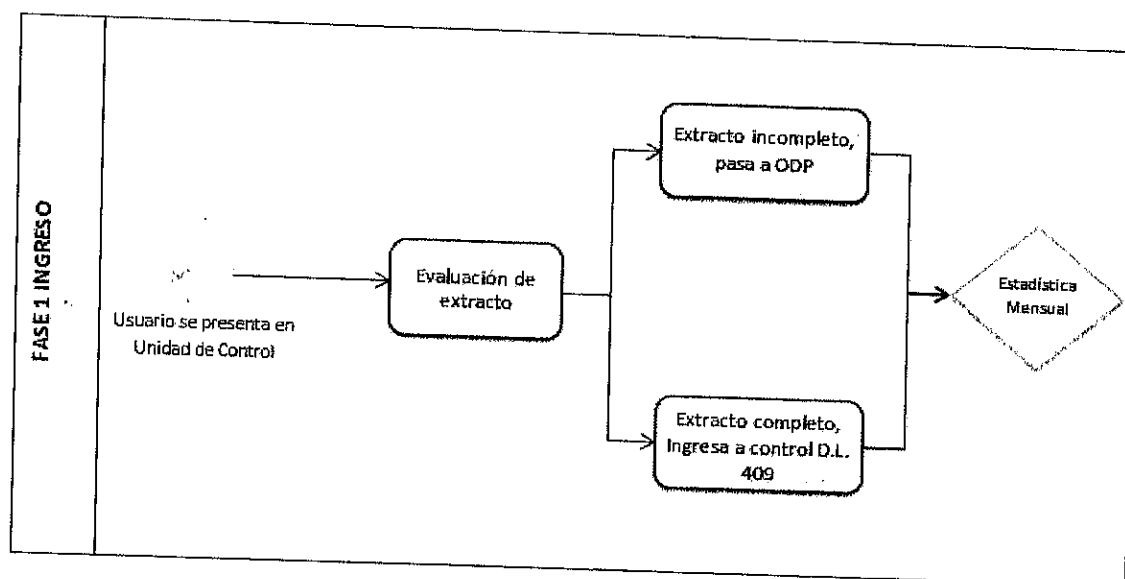
Colectivo (MIC) o el comportamiento de algunos indicadores de las medidas de control son un claro ejemplo de la importancia de esta información).

b) Los procesos de flujo de información estadísticos son definidos a partir del desarrollo de procedimientos administrativos específicos, los que podrán modificarse a partir de modificaciones a los marcos legales y normativos, la implementación de medios tecnológicos y de su cobertura a nivel nacional.

1.- Procedimientos administrativos asociados al control de Personas adscritas al Decreto Ley N°409.

Gendarmería de Chile es la Institución que tiene el mandato legal de la aplicación y control del Decreto Ley N°409, de 1932, a nivel nacional. Dicho control se realiza en los Centros de Apoyo para la Integración Social (C.A.I.S.) o, en caso de que éstos no tengan cobertura, el control se podrá realizar en los Centros de Reinserción Social (C.R.S.) o Unidades Penales. Las respectivas oficinas de Decreto Ley N°409, cuentan con funcionarios/as que son operadores del control de la norma (en adelante Operador/a de Decreto Ley N°409), y que ejecutan todos los procedimientos administrativos ligados a las fases (ingreso-control-egreso) que se señalan a continuación:

1.1.- FASE DE INGRESO:



a) Presentación del Usuario/a a la Unidad de Control: Se refiere al acto voluntario de concurrencia del/la usuario/a a un C.A.I.S. u otro establecimiento dependiente de Gendarmería, quien expresa su intención de adscribirse a la eliminación de antecedentes penales a través del Decreto Ley N°409. El Operador/a de Decreto Ley N°409, orienta e informa sobre requisitos que la Ley contempla para optar a este beneficio y solicita vía oficio, al Registro Civil e Identificación, el extracto de filiación y antecedentes, con la finalidad de evaluar dicho extracto.

b) Evaluación de Extracto: Análisis de las Anotaciones Penales registradas en el Extracto de Filiación y Antecedentes Penales que permite verificar si tanto la condena como el cumplimiento de la/s pena/s principal/es se ha cumplido. De no ser posible dicha verificación, el/la usuario/a podrá hacer uso del beneficio del ingreso a O.D.P. (Oficina de Diagnóstico Prontuario). Esta evaluación debe ser realizada por el Operador/a de Decreto Ley N°409, en un plazo no superior a 5 días hábiles. Este análisis, puede arrojar 2 resultados:

- **Extracto Incompleto, Pasa a Oficina de Diagnóstico Prontuario:** Verificación de que en el Extracto de Filiación no consta la acreditación del cumplimiento de la/s condena/s impuesta/s, por lo que se deriva administrativamente a la Oficina de

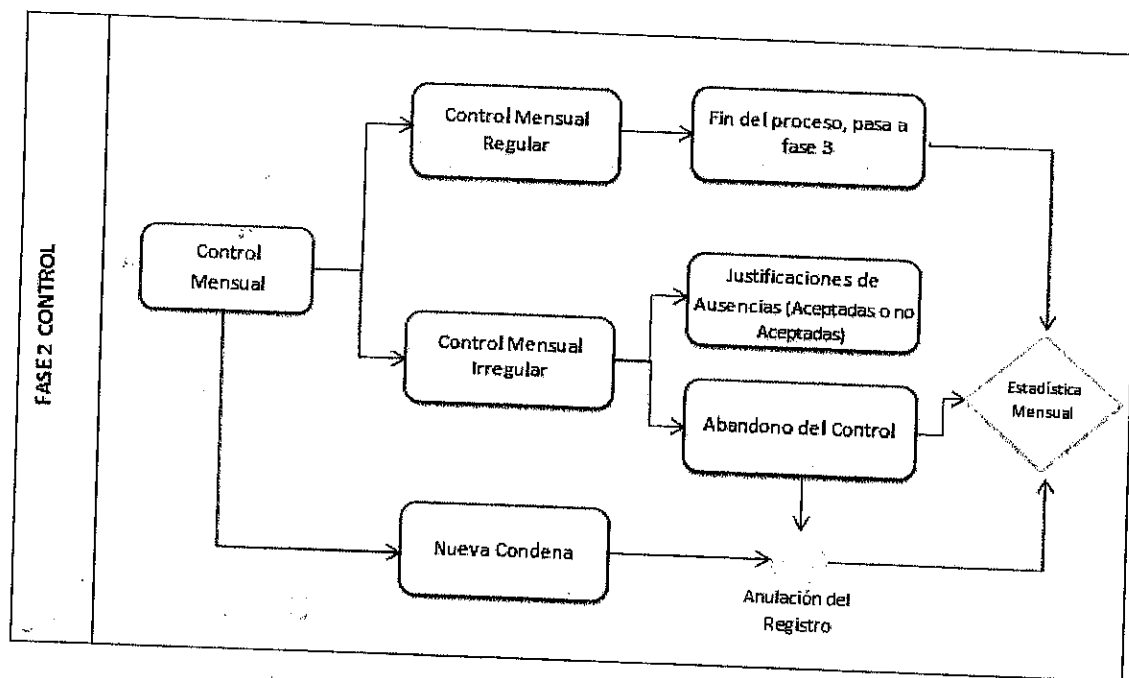
Diagnostico Prontuario, con el objetivo de aclarar el cumplimiento de las causas que se encuentran sin certificación de cumplimiento de condena.

- **Extracto Completo, Ingres a Control Decreto Ley N°409:** En el Extracto de Filiación se verifica que si consta la acreditación del cumplimiento de la/s condena/s impuesta/s o que respecto a la/s pena/s, se encuentra extinguida su responsabilidad y puede ingresar al proceso de Eliminación de Antecedentes via Decreto Ley N°409. El Operador/a de Decreto Ley N°409 realiza el ingreso administrativo del/la usuario/a y se le indica que el control es mensual durante 2 años para usuarios/as primerizos y de 5 años para usuarios/as reincidentes. Además, se registran sus antecedentes civiles y penales en el libro de control correspondiente y en el sistema informático. Se deberá orientar e informar al usuario/a acerca de los alcances del Decreto Ley N°409, sus derechos y obligaciones a través de una cartilla. En el mismo acto se le señala de manera verbal o por escrito sobre los horarios de atención y los datos del libro de control (Tomo-año-folio).

c) Reingreso: Corresponde a aquellos/as usuarios/as que, habiendo realizado el abandono del control, es dado de baja en los registros y que, a posterior manifiesta su voluntad de retomar sus controles, solicitando la recuperación de firmas que poseyese, siendo aquello validado por el Consejo Técnico.

1.2.- FASE DE CONTROL:

En esta fase, el procedimiento administrativo asociado al control del proceso de eliminación de antecedentes, se traduce en las presentaciones, una vez al mes, a control en el establecimiento correspondiente, es decir, C.A.I.S., C.R.S. o Unidades Penales, durante dos años (25 controles) si tiene una condena, y cinco años (61 controles) si ha sido condenado dos o más veces. Cuenta además, con la posibilidad de acceder a Programas de Intervención administrados por el Subsistema, de acuerdo a sus necesidades y cupos disponibles.



a) **Control Mensual:** Dice relación con la sujeción voluntaria del/la usuario/a a una firma mensual u otro medio dispuesto para tal efecto, en un establecimiento de Gendarmería al que se encuentra adscrito, o bien uno transitorio. Este control puede ser:

- **Control Mensual Regular:** proceso de firma mensual en que no se verifican ausencias injustificadas al control, el que se extenderá por 2 ó 5 años según correspondiera.

- **Control Mensual Irregular:** proceso de firma mensual en que el Operador/a de Decreto Ley N°409 verifica que el/la usuario/a no se presentó a su firma mensual, sin presentar justificación a la/s ausencia/s, retornando al mes siguiente; o bien se ausentó por un período consecutivo igual a 3 meses sin justificación.

Respecto de la **Justificación de Ausencia/s (aceptadas o no aceptadas)**, cabe señalar que el/la usuario/a que accede al Decreto Ley N°409 se compromete a presentarse mensualmente en la unidad de control asignada durante el periodo de 2 o 5 años según corresponda. En la eventualidad de que el usuario/a no pudiera cumplir con esta condición, en el siguiente control al que se presente deberá justificar su ausencia, explicándole al Operador/a Decreto Ley N°409 las razones por la cuales no habría concurrido a su/s control/es. Dicha explicación puede ser presentada de forma verbal o a través de un documento¹⁶ que acredite la imposibilidad de presentarse (ej. usuario por asuntos laborales se ausenta de su región por un mes).

b) **Abandono del Control:** Se considera abandono cuando el/la usuario/a no se presenta durante 3 o más meses consecutivos a la firma voluntaria correspondiente al Decreto Ley N°409. "En estos casos, que pueden alcanzar hasta los tres meses, también podrán ser justificadas las inasistencias de la misma forma señalada en el punto anterior, sin embargo, el/la encargado/a del periodo de observación del Decreto Ley N°409, debe resolver en conjunto con el Consejo Técnico de la respectiva Unidad de Control. Además, en estos casos debe levantarse un Acta que establezca la situación por la que el usuario se ausentó a uno o más controles, y posteriormente se consignará en el libro y hoja de control del usuario, la fecha y el número de esta Acta que autoriza el reinicio del periodo de observación y que consigna las justificaciones" (Manual de Procedimientos Decreto Ley N°409. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 2010).

El abandono del control tiene por efecto la **Anulación Administrativa**, y que influye sólo en la vigencia de usuarios/as informados/as mensualmente en la estadística, ya que, en un eventual reingreso el/la usuario/a podría seguir con su proceso, sumando sus controles a los realizados previo abandono.

c) **Nueva Condena:** Comisión de una falta, simple delito o crimen con Sentencia Firme y Ejecutoriada por parte del Tribunal Penal competente. Por lo anterior, el operador/a de manera permanente deberá revisar los sistemas informáticos de Gendarmería de Chile o la página web de Poder Judicial. De este modo, sólo se considera como nueva condena a aquellas sanciones penales y no a las infracciones como las de conducción u otras, que son aplicadas por el Juez de Policía Local.

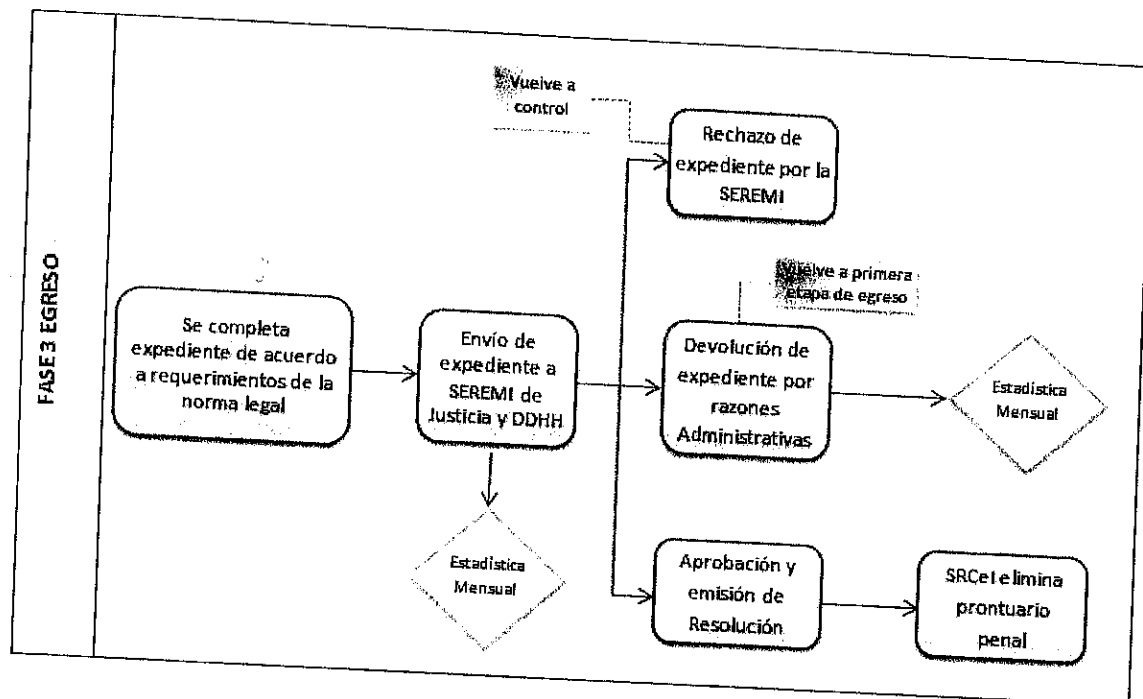
El hecho de recibir una nueva condena tiene por efecto la **Anulación Legal del Registro**, que impide considerar los controles efectuados en establecimientos de Gendarmería para el contacto de 2 o 5 años exigidos por la norma. El Operador/a de Decreto Ley N°409 procede a la anulación legal, la cual se realiza consignando el RUC de la nueva causa, Tribunal y fecha de la resolución, adjuntando los medios de verificación disponibles (extracto de filiación, copia de sentencia, etc.) al expediente del/la usuario/a.

d) **Fin del Proceso de Control:** Corresponde al término de los controles mensuales del Decreto Ley N°409, de acuerdo al periodo establecido de dos o cinco años de control, lo que implica que el usuario/a avanza a fase de egreso.

1.3.- FASE DE EGRESO:

Esta fase dice relación con el proceso de cierre administrativo y normativo del periodo de control del usuario/a adscrito/a al Decreto Ley N°409: En esta fase la unidad de control deberá brindar el apoyo correspondiente a los/as usuarios/as, en la obtención de la documentación requerida, para cumplir con los requisitos finales establecidos en la citada norma.

¹⁶ Según el Manual de Procedimientos Decreto Ley N°409, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2010), en estos casos, las inasistencias podrán ser justificadas mediante certificados médicos; certificados de trabajo; certificados de estudios; declaraciones juradas simples (sin testigos) o justificación verbal; y quien registra es el encargado del periodo de observación del Decreto Ley N°409.



La oficina a cargo del Decreto Ley N°409, tiene el deber de preparar el expediente completo, para su envío a la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos (SEREMI). Este proceso consta de los siguientes pasos:

- a) Se completa el Expediente según Requerimientos Legal: Dice relación con el acto en que los funcionarios de la oficina Decreto Ley N°409 acreditan el cumplimiento del usuario/a de las exigencias contempladas en el Art. 2 del Decreto Ley N°409. A continuación, se listan los requisitos estipulados por ley y los documentos que validan/certifican el cumplimiento de cada uno de estos:

Tabla 1: Requisitos del Art. 2° del D.L. N°409 y medios de verificación

REQUISITO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Acreditación del Control de Firmas	1. Certificado de acreditación del periodo de control ¹⁷ .
Acreditación de Estudios ¹⁸	2. Libro de control de Firma.
	1. Título Profesional o Técnico
	2. Certificado del Mineduc.
	3. Diploma.
	4. Certificado de Alumno Regular.
Acreditación de Residencia	5. Otro tipo de documento que permita dar cuenta del cumplimiento del requisito de escolaridad exigido. ¹⁹
	1. Certificado de residencia extendido por Carabineros.
Acreditación de Profesión u oficio ²⁰	2. Certificado de residencia extendido por Junta de vecinos u otros documentos (recibos de luz agua, etc.).
	1. Título Profesional o Técnico
	2. Contrato de trabajo.
	3. Liquidaciones de sueldo.
	4. Iniciación de actividades.
	5. Patente municipal.
	6. Declaración Jurada (simple sin testigos).
	7. Boleta de honorarios.

¹⁷ Considerar la regulación establecida en el artículo 13 inciso 5° de la Ley N°18.216, en relación a los funcionarios de FF.AA. y Carabineros en servicio, pues el tiempo de sujeción a la vigilancia del Juez Institucional o de permanencia en reclusión parcial en la unidad militar o policial correspondiente, se computará como periodo sometido a la vigilancia de Gendarmería.

¹⁸ Quedan exceptuados de este requisito las personas que, por su Edad o Estado físico, según Certificado Médico, no estén en condiciones de estudiar. Sin embargo, esta una facultad privativa del/la Seremi de Justicia y DDHH.

¹⁹ En aquellos casos que no existan tales antecedentes, se puede realizar una Prueba de Lectoescritura, por un profesor del C.A.I.S. o Establecimiento penitenciario, que acredite conocimientos equivalentes a 4° básico.

²⁰ Quedan exceptuados de este requisito las personas que, por su Edad o Estado físico, según Certificado Médico, no estén en condiciones de trabajar. Sin embargo, esta una facultad privativa del/la Seremi de Justicia y DDHH.

	8. Certificado laboral del empleador.
	9. Declaración de impuestos a la Renta.
	10. Colilla de pago de pensión.
	11. Comprobante del pago del IVA.
	12. Certificado de remuneraciones
	13. Certificación del/la Jefe/a de la Unidad u otro. ²¹
Acreditación del cumplimiento de condena y pago de multas	1. Extracto de filiación y Antecedentes Penales.
	2. Copia autorizada de la sentencia ejecutoriada o Certificado de Cumplimiento de condena requerido al Tribunal respectivo, en caso de que el Extracto de Filiación no registre el cumplimiento de la/s condena/s impuesta/s.
	3. Certificaciones.
Acreditación de no haber sido condenado durante el tiempo de control y hasta la fecha de dictar la resolución respectiva	1. Extracto de Filiación y Antecedentes ²²
Voluntariedad del/la Interesado/a.	2. Solicitud firmada por el/la interesado/a para eliminar antecedentes.

b) Envío de la solicitud (acompañada del expediente) a Seremi de Justicia y Derechos Humanos: Corresponde al acto administrativo en que el C.A.I.S. remite a la Seremi de Justicia y Derechos Humanos la acreditación de los requisitos de la norma, junto con la solicitud del/la usuario/a. Esta autoridad ministerial podrá:

- **Rechazar la solicitud:** Acto resolutivo en que la Autoridad Ministerial estima que, por razones legales, no es posible dar por acreditado alguno de los requisitos, teniendo como opción, por parte del/la usuario/a, la presentación de un Recurso de Reposición con Recurso Jerárquico - en subsidio -, el que deberá ser presentado dentro de los 5 días siguientes a la notificación del acto. Asimismo, la Autoridad Ministerial puede detectar errores formales en los antecedentes enviados, rechazando el beneficio. En ambos casos, se devolverá el expediente a la Unidad de control del Decreto Ley N°409, para ser revisado y, dentro de las posibilidades, subsanar los errores de fondo o forma indicados por la Autoridad Ministerial.
- **Aprobación y dictación de Resolución:** Acto resolutivo en que la Autoridad Ministerial considera se acreditaron debidamente los requisitos legales y aprueba la Eliminación de Antecedentes Penales para todos los efectos legales y administrativos.

c) Eliminación Prontuario Penal SRCel: Acto administrativo en que el Servicio de Registro Civil e identificación (SRCel) acata la decisión de la Autoridad Ministerial y procede a la Eliminación del Prontuario Penal.

De acuerdo lo instruido por el Subsecretario de Justicia y Derechos Humanos en Ord. N°4192 del 13/06/2013, documento que fija procedimiento a seguir en la tramitación de la solicitud de eliminación de antecedentes penales, se indica que, una vez aprobada una solicitud de eliminación de antecedentes, la SEREMI respectiva deberá remitir resolución bajo la siguiente distribución:

- Al Interesado, sin perjuicio de lo anterior, en caso de necesidad el usuario/a podría solicitar copia de dicha resolución a la Unidad de control Decreto Ley N°409 o a la Seremi de Justicia y Derechos Humanos respectiva.
- Al Servicio de Registro Civil e Identificación, organismo que será el encargado de proceder a la eliminación de las causas que se detallan en la resolución del prontuario penal del usuario/a.

²¹ Si no se cuenta con los documentos que acrediten profesión u oficio, se puede efectuar una declaración Jurada simple ante el trabajador social o funcionario del C.A.I.S. o Establecimiento Penitenciario.

²² El extracto de Afiliación y Antecedentes debe tener una vigencia no superior a 60 días, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 10 del Decreto Ley N°463, de 1974.

- A la Unidad de control Decreto Ley N°409 de origen, quienes proceden a la eliminación del usuario/a de los Sistemas informáticos institucionales, dando por cerrado el proceso administrativo interno.
- Y con fines informativos, a la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, Dirección de Reinserción Social y Departamento Postpenitenciario de Gendarmería de Chile.

1.4.- CONSIDERACIONES ESPECIALES EN TORNO AL ENVÍO DE EXPEDIENTE PARA LA ELIMINACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES

Como se mencionó en el apartado anterior, uno de los procedimientos administrativos fundamentales de la fase de egreso, es el envío del expediente al/la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, el cuál consta de la solicitud del/la usuario/a adscrito/a al Decreto Ley N°409 y todos aquellos documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa ya señalada.

Respecto de este expediente, y de modo de facilitar la coordinación entre los C.A.I.S, y las SEREMÍAS de Justicia y Derechos Humanos, se estima pertinente tener en cuenta ciertas consideraciones, los que se detallan a continuación.

Respecto de los requisitos exigidos para eliminar antecedentes penales, es importante señalar que, mediante Of. Ord. N°5805 de fecha 19 de agosto de 2013, se instruyó a las Secretarías Regionales Ministeriales de Justicia y Derechos Humanos criterios para la correcta aplicación del beneficio contemplado en el Decreto Ley N°409 de 1932, señalando que: "(...) Respecto a las penas accesorias que se encontraren vigentes al momento de optar al beneficio del Decreto Ley N°409, el precitado artículo 1° señala que éstas deberán ser indultadas. La exigencia del indulto para estos efectos, guarda relación con que la extinción de la responsabilidad penal es presupuesto lógico y jurídicamente necesario para la eliminación de los antecedentes prontuarios; tal como sucede con las penas principales, que requieren encontrarse extinguidas (cumplidas) para poder eliminarlas como anotación del prontuario".

Por otra parte, tal como se mencionó en el marco normativo, es fundamental tomar en cuenta aquellas modificaciones legales que han incidido en esta materia, y que influyen en el proceso de eliminación de antecedentes penales. Se hace necesario destacar las siguientes²³:

1. Consideraciones especiales sobre inhabilitaciones absolutas temporales y perpetuas: En relación a las penas se debe distinguir:

- Personas condenadas a la pena de inhabilitación absoluta temporal por hechos perpetrados con anterioridad a la publicación de las Leyes N°20.594, de 19 de junio de 2012, y Ley N°20.685, de 20 de agosto de 2013: En virtud del principio pro reo, se mantiene la calidad de accesoria de esta pena, por lo que aplicando lo dispuesto en el Decreto Ley N°409, se podrían eliminar las anotaciones penales, transcurridos los plazos señalados, indultando todas las penas accesorias a que estuviere condenado.
- Personas condenadas a la pena de inhabilitación absoluta temporal, por hechos ocurridos con posterioridad a la publicación de las Leyes N°20.594 y N°20.685: Al haberse establecido el carácter principal de esta pena, sólo se podría solicitar la eliminación de sus antecedentes penales una vez cumplidas todas las penas principales a las que haya sido condenado. En cuanto al inicio de la pena de inhabilitación absoluta temporal, esta se cuenta desde que se hubiere dado cumplimiento a la pena privativa de libertad, obtenido la libertad condicional en la misma, o iniciada la ejecución de alguno de los beneficios de la Ley 18.216 como sustitutiva de la pena principal. Considerando lo dispuesto en el artículo 1° inciso 2° del Decreto Ley N°409, este derecho solo podrá ejercerse transcurridos 10 años desde el cumplimiento de las penas principales, siempre y cuando haya sido condenado con posterioridad al 20 de agosto de 2013.
- Personas condenadas a la pena de inhabilitación absoluta perpetua: Debido a su carácter de pena perpetua y principal, esta pena no puede eliminarse del registro, en

²³ Se recomienda revisar Manual de procedimientos para la aclaración prontuarial, Of. Ord. N° 01 de 31 de diciembre 2020, pág. 32 apartado VII Anexos de situaciones complejas N°s 2 y 4, donde se realiza una explicación detallada de tales temas.

armonía con lo establecido en el artículo 1° inciso 2° del Decreto Ley N°409, ya que sólo puede eliminarse la pena de inhabilitación absoluta temporal del artículo 39 bis del Código Penal.

- Personas condenadas a la pena de sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal, se considera una pena accesoria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 372 del Código Penal, por lo que en aquellos casos que exista una condena a este tipo de pena, se podrían eliminar las anotaciones penales, indultando esta pena accesoria. Cabe precisar que esta pena accesoria no debe confundirse con lo dispuesto en el artículo 1° inciso 2° del Decreto Ley N°409 en relación a la pena de inhabilitación absoluta temporal, pues como se precisó en los párrafos anteriores, esta última dice relación con el derecho a solicitar la eliminación de antecedentes penales luego de transcurridos 10 años desde el cumplimiento de la pena, no con la obligación de informar a Carabineros cada 3 meses su domicilio actual durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal.

2. Consideraciones especiales sobre manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas: Dadas las modificaciones legales, señaladas en el marco normativo, a la Ley N°18.290, de Tránsito, se debe considerar en aquellos casos en que se ha condenado a un/a usuario/a por hechos cometidos con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N°20.580, de 15 de marzo de 2012, y de la Ley N°20.770, de 16 de septiembre de 2014:

- En el caso de la cancelación de la licencia para conducir vehículos motorizados no podrán eliminarse las anotaciones prontuariales de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Ley N°409, salvo que transcurridos 12 años desde que se canceló la licencia, el Juez alce esta medida.

- Respecto de la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados, será necesario verificar que se encuentre cumplida junto con la pena privativa de libertad y la multa impuesta. En cuanto al inicio de la pena de suspensión, esta se cuenta desde que la sentencia condenatoria esté firme o ejecutoriada, o desde que se hubiere puesto a disposición del Ministerio Público. Acreditado lo anterior y demás requisitos establecidos en el Decreto Ley N°409, el postulante podría dar inicio a su periodo de control ante el C.A.I.S. o Establecimiento Penal respectivo.

- Se estima que la única excepción al respecto se verifica cuando en la sentencia condenatoria, expresamente se disponga que la pena de suspensión o cancelación de la licencia tiene el carácter de pena accesoria.

- Finalmente, considerando que las anotaciones penales mencionadas anteriormente se incorporan en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, que está a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, y que la resolución que conceden el beneficio de eliminación de antecedentes penales no elimina estas anotaciones de la hoja de vida de conductor, resulta necesario que el usuario acompañe copia de la resolución respectiva y solicite su eliminación al del Servicio de Registro Civil e Identificación.

2.- Procedimientos administrativos asociados al control de personas que requieran realizar aclaración prontuarial.

La aclaración prontuarial²⁴ está a cargo de la Oficina de Diagnóstico Prontuarial (O.D.P.), cuya función de la consiste en brindar ayuda a aquellos/as usuarios/as cuyo Extracto de Filiación y Antecedentes Penales no se encuentran completos, colaborando con su compleción o en el caso de aquellas personas que, por distintas causas, aún no puedan demostrar el cumplimiento de sus condenas u otras formas a análoga de extinción de responsabilidad penal, o certificar la cancelación de multas que les hayan sido impuestas en la condena respectiva. Lo anterior es un paso esencial para hacer posible cualquier ulterior gestión destinada a eliminar antecedentes penales (Decreto Ley N°409).

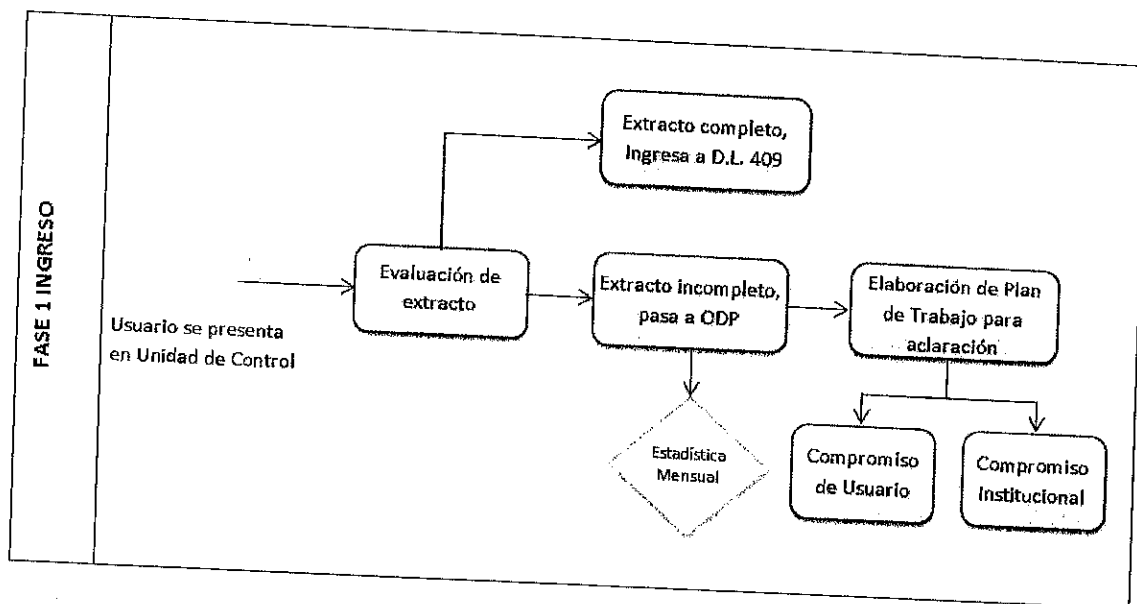
Remite a aquellos casos en que las anotaciones penales no dan cuenta de los requisitos contemplados en el Decreto Ley N°409, principalmente la constatación de la extinción de la

²⁴ Cabe señalar, que el funcionamiento y orientaciones detallados en cada etapa, formatos de documentación, entre otros, se contemplan en el "Manual de Procedimientos para la Aclaración Prontuarial" fue elaborado y remitido por el Departamento Postpenitenciario a las unidades de control a través de ord. N° 01 del 31 de diciembre de año 2020.

pena, la que podría concurrir debido a alguna de las siguientes circunstancias (Código Penal, Artículo 93, numerales 2° al 7°)²⁵:

- Por el cumplimiento de la condena.
- Por amnistía, la cual extingue por completo la pena y todos sus efectos.
- Por indulto. La gracia de indulto sólo remite o conmuta la pena; pero no quita al favorecido el carácter de condenado para los efectos de la reincidencia o nuevo delinquiramiento y demás que determinan las Leyes.
- Por el perdón del ofendido cuando la pena se haya impuesto por delitos respecto de los cuales la ley sólo concede acción privada.
- Por la prescripción de la acción penal.
- Por la prescripción de la pena.

2.1.- FASE DE INGRESO:



a) **Presentación a Unidad de Control:** Corresponde al acto voluntario de concurrencia del/la usuario/a a una Unidad de Control, que da cuenta de su intención de aclarar sus causas penales para posteriormente omitir y/o eliminar sus anotaciones penales. Tal como fue descrito en el punto anterior, en relación al Decreto Ley N°409, el/la funcionario/a de la oficina de Decreto Ley N°409, realiza una **evaluación del extracto de filiación y antecedentes penales**, con el objetivo de revisar si el extracto de filiación se encuentra completo o incompleto, y verificar si, tanto la condena como las penas principales han sido cumplidas o se ha extinguido la responsabilidad penal.

Si se verifica que el **Extracto de filiación y antecedentes penales está completo**, la o las anotaciones consignan la condena y además el cumplimiento de la misma y/o la extinción de la responsabilidad penal, de acuerdo a lo señalado en el artículo 93 del Código Penal, el usuario/a ingresa al Decreto Ley N°409 o bien, es derivado al Servicio de Registro Civil e Identificación para que se solicite la eliminación de anotaciones penales vía Decreto Supremo N°64²⁶.

²⁵ Ord. N° 01, de 31 de diciembre 2020, Manual de procedimientos para la aclaración prontuarial.

²⁶ El Decreto Supremo N°64, de 1960, del Ministerio de Justicia, reglamenta la eliminación de prontuarios penales, de anotaciones, y el otorgamiento de certificados de antecedentes. Este define al Prontuario Penal como el documento público que da fe de la identidad de una persona y de las anotaciones judiciales que registra (artículo 1°). Señala además en su artículo 2°, que el Servicio de Registro Civil e Identificación tendrá a su cargo la filiación de las personas, la apertura, actualización y custodia de los prontuarios penales. El Artículo 8° de este decreto define las condiciones en que se eliminará una anotación prontuarial, a saber: a) Cuando esté comprobado respecto de ella que en el proceso se ha dictado a favor del procesado sentencia absolutoria ejecutoriada; b) Cuando se ha dictado sobreseimiento definitivo a favor del procesado por resolución ejecutoriada, salvo que se haya pronunciado en causa terminada por sentencia condenatoria y se hubiese fundado en la extinción de la responsabilidad penal por el cumplimiento de la condena, indulto o prescripción de la pena; c) Cuando el interesado haya sido favorecido con auto de sobreseimiento temporal firme o ejecutoriada, fundado en las causales de los números 1° y 2° del artículo 409° del Código de Procedimiento Penal; d) Cuando el prontuario haya sido favorecido con una ley de amnistía respecto del delito a que se refiere la anotación; e) Cuando se trate de anotaciones manifestamente erróneas, faltas, respecto de las cuales han transcurrido tres años desde el cumplimiento de la condena; g) Cuando se trate de personas sancionadas por cuasi-delito, simple delito o crimen, con multa o con pena corporal o no corporal hasta de tres años de duración y hayan transcurrido diez años, a lo menos, desde el cumplimiento de la condena en los casos de crimen, y cinco años o más, en los casos restantes; h) Cuando se trate de condenados que hayan cumplido una pena no aflictiva y que a la fecha de la comisión del delito tenían menos de 18 años de edad, procederá a eliminar la anotación prontuarial desde el mismo momento en que se cumple la condena. No obstante, los menores de 18 años

Si se verifica que el Extracto de filiación y antecedentes penales está Incompleto, es decir, la o las anotaciones consignan la/las condena/s pero no el cumplimiento de la misma o bien la anotación ni siquiera consigna una condena, sino sólo un tribunal, número de rol y delito, el usuario/a inicia el proceso de aclaración prontuarial en la Oficina de O.D.P.

b) **Elaboración Plan de Trabajo para Aclaración:** El/la Operador O.D.P. deberá elaborar una estrategia basada en la selección de las medidas más eficaces orientadas a conseguir la acreditación del cumplimiento de la pena principal. En lo específico este plan de acción debe contener el detalle de las actividades y/o gestiones a realizar para la aclaración prontuarial, con plazos establecidos y tareas con responsables²⁷. Con respecto a las responsabilidades, se establecerán compromisos y/o tareas, algunas de las cuales dependerán del usuario/a, y otras de el/la funcionario/a, a saber:

- **Compromisos Usuario/a:** El usuario/a a través de la firma del plan de acción consensuado con el/la Operador O.D.P., manifiesta las tareas que ejecutará para obtener su aclaración prontuarial y que son comprometidas con la institución. No obstante, dependerá del caso concreto, si los documentos que sean necesario recabarse se encuentran en archivos o corresponden a causas regidas por el antiguo sistema penal.
- **Compromiso Institucional:** El/la Operador/a O.D.P., a través del plan de acción, manifiesta las tareas que ejecutará para colaborar en la obtención de la aclaración prontuarial del/la usuario/a y que son comprometidas con el/la Usuario/a. Los documentos que pueda otorgar la Institución deben ser aportados por ésta, considerando las plataformas tecnológicas disponibles y el portal del poder judicial.

Los compromisos que adquiera tanto el/la usuario/a como la institución, deben ser evaluados por el/la Operador/a O.D.P. encargado/a del caso, y dependerá de la situación concreta de cada unidad. En tal sentido, existen unidades, que dependiendo de su realidad local, realizan solicitudes directamente, por ejemplo a los tribunales de justicia o archivo judicial. De ser aquello posible, las unidades deben optar por realizar las solicitudes directamente.

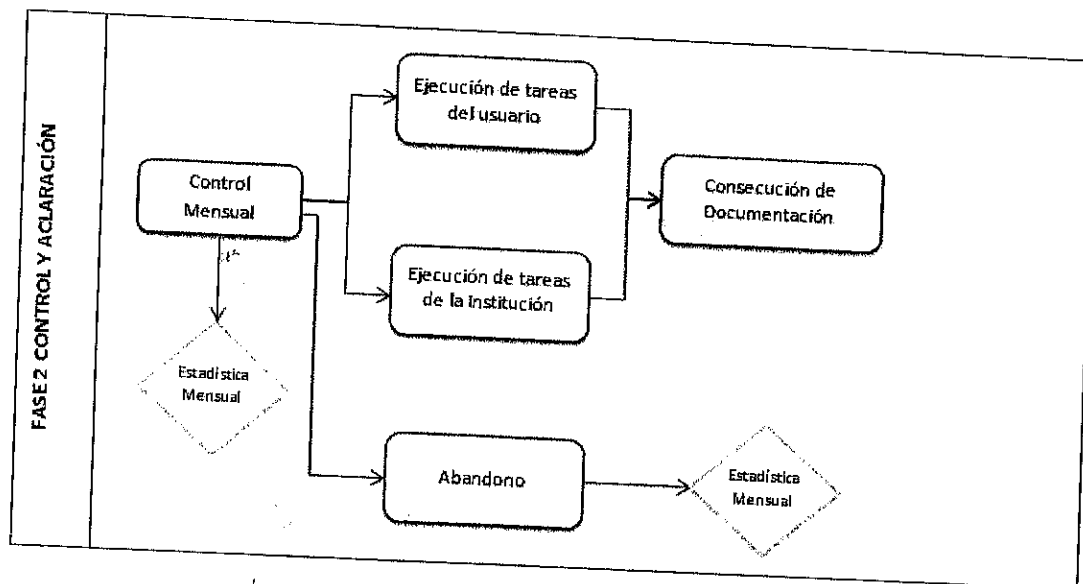
Lo anterior, teniendo presente los principios de celeridad, de economía procedimental y de la no formalización, que rigen el procedimiento administrativo, consagrados en los artículos 7°, 9° y 13 de la Ley N°19.880, en virtud de los cuales la Administración, en lo pertinente, debe hacer expeditos los trámites que debe cumplir el expediente, removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión; responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios, y no exigir formalidades innecesarias. No obstante, de no tener los mismos resultados, las unidades deberán, en tales casos, optar por informar que la obtención de determinado documento será de responsabilidad de/la usuario/a.

de edad a la fecha de la comisión del delito, que sean condenados con una pena aflictiva, deberán esperar que transcurran tres años desde el cumplimiento de la condena para proceder a la eliminación de dicha anotación prontuarial; y i) Cuando se trate del cumplimiento de sentencias internacionales o de acuerdos de solución amistosa homologados en materia de derechos humanos en que el Estado de Chile sea parte.

En todos los casos relacionados con las letras f), g) y h) se otorgará el beneficio por resolución fundada, sólo a aquellas personas que acrediten irreprochable conducta anterior, y siempre que la anotación de que se trate sea la única que exista en el prontuario del interesado. El prontuario también se eliminará cuando el prontuario sea favorecido con los beneficios del Decreto Ley N°409 y por muerte de la persona prontuaria. La eliminación se ordenará por resolución fundada del Director General del Servicio de Registro Civil e identificación y se cumplirá mediante la destrucción material del prontuario (artículo 9°).

²⁷ El Formato está estipulado en pág. 67 del Manual de procedimientos para la aclaración prontuarial, Ord. N°01 de 31 de diciembre 2020.

2.2.- FASE DE CONTROL:



a) **Control Mensual:** Dice relación con la sujeción voluntaria del/la usuario/a a control de Gendarmería de Chile y que se traduce en una firma mensual en un establecimiento que ese Servicio administra. Cabe mencionar, que una vez realizada la aclaración prontuarial, al usuario que determine ejercer su derecho a la eliminación de antecedentes mediante el Decreto Ley N°409 se le pueden contabilizar los controles (firmas) realizados total o parcialmente.

b) **Tratamiento de Aclaración Prontuarial:** El/la Operador/a O.D.P. deberá abrir una carpeta a cada persona que necesite aclarar su prontuario penal, orientándose a lograr la recopilación de los documentos que permitan acreditar el cumplimiento de todas las penas (principales) o mediante la demostración de que ha operado otra forma de extinción de la responsabilidad penal respecto de las penas principales que figuren en las causas que consten el respectivo extracto de filiación.

Lo anterior, se logrará mediante la ejecución de las tareas que se especifiquen en el Plan de Trabajo para la Aclaración para cada caso, tanto los compromisos del/la usuario/a, como los compromisos institucionales.

En especial, debiese tenerse en cuenta, las siguientes formas de extinción de la responsabilidad penal:

i. Indulto:

El Artículo 93° del Código Penal señala que la responsabilidad penal se extingue por el indulto. Precisa que "la gracia de indulto sólo remite o conmuta la pena; pero no quita al favorecido el carácter de condenado para los efectos de la reincidencia o nuevo delinquiramiento y demás que determinan las leyes". Las leyes que actualmente rigen las formas de indulto son las siguientes:

- **Ley N°20.588, de Indulto General:** Tratándose en este caso de un indulto conmutativo, que reemplaza la pena privativa de libertad por un periodo de control que la misma ley determina, ante las unidades de Gendarmería que ésta establece, el rol del Operador/a O.D.P. se traduce en obtener la certificación del C.A.I.S. o de otras Unidades de Control donde conste el cumplimiento del periodo de control. De no contar con este debe oficiarse a la Unidad donde se realizó el control del Indulto. Debe recordarse que el cumplimiento del periodo de control debió ponerse en conocimiento del Tribunal de Garantía respectivo, por lo que también se podría officiar a éste²⁸.

²⁸ Resolución Exenta N°5081 y Oficio circular N°245 del 3 de octubre de 2012 del Subdirector Operativo, en relación con el Oficio © N°304, de 2012, de Subdirector Operativo.

- Ley N°18.050, que fija normas generales para conceder indultos particulares.: El Artículo 2° de esta Ley indica que “el indulto produce el efecto señalado en el artículo 93 N°4 del Código Penal y puede consistir en la remisión, conmutación o reducción de la pena, pero el indultado continúa con el carácter de condenado para los efectos de la reincidencia o nuevo delinquiramiento y demás que determinen las leyes”.

Respecto al efecto del indulto, explica el Oficio Circular N°360 de 2020, del Director Nacional de Gendarmería, que “si el decreto de indulto es favorable, procederá conforme su tenor, es decir, si concede la remisión de la pena, procederá su libertad inmediata; si se concede la conmutación de la pena, efectuará los actos administrativos afines para su egreso o traslado a continuar cumpliendo su condena con la modalidad que se indique en el decreto de indulto a la unidad de control que corresponda a su domicilio; o si concede la reducción de la pena, procederá en el acto a la modificación de su cómputo de condena, bajo los controles internos respectivos y de su resultado, procederá su libertad o nueva fecha de término”. Dependerá por tanto del acto que lo conceda el tipo de indulto, las obligaciones a que queda sujeto el beneficiado y las formas de darlo por cumplido.

El/la Operador/a O.D.P. deberá tener a la vista el decreto, y si se trata de un indulto que remite la pena este implica dar por cumplida la pena. De lo contrario la pena debe cumplirse en la forma o por el saldo que reste. Este es un acto administrativo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se puede solicitar al departamento de control penitenciario, o en caso de que se haya solicitado el indulto de una multa, si el/la usuario/a no se encuentra bajo control de la Institución, se puede obtener directamente del Ministerio, por el/la usuario/a, mediante una solicitud vía transparencia.

ii) Cumplimiento de condena y formas particulares de cumplimiento:

El Art. 93° Código Penal señala que “La responsabilidad penal se extingue por el cumplimiento de la condena”. Por cumplimiento de la condena debe entenderse no sólo el pago completo y total de las penas pecuniarias y el servicio del tiempo decretado respecto de las personales, sino también:

- a) El cumplimiento de la pena a través del beneficio de la libertad condicional (Decreto Ley N°321);
- b) El cumplimiento íntegro y no revocado de las penas sustitutivas (Ley N°18.216).²⁹

Respecto del cumplimiento de condena, el Oficio Circular N°304, del 14 de diciembre de 2012, del Subdirector Operativo, indica que “la única autoridad válida para acreditar el cumplimiento de condena de un penado, es el Alcaide o Jefe del Establecimiento penal en que dio cabal cumplimiento a la condena que se informa cumplida. En este caso, el rol del/la Operador/a O.D.P. es oficiar al respectivo establecimiento penitenciario, solicitando certificado de cumplimiento de condena, o directamente al Tribunal de Garantía respectivo.

En cuanto a las penas sustitutivas y a su acreditación de cumplimiento, cabe tener presente el Oficio Circular N°74, 02 de octubre de 2014, de Jefa de Departamento Postpenitenciario, que se refiere a la acreditación del cumplimiento de las penas en que se aplicó una medida alternativa de la nueva Ley N°18.216. En dicho documento se indica, en su numeral 2, que “el artículo 38 de la nueva Ley N°18.216 establece en su inciso 3, parte final, que es el tribunal competente el que debe declarar la pena sustitutiva cumplida, siendo también el encargado de oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación, la información necesaria para que opere la omisión establecida en el artículo en comento.” Por esta razón, en los casos de usuarios/as del que hayan sido condenados/as a reclusión parcial, libertad vigilada modalidad normal y modalidad intensiva, prestación de servicios en beneficio de la comunidad y remisión condicional, se debe solicitar esta resolución a la unidad de origen, quien como ya se mencionó anteriormente, la tendrá a su disposición, por corresponderle a ellos la solicitud de la acreditación del cumplimiento de la pena por medio de la resolución judicial. La labor del/la Operador/a O.D.P., en este caso, es oficiar al respectivo C.R.S. para que se envíe la resolución respectiva.

²⁹ Sergio Politoff et. al (2004). Lecciones de Derecho Penal Chileno Parte General, Chile, Ed. Jurídica Santiago de Chile.

Debe tenerse en cuenta que esta forma de acreditación del cumplimiento de la pena sustitutiva solo es respecto de las penas posteriores a la modificación introducida por la Ley N°20.603 (que modifica la Ley N°18.216), de 2012, no abarcando a las medidas alternativas que contemplaba la antigua Ley N°18.216. Por lo tanto, los casos que no sean los referidos, deben regirse por lo señalado en el Manual de Procedimientos del Decreto Ley N°409 y en el Ord. N°9020, de 24 de diciembre de 2007, por lo que en tales situaciones la acreditación del cumplimiento de dichas penas se deberá realizar mediante Certificados de cumplimiento de condena y pagos de multas emitidos por las Unidades Penales y Especiales o resolución de los Tribunales de Justicia, de corresponder. En tales casos la labor del/la Operador/a O.D.P. es oficiar ya sea a las Unidades Penales o al Tribunal respectivo solicitando tales certificados.

En relación a la libertad condicional, cabe tener presente que el art.8° del Decreto Ley N°321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad (en versión anterior a la reforma introducida por la Ley N°21.124), expresa que "los condenados en libertad condicional que hayan cumplido la mitad de esta pena y hubieren observado durante este tiempo muy buena conducta, según se desprenda del libro de vidas que le llevará a cada uno en la prefectura de policía, tendrán derecho a que, por medio de una resolución de la respectiva Comisión, se les conceda la libertad completa".

En relación a lo anterior, debe considerarse lo señalado mediante el Oficio N°16, de 2015, de Jefa de Departamento Postpenitenciario, que indica que en caso de cumplimiento del periodo de control o de que la Comisión respectiva otorgue la Libertad Completa, aquello debe ser puesto en conocimiento del Tribunal de Garantía respectivo para que el órgano jurisdiccional "tome conocimiento del Tribunal de Garantía respectivo para que el órgano correcta de acreditar el cumplimiento en tales casos, es la certificación de cumplimiento del periodo de control emitido por el respectivo Jefe de Unidad o bien por la resolución de la Comisión de Libertad Condicional respectiva, sin perjuicio de que para que la pena se entienda cumplida, aquello debe haberse comunicado al respectivo tribunal penal. En este caso la tarea del/la Operador/a O.D.P. será oficiar ya sea a la Unidad de control de la Libertad Condicional o directamente al Tribunal de Garantía respectivo, a efecto de que se envíen las resoluciones que certifiquen el cumplimiento de la pena en libertad condicional.

- c) Respuesta a Gestiones: Se refiere a la obtención formal de la documentación que acredita el cumplimiento de la Pena Principal y/o reiteración de la solicitud inicialmente realizada.

En relación a la aclaración prontuarial, es importante tener a la vista ciertas consideraciones:

- En relación con la aclaración del prontuario penal, todo expediente criminal que se ordene archivar será remitido al archivero dentro de tres meses a contar desde la fecha en que se disponga su archivo. Asimismo, cabe tener presente que el numeral 4° del artículo 455 del Código Orgánico de Tribunales establece que son funciones de los archiveros "dar a las partes interesadas, con arreglo a la ley, los testimonios que pidieren de los documentos que existieren en su archivo."

En vista de lo anterior, tratándose principalmente de causas del sistema procesal penal antiguo, en caso de requerirse la sentencia condenatoria ejecutoriada o certificado de término de causa debiese obtenerse mediante solicitud al mencionado archivero. La labor del/la Operador/a O.D.P. en este caso es orientar al/la usuario/a para que realice la solicitud al respectivo archivero. En caso de que se dé la situación en que la respuesta a la solicitud directa del C.A.I.S. a efectos de otorgar las copias necesarias para aclarar el prontuario sea positiva por parte del archivero, tener presente aquella posibilidad.

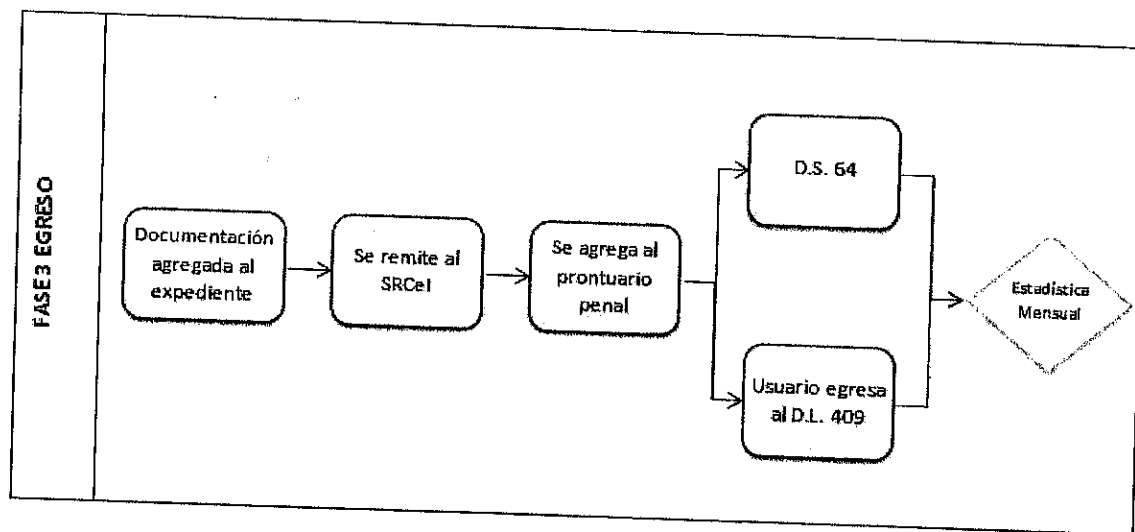
- Respecto de las Multas, según las reglas pertinentes del Código Penal, revisten la naturaleza de penas principales. Por lo tanto, deben encontrarse pagadas a efectos de ingresar al proceso de eliminación de antecedentes contemplado en el Decreto Ley N°409. No obstante, pueden solicitarse a su respecto que se tengan por cumplidas en forma análoga, según se ha referido precedentemente, por ejemplo, mediante la solicitud de prescripción, en caso de cumplirse los requisitos respectivos. También se puede solicitar indulto particular respecto a multas. Además, se debe tener presente lo señalado en el art 49 del Código Penal, que permite que el pago de la multa se sustituya por otras

penas en caso de que no tuviese bienes el condenado para satisfacer la multa. En un principio, solo se podía sustituir, como apremio, por reclusión; actualmente y desde 2012, el pago de la multa puede también sustituirse, con acuerdo del condenado, por prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

A este respecto debe tenerse presente que el/la Operador/a O.D.P. debe orientar al/la usuario/a ya sea en relación a la solicitud de prescripción, sustitución o eximición de cumplimiento de la multa, las que debe realizar preferentemente el/la usuario/a en forma personal ante el respectivo tribunal. La satisfacción de la multa debe certificarse por el tribunal. Sin perjuicio de ello, si se tiene constancia de respuestas positivas ante solicitudes directas de C.A.I.S. debe considerarse dicha posibilidad. También es posible solicitar indulto respecto a multas. En este caso se debe orientar al usuario/a, que no se encuentra bajo el control de Gendarmería de Chile por haber dado cumplimiento a su pena principal, para que remita su solicitud directamente a la Oficina de Partes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos³⁰.

- d) **Abandono:** Hace referencia al acto voluntario del/la usuario/a de no perseverar con gestiones destinadas a obtener la documentación necesaria para la Aclaración de su/s Anotación/es Penal/es incompleta/s. Respecto al abandono, dado que el/la usuario/a firmó un compromiso en su plan de trabajo para la aclaración, si el/la usuario/a prefiere no continuar con las tramitaciones estipuladas en dicho plan, debe presentar un escrito solicitando su voluntariedad de no continuar en el proceso de aclaración; además el/la Operador/a O.D.P. debe dejarlo estipulado en el plan de trabajo, adjuntando el escrito del/la usuario/a. Del mismo modo, dicha situación se produce al no producirse la asistencia del/la usuario/a tres veces consecutivas según lo establecido en el plan de trabajo.
- e) **Reingreso:** Corresponde al acto voluntario del/la usuario/a de volver a la sujeción de control por parte de Gendarmería. Esta opción tiene la ventaja de hacer válidos todos los controles efectuados anteriormente, siempre y cuando el/la usuario/a no haya cometido o cometa nuevo delito entre la causa antigua y la primera firma de reingreso.

2.3.- FASE DE EGRESO:



En aquellos casos en que **se ha aclarado la situación del usuario/a**, es decir, se han recabado la totalidad de las certificaciones que dan cuenta del cumplimiento de la/s pena/s, se debe desarrollar los siguientes procesos:

- a) **Incorporación Documentación al Expediente:** El/la Operador/a O.D.P. ha constatado la existencia de las certificaciones que dan cuenta del cumplimiento de la/s pena/s, incorporándolas al expediente del usuario/a.

³⁰ Algunas situaciones especiales referentes a las multas se tratan en el anexo de situaciones especiales N°1 pág. 32 del Manual de procedimientos para la aclaración prontuarial, Ord. N° 01 de 31 de diciembre 2020.

b) Envío al SRCel: En este acto administrativo, la unidad de control, mediante oficio informa del efectivo cumplimiento de condena/s al Servicio de Registro Civil e Identificación.

c) SRCel Incorpora Anotación al Prontuario Penal: Dice relación con la inscripción de la información proporcionada por Gendarmería de Chile, relativa al cumplimiento de la pena, en el Extracto de Filiación y Antecedentes Penales.

d) Egreso O.D.P.-Ingreso Decreto Ley N°409: Hace referencia al acto de Gendarmería de Chile en que se da cuenta de la finalización exitosa del proceso de Aclaración Prontuarial, por lo cual el/la usuario/a está en condiciones de hacer ingreso al Decreto Ley N°409, pudiendo hacer válidas total o parcialmente las firmas/controles concretadas en período de Aclaración Prontuarial, en favor del Decreto Ley N°409, con la condición de no haber cometido delito entre el último cumplimiento de condena o extinción de la responsabilidad penal (Art. 93° del C.P.) y su ingreso al Decreto Ley N°409.

e) Decreto Supremo N°64: En el caso de cumplir con los requisitos exigidos, debe tenerse presente que una vez aclarado el extracto del usuario es posible derivarlo al Registro Civil a efectos de que se proceda a eliminar determinada anotación según la normativa del Decreto Supremo N°64, de 1960. Mediante este decreto se puede eliminar una o algunas de las anotaciones prontuariales existentes, siempre que se trate de las situaciones contempladas en su Art. 8°. Especialmente, debe tenerse presente la disposición del literal g) de dicho artículo, el cual establece que se eliminará una anotación prontuarial "cuando se trate de personas sancionadas por cuasi-delito, simple delito o crimen, con multa o con pena corporal o no corporal hasta de tres años de duración y hayan transcurrido diez años, a lo menos, desde el cumplimiento de la condena en los casos de crimen, y cinco años o más, en los casos restantes".

f) Otras Derivaciones/Omisión de antecedentes penales: En caso de no ser posible la aplicación de los sistemas de eliminación de antecedentes anteriores, el/la Operador/a O.D.P. deberá orientar al usuario/a en relación a alguna de las posibilidades de omisión de antecedentes penales contempladas por la legislación. Este es un mecanismo que permite que la o las anotaciones no aparezcan en algunos o todos los certificados de antecedentes. Se trata de un "ocultamiento" de las anotaciones, previo a la eliminación definitiva, que permite contar con certificados sin antecedentes, mientras se realiza el trámite de eliminación prontuarial definitiva por el Decreto Ley N°409. A este respecto cabe tener en cuenta las siguientes posibilidades:

1. Omisión de antecedentes penales según artículo 13 del Decreto Supremo N°64.
2. Omisión de antecedentes penales Ley N°19.628 sobre protección de la vida privada.
3. Omisión de antecedentes penales Ley N°18.216 que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.

En aquellos casos en que **no se ha aclarado la situación del usuario/a**, éste/a debe ser egresado/a de la Oficina de Diagnóstico Prontuarial, como no aclarado, después de haber hecho todas las diligencias posibles y/o transcurrido los plazos de 6 meses a un 1 año establecidos previamente.

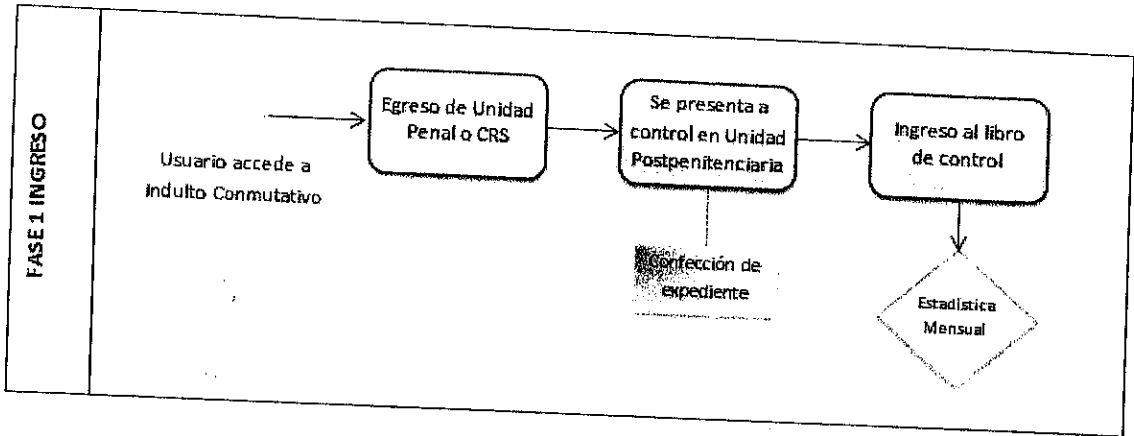
3.- Procedimientos administrativos asociados al control de personas con Indulto General Conmutativo³¹

La Ley N°20.588, sobre Indulto General Conmutativo, favoreció a determinados segmentos de la población atendida por Gendarmería de Chile, quienes bajo ciertas condiciones, pudieron beneficiarse con la conmutación del saldo de sus condenas, por el de control administrativo o extrañamiento especial en su país de origen, según corresponda, contribuyendo con ello a la descongestión de los Establecimientos Penitenciarios del país. A

³¹ El saldo de población que actualmente persiste con este beneficio (26 casos), corresponde a una población que debe ser egresada pero los tribunales no se han pronunciado al respecto. Valga recordar que el Indulto Conmutativo, corresponde a una ley de 2012 que específicamente, puso a esa población bajo control del Sistema Postpenitenciario por un lapso máximo de 3 años. En los casos que se producían interrupciones de la asistencia, se debía informar a los Tribunales, lo cual se hizo. Sin embargo, éstos se negaron a pronunciarse dejando a esta población activa en lo administrativo, pero ya sin obligación de control. Habiendo transcurrido casi 10 años, ya no hay ingresos de este tipo de población, con lo que nos queda resolver el vacío legal existente, para cerrar esta medida.

continuación, se desarrollan los procedimientos administrativos asociados a las 3 fases que componen el control de este beneficio de reinserción.

3.1.- FASE DE INGRESO:



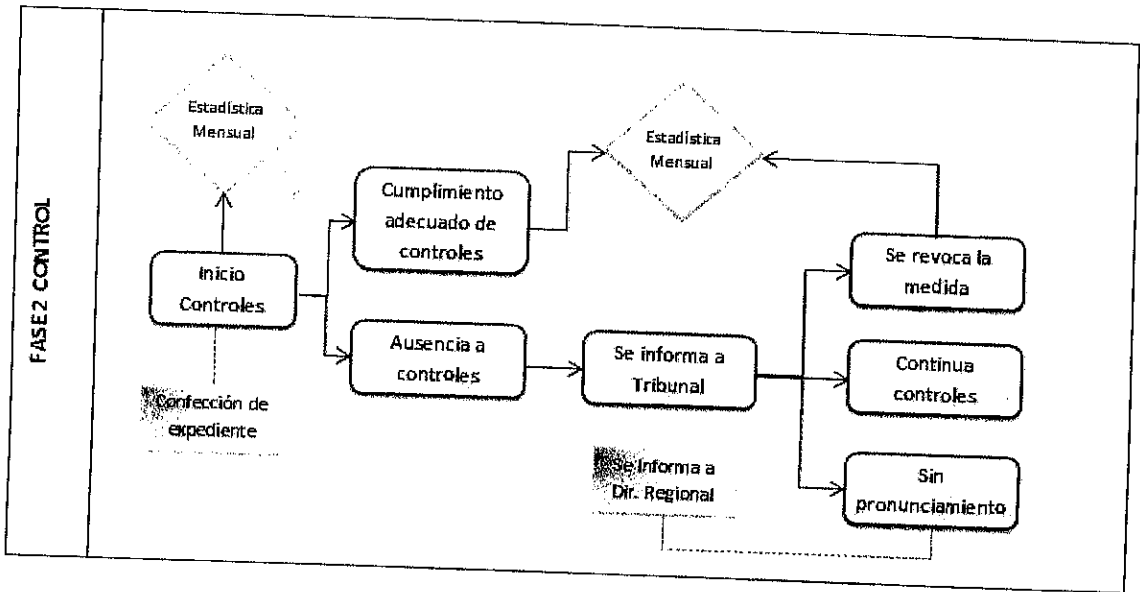
a) Egreso de Unidad Penal o C.R.S: Corresponde al acto en que administrativamente el/a condenado/a pasa a ser de responsabilidad de alguna unidad perteneciente al Departamento Postpenitenciario. El/la usuario/a, una vez notificado/a de la aceptación de su solicitud de Indulto General Conmutativo, egresa de la unidad de cumplimiento. La Unidad de origen verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Indulto General Conmutativo, y lo remite a Control Penitenciario, quien establece la conversión del cumplimiento de la pena en el período de control que corresponda, en modalidad de Indulto.

En algunos casos y, por decisión de la autoridad judicial, existiendo multas asociadas a la condena, éstas podrán ser conmutadas por la autoridad judicial por firmas de control, lo que implicará un aumento del período de control y, por tanto, del número de firmas a controlar por el Servicio.

b) Presentación a Control en Unidad Postpenitenciaria: Hace referencia al acto en el cual el/la beneficiado/a con el Indulto General Conmutativo acude al cumplimiento de su obligación según lo ordenado por la autoridad judicial, conmutando su cumplimiento de pena privativa de libertad a un Control Administrativo Mensual.

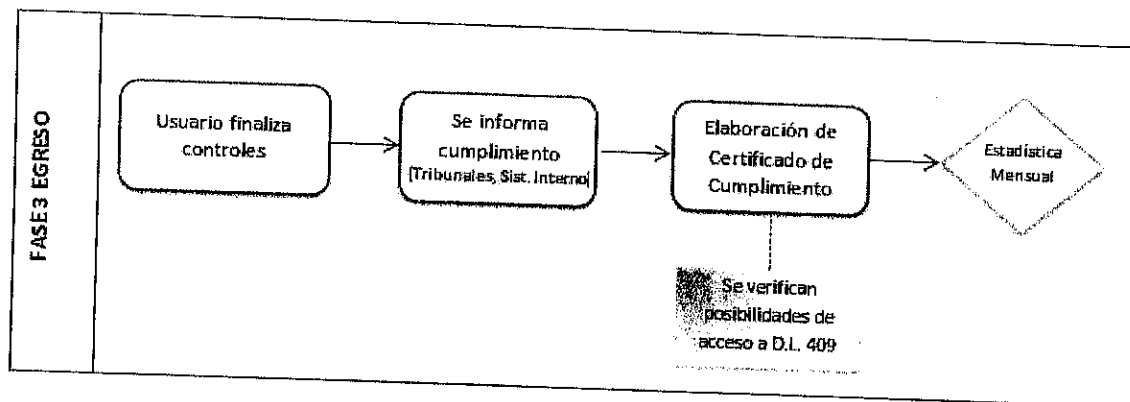
c) Ingreso a Libro de Control: Trata del acto administrativo, por parte del/la Operador/a Indulto, en que se registran todos los datos civiles y penales del/la condenado/a, se le entrega información sobre sus derechos y deberes y además se registran las fechas de control.

3.2.- FASE DE CONTROL:



- a) **Confección Expediente:** Corresponde al acto en que se agrupa toda la documentación del/la indultado/a proveniente desde: a) la unidad de origen y b) la emitida por Control Penitenciario. La carpeta deberá contener todas las resoluciones emitidas, copia de Sentencia, Ficha del Interno, oficios de comunicación, entre otros.
- b) **Inicio de Controles:** Sujeción a la firma obligatoria por el período determinado por Control Penitenciario (período conmutado).
- c) **Verificación de Cumplimiento de Controles:** Dice relación con la sujeción al período de tiempo impuesto, determinado por Control Penitenciario, sin faltas. En caso de concurrir faltas, éstas serán informadas al Tribunal competente para que adopte las medidas que correspondan, ya sea consistentes en recuperación del tiempo en que el/la usuario/a no concurrió a firmar debidamente o revocación del beneficio.
- d) **Verificación de Ausencia de Controles:** Se refiere a la existencia de faltas; el/a Operador/a Indulto verifica la concurrencia de inasistencias del/la usuario/a al período de tiempo determinado por Control Penitenciario para la firma mensual. Se **informa al Tribunal de Garantía** competente acerca de la ocurrencia de inasistencia/s del indultado/a, con la finalidad de que dicho Tribunal ordene cómo proceder de esta situación. Concurren los siguientes procesos:
- Revocación de la Medida:** Decisión del Tribunal de Garantía competente que obliga al/la usuario/a a retomar el cumplimiento de la pena original, previa al otorgamiento del Indulto.
 - Continuidad de los Controles:** Decisión del Tribunal de Garantía competente que permite al/la usuario/a retomar su proceso de firmas, durante el período de control inicialmente impuesto o bien durante un período mayor, según el Tribunal indique.
 - Sin Pronunciamiento:** Tribunal de Garantía no indica forma de proceder ante inasistencias del/la indultado/a.

3.2.- FASE DE EGRESO:



- a) **Término Controles:** Dice relación cuando el/a condenado/a termina el período de sujeción (control de firmas obligatorio), de acuerdo al tiempo de condena y la eventual conversión de multa, si corresponde.
- b) **Registro Cumplimiento (Tribunales, Sistema Interno):** Corresponde al acto de comunicación al Tribunal, en que se da cuenta de si durante el período impuesto de condena el/la condenado/a realizó la obligación de firmar o no. Se egresa del Sistema Interno.
- c) **Elaboración Certificado de Cumplimiento:** Refiere al acto administrativo a través del cual se verifica y formaliza el hecho que el/la condenado/a acudió a su control de acuerdo a lo establecido en su condena y/o lo establecido por el Tribunal.

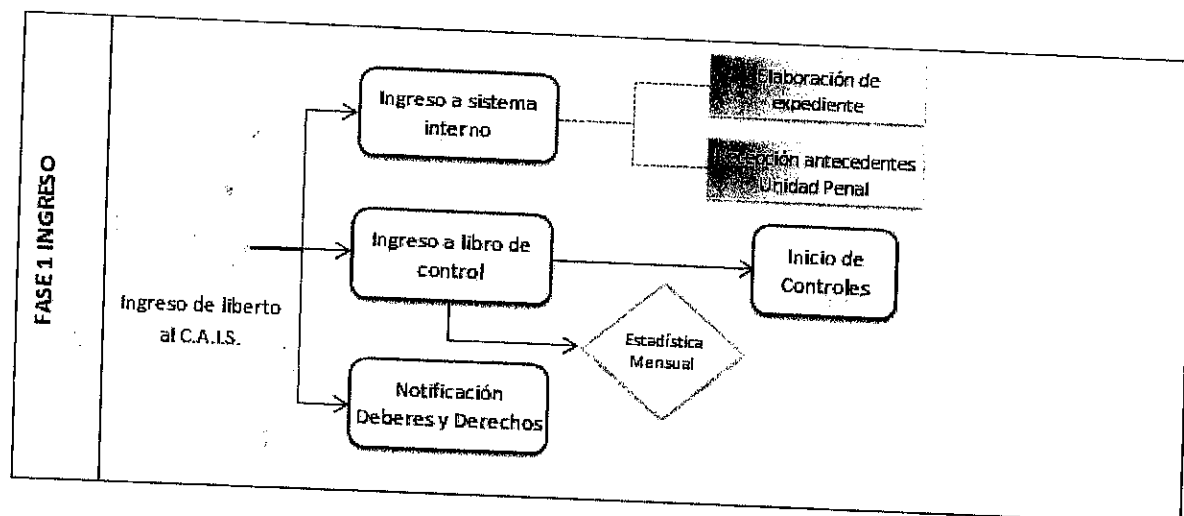
4.- Procedimientos administrativos asociados al control de personas con Libertad Condicional, previa modificación legal por Ley N°21.124 de 2019

La libertad condicional es un medio de prueba de que la persona condenada a una pena privativa de libertad ha demostrado avances en su proceso de reinserción social. Es un beneficio que no extingue ni modifica la duración de la pena, sino que es un modo particular de hacerla cumplir en libertad (art. 1° Ley N°21.124).

Como ya se mencionó anteriormente, con fecha 18 de enero del 2019, se publicó la Ley N°21.124 que modifica el Decreto Ley N°321 que establece la libertad condicional a las personas que cumplen una condena privativa de libertad. Esta reforma legal incorporó cambios mayores al sistema de libertad condicional, modificando de manera sustancial el sistema, imponiendo una serie de nuevas exigencias a los distintos actores que participan de este proceso. Los lineamientos técnicos vinculados a estas modificaciones, están contenidas en la Res. Ex. N°364, del 19 de marzo de 21, que aprueba las Normas Técnicas de la Libertad Condicional.

No obstante lo anterior, el departamento Postpenitenciario de Gendarmería mantiene a su cargo el control de usuarios/as con Libertad Condicional obtenida antes de la modificación de la norma, cuyo control está sujeto a lo establecido en Decreto N°338, de 2020, que aprueba el reglamento del Decreto Ley N°321. Los procedimientos administrativos vinculados a su control se describen a continuación:

4.1.- FASE DE INGRESO:



a) **Ingreso de liberto/a al C.A.I.S.:** Corresponde al acto en que una persona condenada a una pena privativa de libertad, llamado/a liberto/a queda sujeto/a al control del C.A.I.S. en virtud de una resolución de la Comisión de Libertad Condicional³² que le otorga la Libertad condicional. Es responsabilidad del/la Operador/a de Libertad Condicional recibir al liberto/a condicional y realizar los siguientes procedimientos y actos administrativos:

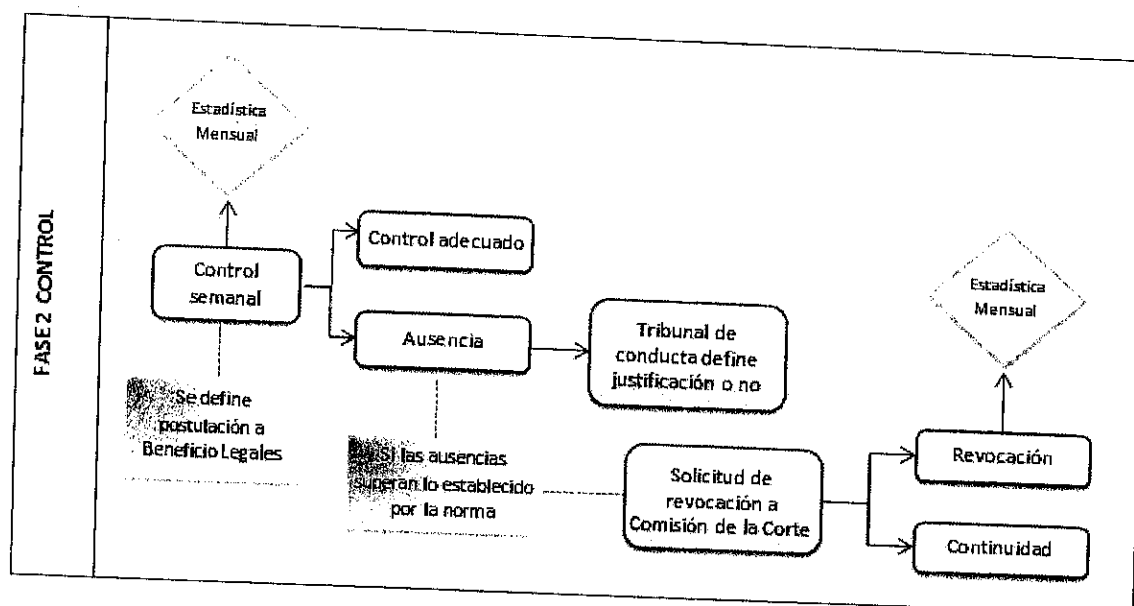
- **Ingreso a Sistema Interno:** El/a Operador/a de Libertad Condicional procederá al ingreso de la información del usuario/a al Sistema Interno, registro de condenados electrónico que lleva Gendarmería de Chile.
- **Ingreso a libro de Control:** El/a Operador/a de Libertad Condicional deberá además ingresar información personal y vías de contacto del/la liberto/a al libro de control de firma, fijando además la fecha de inicio de control.

b) **Inicio de Controles:** Refiere al acto administrativo en que liberto/a comienza a realizar la sujeción impuesta por la Comisión de Libertad Condicional, por el período impuesto en la sentencia. Este acto contempla realizar lectura electrónica de la cédula de identidad para registrar primera presentación en el módulo de Libertad Condicional de Sistema Interno, y la realización de la primera firma del liberto/a en el libro de control, la que deberá coincidir con la fijada al momento de la lectura de cédula de identidad en el Sistema Interno.

³² La Comisión de Libertad Condicional es un órgano colegiado con poder resolutivo que se encuentra a cargo de determinar la concesión, revocación y modificación de las condiciones impuestas al inicio de la libertad condicional.

c) Notificación Deberes y Derechos: Se relaciona con el acto administrativo obligatorio, en que el/a Operador/a de Libertad Condicional realiza lectura y entrega de la Cartilla de Derechos y Deberes de las personas beneficiadas con el Decreto Ley N°321, solicitando además la firma del/la liberto/a condicional como testimonio de que, en este acto, el usuario/a toma conocimiento de las obligaciones del cumplimiento de su pena en libertad condicional y sus derechos³³.

4.2.- FASE DE CONTROL:



a) **Control semanal:** Alude a la obligación impuesta en la norma, que implica una sujeción durante el periodo establecido en la condena por medio de una firma semanal u otro medio dispuesto para tal efecto. Para la ejecución de este proceso, el/a Operador/a de Libertad Condicional deberá registrar, en los medios de control institucionales (Modulo de LICO, libro de control de firmas, entre otros.), el cumplimiento de la obligación de presentación semanal de los/as libertos/as condicionales. Bajo esta estructura, el/a liberto/a condicional puede presentar dos estados posibles:

- **Control Adecuado:** El/a liberto/a da cumplimiento de la obligación impuesta en la norma respecto a las firmas semanales y demás requisitos del Decreto Ley N°321.
- **Ausencias:** Implica la no presentación del/la liberto/a a su control semanal por una vez o un período mayor con o sin justificación.

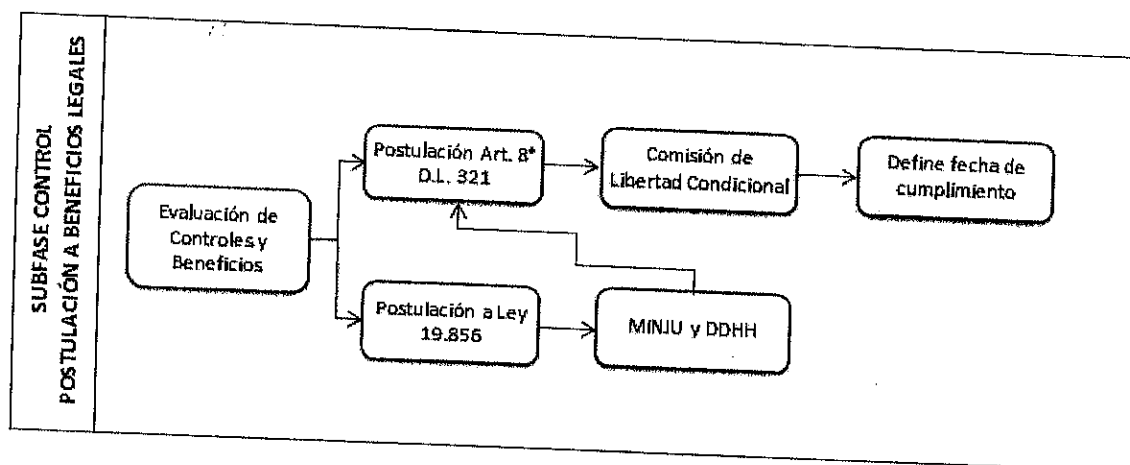
b) **Chequeo de Ausencias a Control de Firma:** Es tarea del/la Operador/a de Libertad Condicional verificar periódicamente el cumplimiento de la obligación de control semanal de los/as libertos/as condicionales, e informar a las áreas pertinentes los casos de no presentación sin justificar, a fin de realizar un análisis de casos certero que posibilite una toma de decisiones oportuna y con la totalidad de los antecedentes requeridos. Los procedimientos a realizar para ejecutar dicha función son los siguientes:

- Revisión diaria Módulo de Libertad Condicional del sistema Interno para detectar aquellos casos que se encuentran con ausencia injustificada por 2 semanas consecutivas.
- Los casos detectados deben contrastarse en el respectivo Libro de firma, para descartar omisión o error de ingreso de la firma al Sistema Informático de Libertad Condicional.
- En caso de confirmarse un período de inasistencia sin justificar, se debe proceder a la revisión del/la usuario/a en el Sistema Interno para descartar prisión preventiva o una nueva condena.
- Informar nómina de ingresos a unidad penal al Tribunal de Conducta³⁴, quien deberá informar a la Comisión de Libertad Condicional para la toma de decisiones.

³³ Formato disponible en el Compendio de normas de Indulto y Libertad Condicional 2015, pág. 60.

³⁴ El Tribunal de conducta es un órgano colegiado, conformado por funcionarios de la unidad de control, que poseen la facultad de resolver sobre aquellos casos en que procede dar cuenta del incumplimiento de las obligaciones del/la liberto/a condicional a la Comisión de Libertad Condicional solicitando así la revocación del beneficio (Formato disponible en el Compendio de normas de Indulto y Libertad Condicional 2015, pág. 64). Su funcionamiento está normado en el Decreto Supremo N°338, que aprueba el reglamento del Decreto Ley N°321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad y modifica el decreto supremo N°518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, publicado el 17 de diciembre de 2020.

- En caso de no contar con información institucional que justifique las ausencias, se debe tomar contacto con el/a liberto/a o familiar para conocer si existe una situación que justifique la inasistencia; en caso contrario se debe informar a la Comisión de Libertad Condicional, quienes analizan caso a caso resolviendo dentro de dos posibles vías:
 - i) **Revocación:** Decisión de la Comisión de Libertad Condicional que genera el efecto del término del cumplimiento de la condena en modalidad de libertad condicional, debiendo retomar al cumplimiento efectivo (reingreso a la unidad penal).
 - ii) **Continuidad:** Decisión de la Comisión de Libertad Condicional de que no hubo un incumplimiento en los términos que indica la norma, por ende, el control semanal debe continuar.
- c) **Solicitudes de Postulación a Beneficios Legales:** Se relaciona con el análisis que debe efectuar el/a Operador/a de Libertad Condicional del C.A.I.S. o Unidad, en orden a determinar, en primer término, si a la persona condenada le fueron reconocidos meses de rebaja por la Comisión de Rebaja de Condena al alero de la Ley N°19.856, para posteriormente analizar si el período de sujeción en libertad condicional realizado por el/la liberto/a le permite solicitar el reconocimiento de dichos meses al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En segundo término, debe determinar si el período de cumplimiento realizado por el/la liberto/a le permite acceder al beneficio establecido en el art. 8° del Decreto Ley N°321, considerando los meses de rebaja, si corresponde.



- **Postulación a Art. 8° Decreto Ley N°321:** Todos los/as libertos/as que cumplan con las condiciones establecidas en la ley podrán postular, ante la Comisión de Libertad Condicional que corresponda, para obtener el beneficio de la Libertad Completa por aplicación del citado artículo. Los procesos a realizar para gestionar este beneficio son los siguientes:
 - i) El/la Operador/a de Libertad Condicional deberá verificar la fecha de cumplimiento de la mitad de la condena desde el Sistema Interno por cada liberto/a. Este ejercicio se debe realizar una vez terminado el ingreso administrativo. Adicionalmente deberá verificar si cuentan con Decreto de Rebaja de Condena contemplado en la Ley N°19.856 aprobado y cargado al Sistema Interno.
 - ii) 90 días antes de la fecha de cumplimiento del medio saldo de condena, el/la Operador/a de Libertad Condicional deberá verificar el cumplimiento de los requisitos que indica la ley. De estar todo conforme, deberá remitir a la Comisión de Libertad Condicional la solicitud de aplicación del Art.8° con documentos de respaldo.³⁵
 - iii) Una vez recibida la resolución de la Comisión de Libertad Condicional concediendo libertad completa, se debe proceder a egresar del sistema interno por Art. 8°.

Cabe mencionar que el/la liberto/a condicional puede negarse a solicitar dicho beneficio, para lo cual deberá dejar testimonio de su renuncia por escrito.³⁶

La postulación al Art. 8° sólo puede limitarse al incumplimiento de sus requisitos, esto es, aquellos establecidos en la misma norma, siendo posible que la postulación a la libertad

³⁵ Formatos disponibles en el Compendio de normas de Indulto y Libertad Condicional 2015, pág. 69 – 71.

³⁶ Formato disponible en el Compendio de normas de indulto y Libertad Condicional 2015, pág. 72.

completa sea realizada en más de una ocasión, al evaluarse que al momento de la nueva postulación los requisitos se están satisfaciendo, lo que finalmente deberá ser resuelto por la Comisión de Libertad Condicional respectiva.³⁷

- **Postulación a Ley N°19.856³⁸:** Esta norma fija el procedimiento para la obtención del beneficio de rebaja de condena, indicando que quienes, en conformidad a lo establecido en el artículo 4° de la presente ley, estuvieren en condiciones de solicitar el beneficio de reducción de condena ante el Presidente de la República, a través del Ministro de Justicia. Los procesos a realizar para gestionar este beneficio son los siguientes:

- i) En la totalidad de los casos, se debe verificar si el/a liberto/a tiene rebaja de condena aprobada desde el sistema cerrado.
- ii) Si tiene rebaja de condena aprobada, el/a Operador/a de Libertad Condicional deberá corroborar que el decreto se encuentra en el expediente del/la liberto/a y que esté registrado en el Sistema Interno. Posteriormente debe calcular nueva fecha de egreso y registrar en el Sistema Interno. En el sistema de archivo el/a Operador/a de Libertad Condicional deberá modificar la fecha de egreso en el visor del expediente, registrando la nueva fecha de egreso. Adicionalmente, el expediente deberá moverse al archivo que corresponda según la nueva fecha de egreso. En caso de que proceda, el/a Operador/a de Libertad Condicional deberá realizar sumatoria del tiempo de rebaja de condena a los/as libertos/as beneficiados/as además por Art. 8° del Decreto Ley N°321.
- iii) Si no tiene rebaja de condena aprobada, el/a Operador/a de Libertad Condicional deberá revisar en la ficha individual del sistema interno el tiempo de rebaja acumulado y vigente del/la liberto/a durante su estadía en el sistema cerrado. Si tiene tiempo de rebaja acumulado y vigente, debe informar al liberto/a de su posibilidad de postulación, y si se manifiesta de acuerdo, firmar la solicitud tipo³⁹. En caso de rechazar la posibilidad de postulación, debe firmar Acta de Rechazo. Una vez firmada la solicitud por parte del liberto/a, el/a Operador/a de Libertad Condicional debe remitir la solicitud a la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos correspondiente, de acuerdo a los plazos estipulados por la ley, adjuntando un informe de cumplimiento que da cuenta del acatamiento de la condena en modalidad de libertad condicional⁴⁰, para la elaboración del respectivo decreto.

Una vez recibido el decreto del Ministro de Justicia y Derechos Humanos ⁴¹indicando el tiempo de rebaja de condena aprobado o rechazado, se debe registrar en el Sistema Interno, siendo cargado como archivo, y registrar nueva fecha de egreso.

- d) **Solicitud de Traslados:** Todos/as los/as libertos/as pueden cambiar la unidad de control que les ha sido asignada por resolución de la Corte de Apelaciones que otorgó el beneficio, ya sea de forma temporal o por cambio definitivo de domicilio a una comuna, ciudad o región fuera de la jurisdicción de la unidad original. Dicha solicitud puede ser realizada por el/a liberto/a en cualquier momento del periodo de cumplimiento, debiendo proceder de acuerdo al tipo de traslado que se solicite:

- **Traslados temporales:**

- El/la liberto/a condicional solicita a la unidad de control, de forma escrita, un permiso temporal por un periodo máximo de 60 días.
- Será el Tribunal de Conducta de la unidad de control, quienes evalúan los antecedentes del caso, y mediante acta, informarán de su decisión al usuario/a y a la unidad de control temporal⁴².
- La unidad de control temporal, debe realizar el control semanal del/la liberto/a condicional.

³⁷ Ord. N°4096 del 27/07/2021 de la Jefa de División de Reinserción Social, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

³⁸ Ley 19.856 que crea un Sistema de Reinserción Social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta.

³⁹ Formato disponible en el Compendio de normas de Indulto y Libertad Condicional 2015, pág. 66.

⁴⁰ Formatos disponibles en el Compendio de normas de Indulto y Libertad Condicional 2015, págs. 67 – 68.

⁴¹ Órgano encargado de la revisión de los antecedentes enviados en el proceso de reconocimiento de meses de rebaja, primeramente, a través de sus respectivas Secretarías Regionales Ministeriales de Justicia y Derechos Humanos, y con posterioridad, emitiendo, a nivel central, un decreto que reconoce o rechaza los meses de rebaja determinados por la Comisión de Rebaja de Condena.

⁴² Formato disponible en el Compendio de normas de Indulto y Libertad Condicional 2015, pág. 62.

- En caso de ser autorizado el traslado temporal, la unidad de origen del/la liberto/a deberá mover el expediente al archivo de traslados temporales, ordenándolo por plazo o tiempo de permiso.
- Al término del plazo autorizado, el/la liberto/a deberá presentarse a la unidad de control de origen para continuar con sus controles habituales.

• **Traslados definitivos.**

- El/la liberto/a informa a la unidad de control nuevos antecedentes para solicitar traslado definitivo.
- El/a Operador/a de Libertad Condicional, a través de un oficio firmado por el/la Jefe/a de Unidad de Control, deberá remitir solicitud a la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones respectiva⁴³.
- La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones respectiva emite una resolución, documento que indica la autorización para el traslado y nueva unidad de control.
- El/a Operador/a de Libertad Condicional de la unidad de origen será el/a encargado/a de coordinar con nueva unidad de control la presentación del/la liberto/a.
- El/a Operador/a de Libertad Condicional de la unidad de origen deberá registrar en el Módulo de Libertad Condicional del Sistema Interno, el traslado de unidad de control, tipificándolo como egreso por traslado, por lo que automáticamente el sistema interno mueve el caso como vigente a la nueva unidad de control.
- El/a Operador/a de Libertad Condicional de la unidad de origen deberá remitir el expediente completo a la nueva unidad de control.

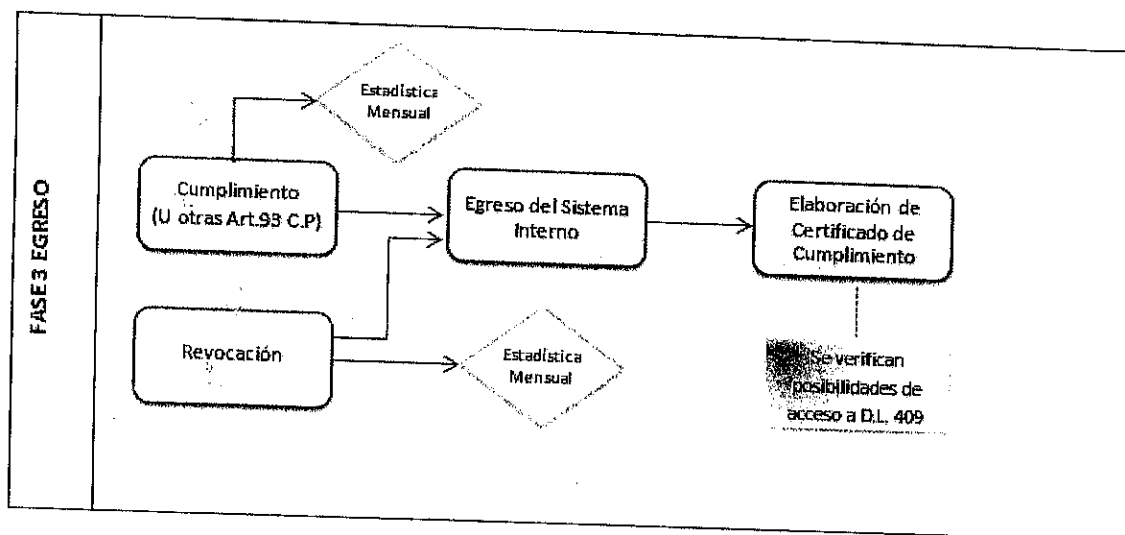
e) Solicitud de control en Carabineros de Chile: Todos/as los/as libertos/as que mantengan domicilio ubicado en lugares de difícil acceso, que no les permita realizar el control semanal en la unidad de origen, podrán exponer ante la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones que les otorgó el beneficio, dicha situación y solicitar el control semanal en una unidad policial distinta de Gendarmería de Chile. Los procesos para gestionar ésto son los siguientes:

- El/a liberto/a condicional deberá presentar por escrito su requerimiento al Operador/a de Libertad Condicional, quien deberá solicitar a la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones correspondiente su autorización⁴⁴.
- Mediante la emisión de una resolución, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones correspondiente autoriza el control de firma en una unidad de Carabineros de Chile cercana al domicilio. Con este documento el/la Operador/a de Libertad Condicional deberá coordinar con Carabineros de Chile la presentación del/la liberto/a en la unidad designada.
- Además, desde la unidad de control de origen se deberá remitir a la unidad de anexo los antecedentes que permitan realizar el control de firma semanal.
- El/a Operador/a de Libertad Condicional deberá solicitar trimestralmente a Carabineros de Chile, la actualización de firmas en el libro de control de dicha tenencia o comisaría. Con esta información el/a Operador/a debe proceder a actualizar manualmente la firma electrónica en el Módulo de Libertad condicional y archivar el informe de firmas actualizado en el expediente físico como verificador de la asistencia.

⁴³ Formato disponible en el Compendio de normas de Indulto y Libertad Condicional 2015, pág. 63.

⁴⁴ Formato disponible en el Compendio de normas de Indulto y Libertad Condicional 2015, pág. 63.

4.3.- FASE DE EGRESO:



Esta fase implica el cierre o término de proceso de control de la libertad condicional y puede originarse por tres posibles vías:

a) **Cumplimiento:** Refiere al término de la responsabilidad penal por cumplirse el período de condena impuesto, o bien por verificarse otras causales establecidas en el art. 93 del Código Penal. Las tareas implicadas en este proceso son las siguientes:

- El/a Operador/a de Libertad Condicional deberá realizar una revisión constante de las fechas de egreso de los/as libertos/as condicionales; debido a que los cumplimientos de condena se producen de forma permanentemente, se deberá verificar además que la fecha de cumplimiento incluye rebaja de condena, Art. N°8 y/o multa a pagar con días de condena.

- El/a Operador/a de Libertad Condicional deberá remitir, a la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones correspondiente, el certificado de cumplimiento de la/s condena/s, documento que acredita que el/a liberto/a ha dado cumplimiento a todos los requisitos bajo el control antiguo o nuevo, y si es el caso, deja constancia de la determinación de la Comisión de Libertad Condicional de dar por terminado el proceso de supervisión debido al otorgamiento de beneficios legales. Dicho documento además se copia al Tribunal de Garantía o Tribunal Oral en lo Penal que lo condenó⁴⁵.

- El/la Operador/a de Libertad Condicional deberá actualizar la información del/la usuario/a en el sistema informático de registro de condenados y Módulo de Libertad Condicional del sistema informático, y en la estadística mensual del CA.I.S. o Unidad de control.

- Es de suma importancia que el Operador de Libertad Condicional informe al liberto/a que egresa por cumplimiento respecto de la eliminación de antecedentes, y lo derive a la oficina de gestión del Decreto Ley N°409 para el ejercicio de este derecho.

b) **Revocación:** Corresponde a la decisión de la Comisión de Libertad Condicional que genera el efecto del término del cumplimiento de la condena en modalidad de libertad condicional, debiendo retornar al cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad en la unidad de origen. Esta determinación puede deberse a dos causales:

i) Por ausencias o abandono del control, procedimiento ya revisado en el apartado Fase de Control.

ii) Por nueva condena, que implica egresar al liberto/a, y que, por resolución de la Comisión de Libertad Condicional, sea revocado por causal de nueva condena. Para que dicha causal se concrete se debe ejecutar el siguiente proceso:

- El/a Operador/a de Libertad Condicional realiza una revisión diaria de los listados de imputados/as en el Módulo de Libertad Condicional del sistema cerrado y en el Sistema SIRS del sistema abierto. Al detectar que en la nómina aparece un liberto/a como condenado, debe ser egresado/a por nueva condena e informar a la Comisión de Libertad Condicional, solicitando la revocación del beneficio, dentro de tres días hábiles desde la resolución del tribunal que lo condenó.

⁴⁵ Formato disponible en el Compendio de normas de Indulto y Libertad Condicional 2015, pág. 74.

- Una vez recibida la resolución de la Comisión de Libertad condicional que determina la revocación por la causal de nueva condena, el/a Operador/a de Libertad Condicional debe proceder a egresar del Módulo de Libertad Condicional del Sistema Interno al liberto/a por la causal de nueva condena. Además, debe cerrar el expediente físico (cerrar el folio del libro de firma), consignando la causal de nueva condena, y remitir a la unidad penal en la que cumplirá el saldo de condena.

c) Fallecimiento: El egreso por esta causal debe estar fundado en la recolección de medios de prueba que certifiquen el deceso del/la usuario/a:

- El/a Operador/a de Libertad Condicional detecta, a través de la revisión diaria de los sistemas de control (Módulo de Libertad Condicional o libros), períodos de inasistencia superior a dos semanas consecutivas, sin justificar por el/a liberto/a o por su red de apoyo.

- El/a Operador/a de Libertad Condicional procede a la revisión en base de datos del Registro Civil e Identificación, para verificar la existencia de un Certificado de Defunción. Encontrado el documento, el Operador deberá gestionar ante el Registro Civil copia de dicho Certificado.

- Obtenido el documento, el/a Operador/a de Libertad Condicional debe realizar el egreso por causal de fallecimiento, e informar a la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones respectiva y al Tribunal de Garantía u Oral en lo Penal que lo condenó.

Capítulo IV

Procesos técnicos: Oferta programática para la población del sistema postpenitenciario

La oferta programática dispuesta por el sistema postpenitenciario responde a la necesidad de entregar servicios de apoyo a la reinserción social de las personas que han cumplido una condena privativa de libertad o pena sustitutiva y, que además están adscritas al D.L. N°409 para la eliminación de antecedentes penales; pero también, a la población que se encuentra en libertad condicional sujeta a una firma mensual como parte del control de su beneficio. Tanto los procesos técnicos e indicaciones que se detallan a continuación, comenzarán a regir una vez entre en funcionamiento el Programa de Apoyo a la Integración Social (P.A.I.S.).

El diseño de la intervención postpenitenciaria que ha sido elaborada se caracteriza por ser estructurada y diferenciada. Es estructurada por cuanto será provista a través del ingreso a un programa de intervención con etapas previamente definidas por las cuales deberán pasar todas las personas que deseen recibir los servicios de apoyo postpenitenciario. Pero también es diferenciada porque el acceso a la oferta programática toma en consideración los desafíos que deben enfrentar las personas en su proceso de reinserción social, en función de su calidad jurídica (personas que ya cumplieron condena versus personas que aún cumplen condena) y de sus necesidades de intervención. De este modo, y como se detallará más adelante, la oferta programática a la que pueden acceder contempla la participación en actividades de intervención psicosocial especializada orientada a la modificación de los factores de riesgo que inciden en mayor medida con la reincidencia delictual; el acceso a prestaciones que favorezcan la integración socio-comunitaria y, otras que se orienten a mejorar las oportunidades de empleabilidad de las personas que acuden a los C.A.I.S.

Dado que el sistema postpenitenciario atiende a población que ya cumplió condena (D.L. 409) y a población que aún está cumpliendo parte de su condena (libertad condicional e indultos), es necesario que la oferta programática contemple acciones diferenciadas que tomen en cuenta el rol que le compete al Estado para facilitar la reinserción social, así como las áreas en que las propias personas solicitan apoyo para alejarse de la actividad delictiva. Esto último, es fundamental para potenciar el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de quienes acuden a los C.A.I.S, reconociendo los recursos de cada persona en la búsqueda de oportunidades, y por sobre todo, facilitando la capacidad de respuesta a la oferta de servicios dispuesta para esta población.

En este contexto, el diseño de la intervención postpenitenciaria y/o de la oferta programática para las personas que acuden a los C.A.I.S se organiza de la siguiente manera:

a) Población que ya cumplió condena e inscrita para la eliminación de sus antecedentes penales o en proceso de aclaración prontuarial provenientes del sistema abierto: considerando que esta población proviene del cumplimiento de una pena sustitutiva, que en el caso de la libertad vigilada y libertad vigilada intensiva, contempla el acceso a intervenciones especializadas según riesgo de reincidencia, la provisión de la oferta programática se ha diseñado con miras a promover el acceso a prestaciones sociales o de garantía de derechos que se refieran a necesidades no hayan podido resolverse durante el cumplimiento de la pena sustitutiva. Su objetivo es favorecer la integración social de manera igualitaria de la población que habiendo concluido su pena requiere apoyo para disminuir sus niveles de exclusión social y de vulnerabilidad psicosocial para mantenerse alejadas de la actividad delictiva. Operativamente, y como estrategia de apoyo postpenitenciario, se contemplan dos grandes acciones en esta línea: (1) facilitar la integración socio-comunitaria orientada a resolver requerimientos en el ámbito educacional, salud física o mental, asistencia social, familiar o jurídica, etc., y (2) mejorar la empleabilidad. Estas acciones pueden realizarse a través de intervenciones individuales, asistencia a programas o promoviendo el acceso a redes de apoyo como elementos promotores del proceso de reinserción social.

b) Población que ya cumplió condena e inscrita para la eliminación de sus antecedentes penales o en proceso de aclaración prontuarial provenientes del sistema cerrado: la población que egresa del cumplimiento de una pena de cárcel presenta múltiples necesidades vinculadas con sus probabilidades de reincidencia y/o con los efectos negativos generados por el encarcelamiento que requieren de un abordaje especializado para apoyar de manera eficaz el tránsito a la comunidad. Para ello, se ha diseñado una oferta programática diferenciada, en función del tiempo que ha transcurrido desde que la persona ha egresado de la unidad penal por cumplimiento de condena.

- *Población del sistema cerrado cuya fecha de cumplimiento de condena y egreso de la unidad penal sea **igual o inferior a seis meses** en relación a la fecha de ingreso al control administrativo para la eliminación de sus antecedentes penales:* considerando que los antecedentes disponibles indican que los primeros seis meses tras el cumplimiento de condena constituye un período crítico en el que se observa una mayor reincidencia delictiva, se contemplan tres acciones diferenciadas según el nivel de riesgo de reincidencia y las necesidades de intervención al que puede acceder esta población: (1) intervención psicosocial especializada orientada al abordaje de las necesidades criminógenas presentes a nivel individual que inciden directamente en la probabilidad de reincidir, (2) prestaciones de integración socio-comunitaria orientadas a resolver requerimientos en el ámbito educacional, salud física o mental, asistencia social, familiar o jurídica, etc., y (3) prestaciones que se orienten a mejorar la empleabilidad a través de la promoción del acceso a redes de apoyo hasta la facilitación de la inserción en el mercado laboral como elementos promotores del proceso de reinserción social
- *Población del sistema cerrado cuya fecha de cumplimiento de condena y egreso de la unidad penal sea **igual o superior a seis meses** en relación a la fecha de ingreso al control administrativo para la eliminación de sus antecedentes penales:* debido a que los recursos son escasos se ha establecido un corte temporal para el acceso a la intervención psicosocial criminológica. Las personas que llevan más de seis meses en libertad y que ingresan al proceso de eliminación de antecedentes penales, podrán participar de las acciones dispuestas para (1) facilitar la integración socio-comunitaria orientada a resolver requerimientos en el ámbito educacional, salud física o mental, asistencia social, familiar o jurídica, etc., y (2) prestaciones para mejorar la empleabilidad. En la eventualidad de que los recursos lo permitan y que los cupos no se hayan completado, se podrá ofrecer acciones de intervención psicosocial criminológica a esta población siempre que el tiempo transcurrido desde su egreso de la unidad penal no supere los dos años.

c) Población que aún cumple condena y que se encuentra con el beneficio de la libertad condicional o en indulto conmutativo: la oferta programática para esta población sigue los mismos lineamientos que la población que ha egresado del sistema cerrado hace menos de seis meses y contempla las siguientes acciones: (1) entregar intervención psicosocial especializada orientada al abordaje de las necesidades criminógenas presentes a nivel individual que inciden directamente en la probabilidad de reincidir, (2) facilitar la integración socio-comunitaria orientada a resolver requerimientos en el ámbito educacional, salud física

o mental, asistencia social, familiar o jurídica, etc., y (3) mejorar la empleabilidad a través de la promoción del acceso a redes de apoyo hasta la facilitación de la inserción en el mercado laboral como elementos promotores del proceso de reinserción social

Cabe señalar que el apoyo postpenitenciario que podrán recibir las personas recién descritas que acuden a los C.A.I.S se traducirá en el ingreso a un programa de intervención, cuyas acciones se desarrollarán en un plazo de hasta doce meses continuos, con un mínimo de permanencia de tres meses en aquellos casos en que se identifiquen necesidades puntuales y/o abordables de forma rápida mediante una gestión específica y un período breve de seguimiento posterior. Las personas no podrán volver a ingresar al Programa, salvo que reciban una nueva condena durante o posterior a su participación en el mismo, pudiendo volver a postular al finalizar esta nueva condena.

Estructura de la oferta programática para la población postpenitenciaria

A continuación, se presenta la estructura general para acceder de la oferta programática con la que cuenta el sistema postpenitenciario, a partir de los procesos técnicos que se encuentran a la base de la intervención ofrecida por los C.A.I.S., los que comenzarán a regir una vez entre en funcionamiento el Programa de Apoyo a la Integración Social (P.A.I.S).

Figura 1: Etapas de la oferta programática



De acuerdo con lo mencionado previamente, el acceso a la oferta programática se realiza ingresando a un programa de intervención, cuyas etapas se presentan en la figura 1. Estas etapas están predefinidas y el paso por ellas es común a todas las poblaciones atendidas por el sistema postpenitenciario, sin embargo, hay algunas variaciones en las actividades que deberán realizarse según las características de la población, lo que puede requerir de procedimientos distintos que serán especificados cuando corresponda.

Junto con lo anterior, es importante recordar que el enfoque de género es parte transversal del apoyo postpenitenciario, recordando que la incorporación de este enfoque trasciende la mera visibilización de las mujeres y/o población con diversidad y disidencias de género, ya que también deben considerar acciones dirigidas hacia los hombres de manera tal de contribuir al cambio en las relaciones de género que se producen y reproducen a nivel cultural, debido entre otros factores a la asignación histórica de roles. Asimismo, y en particular respecto a la intervención postpenitenciaria destinada a las mujeres que cumplen o han cumplido una condena privativa de libertad o en el medio libre, es importante poner especial atención a ciertas circunstancias como las experiencias de abuso y victimización, salud mental, etc., que la literatura ha identificado como aspectos que influyen en la capacidad de respuesta a la intervención, y por ende, a la efectividad del apoyo postpenitenciario ofrecido para facilitar su reinserción social y disminuir reincidencia.

En lo que sigue, se describen los procesos técnicos asociados a cada una de las etapas que deben ejecutarse para que la población atendida por los C.A.I.S pueda acceder a una oferta programática a través de su participación en el programa de intervención diseñado por el sistema postpenitenciario para tales efectos.

1.- Invitación

Pese a que es posible que las personas se acerquen por su cuenta a los C.A.I.S para solicitar apoyo en algún área que pueda facilitar su reinserción social, en términos generales, se requiere efectuar actividades de difusión para que la población penal conozca la oferta programática que ha dispuesto el sistema postpenitenciario para la población que ha cumplido condena o que se encuentra con el beneficio de la libertad condicional o con un indulto conmutativo.

El/la encargado/a de redes es el responsable de ejecutar de manera permanente actividades de difusión e invitación en los C.R.S., unidades penales del sistema cerrado, y C.A.I.S. del país, utilizando todos los medios de difusión instruidos para este fin y contemplados en el plan de difusión anual del sistema postpenitenciario. Las acciones de difusión contemplan charlas destinadas a usuarios/as que se encuentren en las unidades antes descritas, especificándoles la diferenciación en la entrega de servicio y el tipo de actividades a las que podrán acceder, de acuerdo a las características de la población mencionadas previamente.

El propósito de la invitación es presentar a la población objetivo los alcances del apoyo postpenitenciario, entregando información respecto al acceso a la oferta disponible que se lleva a cabo en los C.A.I.S. a nivel nacional, enfatizando su valor como estrategia que contribuiría a favorecer la reinserción social, acceder a redes de apoyo y/o a la oferta intersectorial y comunitaria, aumentar la posibilidad de acceso a puestos de trabajo y/o adquirir nuevas habilidades laborales por medio de la capacitación laboral, de acuerdo con lo siguiente:

- a) Para las personas que ya cumplieron condena y se encuentran adscritas al proceso de eliminación de antecedentes penales, o en proceso de aclaración prontuarial, y que a su vez provienen del sistema abierto, la invitación debe contener información relativa a la participación en acciones de integración socio-comunitaria y mejoramiento de la empleabilidad.
- b) En el caso de las personas que ya cumplieron condena y se encuentran adscritas al proceso de eliminación de antecedentes penales, o en proceso de aclaración prontuarial, y que a su vez provienen del sistema cerrado, la invitación debe hacer referencia a su posible incorporación a las siguientes actividades que serán definidas a partir del tiempo que ha transcurrido desde su egreso de la unidad penal y/o del resultado de la evaluación del caso: intervención psicosocial criminológica, integración socio-comunitaria y/o mejoramiento de la empleabilidad, de acuerdo con lo descrito previamente.
- c) En el caso de las personas que se encuentran cumpliendo condena con el beneficio de libertad condicional o con indulto conmutativo, se debe enfatizar que la oferta disponible para esta población, está dirigida a abordar las necesidades más urgentes, de acuerdo al riesgo de reincidencia, necesidades criminógenas y consideraciones de género.

Ante la eventualidad que la persona manifieste voluntad para participar de la oferta programática, el/la encargado/a de redes, en coordinación con el profesional de programa, deberán verificar el cumplimiento de los requisitos para el ingreso al programa, los que se definen a partir de las siguientes exigencias:

- Para la población que ya cumplió condena (DL. N°409), debe encontrarse en un periodo que, como plazo máximo, es de 36 meses desde el término de condena, establecido desde la fecha de egreso del establecimiento penitenciario de cumplimiento hasta el ingreso a programa de intervención.
- Que el saldo del período de control administrativo sea igual o mayor a 3 meses (este saldo debe ser siempre mayor al período de participación establecido para la persona en el programa).
- Para la población que se encuentra cumpliendo condena (libertad condicional e indultos), se requiere un saldo de condena de, al menos 3 meses previo a la fecha de postulación al art. 8° del Decreto Ley N°321 o del término de la condena, según sea el caso. Este saldo debe ser suficiente para permitir la participación de la persona en las distintas actividades contempladas dentro de la intervención y consideradas esenciales para el logro de los objetivos de su Plan de Integración.
- Voluntariedad para participar de la oferta programática propuesta, la que en ningún caso podrá presentarse a la población que se encuentra cumpliendo condena ni aquella en proceso de eliminación de antecedentes penales, como condición de su proceso de control.

Resumiendo, en esta etapa se realiza una invitación y se evalúa el cumplimiento de los requisitos para el ingreso al programa, de acuerdo con las características de la población y

los requisitos antes mencionados. De esta manera, la invitación, constituye una acción previa a la etapa de ingreso al programa, en la cual se debe entregar la información correspondiente.

2.- Ingreso

Para el desarrollo de esta fase, quien haya contactado a la persona interesada en participar del programa, habiendo realizado la verificación del cumplimiento de los requisitos generales, deberá informar a la brevedad a la jefatura de unidad el nombre, antecedentes estadísticos (por ejemplo, saldo de condena, fecha de cumplimiento de condena, etc.) y normativos asociados la vinculación de la persona con el sistema postpenitenciario y cualquier otra información que haya recabado en la fase anterior. Con dicha información, la jefatura de unidad asignará un/a profesional del programa de intervención para que realice el proceso de ingreso de la persona.

Se espera que aquellas personas que se hayan interesado en las prestaciones difundidas y que cumplan con los criterios generales de selección, sean citadas a una entrevista con un/a profesional de programa. En esta entrevista, el/la profesional de intervención deberá comprobar el cumplimiento de los criterios de ingreso señalados, realizar el registro administrativo instruido para el ingreso al programa y explicar de manera concisa aquellos aspectos de la oferta programática que no hayan quedado resueltos en la fase anterior, procurando ser claro en el lenguaje utilizado y preciso en los procedimientos que se llevarán a cabo, indicando que la/s entrevista/s posterior(es) permite(n) verificar la presencia de necesidades específicas en los ámbitos a abordar durante el periodo en que participará del Programa. En esta entrevista, se realizará un cribaje general que permita constatar la presencia de necesidades que pueden ser abordadas en el marco del Programa, prestando especial atención a las situaciones emergentes y requerimientos que surjan en el marco de la perspectiva de género y que pueden afectar la capacidad de respuesta a las actividades del Plan de Integración.

Un segundo hito dentro de esta fase de ingreso de la persona al programa de intervención, será la firma del *Consentimiento Informado* instruido desde el Departamento Postpenitenciario, que es el documento mediante el cual acepta recibir apoyo en su proceso de reinserción social y participar del proceso de evaluación de la etapa siguiente. A partir de esta acción, la persona ingresa formalmente al programa de intervención.

3.- Evaluación y Diseño del Plan de Integración

3.1.- Evaluación

El/la profesional del programa de intervención asignado/a como encargo del caso, implementará un proceso de evaluación inicial, a través de entrevistas individuales y con el apoyo de instrumentos diseñados para el levantamiento de las necesidades de intervención que permitirán analizar y establecer cuáles de ellas constituyen áreas que requieren ser sean incorporadas en el Plan de Integración que orientará la provisión de la oferta programática. En este proceso de evaluación, se deben identificar, además, las narrativas y particularidades que la persona manifiesta y que puedan servir como palancas de cambio que apoyen el desarrollo del plan de integración, considerando los diversos contextos de desenvolvimiento social y sus experiencias vitales.

Dentro de los instrumentos disponibles para identificar las necesidades de intervención, se cuenta con la ficha de levantamiento de necesidades sociales y comunitarias en relación al abordaje de aspectos que permitan generar o fortalecer ámbitos de integración sociocomunitaria; la ficha de evaluación de situación laboral, para el ámbito de mejoramiento de la empleabilidad; y el instrumento para la evaluación de riesgo de reincidencia IGI. Dada la diferenciación de la oferta según tipo de población, estos instrumentos y fichas se aplicarán en base a las características de la población y el tipo de prestaciones a las que pueden acceder:

- a) En el caso de las personas que **ya cumplieron condena y que están inscritas para la eliminación de sus antecedentes penales o en proceso de aclaración prontuarial provenientes del sistema abierto y además, para la población que proviene del**

sistema cerrado y se encuentra en proceso de eliminación de antecedentes, o en aclaración prontuarial, y encontrándose en un periodo mayor a seis meses desde el cumplimiento de condena: se realizará un proceso de entrevista y la aplicación de la ficha de levantamiento de necesidades sociales y comunitarias, así como también la ficha de evaluación de situación laboral con el fin de pesquisar las necesidades de las personas en el ámbito de la integración social y la empleabilidad. Dicha información posibilitará promover acciones que faciliten la vinculación con la comunidad, reforzar relaciones prosociales, articular redes de apoyo y establecer actividades destinadas al acceso a la vivienda, acceso a la salud, educación, etc.

- b) En el caso de personas que se encuentren cumpliendo condena con el beneficio de libertad condicional, o con indulto conmutativo, o bien, personas que ya cumplieron condena y se encuentra en proceso de eliminación de antecedentes penales o de aclaración prontuarial, dentro de un periodo no superior a los 6 meses desde el cumplimiento de condena: se realizará un proceso de entrevista y revisión de expedientes que permita valorar su riesgo de reincidencia y necesidades de intervención a través del instrumento IGI. Como resultado del proceso de evaluación será posible establecer los factores posibles de intervenir en los casos que su nivel de riesgo/necesidad resulte medio, alto o muy alto, si esto resulta pertinente. En el caso de las personas que sean evaluadas con un nivel de riesgo/necesidad bajo o muy bajo, serán derivadas a prestaciones en el ámbito de la integración social y la empleabilidad.

Para el levantamiento y análisis de la información de interés para la identificación de necesidades de esta población, el/la profesional del programa desarrollará una serie de actividades, dentro de las cuales destacan la revisión de antecedentes documentales, entrevista/s individual/es, entrevista/s a referente significativo, visita domiciliaria, levantamiento de necesidades de empleabilidad e identificación de necesidades de integración sociocomunitaria junto con la evaluación de factores de riesgo de reincidencia, según corresponda.

Se espera que la evaluación pueda dar cuenta de la situación de cada persona, su estado motivacional y las capacidades individuales con las que cuenta para promover el cambio. En el ámbito del empleo, la evaluación da cuenta de la situación individual, el desarrollo de habilidades y competencias, así como expectativas en torno al empleo.

Además, y con el propósito de integrar comprensivamente tanto los antecedentes como los hallazgos de interés, y previo al diseño del Plan de Integración, el/la profesional del programa elaborará una síntesis de evaluación.

Finalmente, es importante recordar que, tanto en la evaluación como en el diseño del plan de integración, especialmente respecto a los objetivos de intervención, hay que incorporar el enfoque de género para ofrecer respuestas diferenciadas a los diversos requerimientos. Por tanto, se hace necesario comprender de qué manera las necesidades de todas personas, especialmente aquellas propias de las mujeres, disidencias sexuales y otros grupos de particular atención están siendo pesquisados facilitándoles acceso a información, derivación, prestación e intervención.

3.2.- Plan de integración

A partir de la información señalada en la síntesis de evaluación, el/la profesional del programa diseñará un Plan de Integración en el que se establecerán, los objetivos de intervención, las actividades e indicadores propuestos para su logro y los plazos para su desarrollo, estableciendo actividades diferenciadas de acuerdo a las necesidades que presenten los/as usuarios/as, según el tipo de oferta dispuesta según las características de la población que han sido mencionadas a lo largo de este capítulo.

El Plan de Integración es un instrumento dinámico que guía las actividades proyectadas, correspondiendo al documento en el cual se consigna y organizan los objetivos a alcanzar durante el periodo de intervención, integrando las necesidades del/la usuario/a que han sido detectadas durante la evaluación, y que son susceptibles de ser abordadas en el tiempo establecido para ello.

- a) En el caso de las personas que ya cumplieron condena y que están inscritas para la eliminación de sus antecedentes penales o en proceso de aclaración prontuarial provenientes del sistema abierto y además, para la población que proviene del sistema cerrado y se encuentra en proceso de eliminación de antecedentes, o en aclaración prontuarial, y encontrándose en un periodo mayor a seis meses desde el cumplimiento de condena: el Plan de Integración se orientará a: (1) facilitar la integración socio-comunitaria para resolver requerimientos en el ámbito educacional, salud física o mental, asistencia social, familiar o jurídica, participación en actividades culturales, artísticas y deportivas etc. El acceso a estas prestaciones contemplará el desarrollo de entrevistas individuales, consejería, entrevistas familiares y derivación a la red intersectorial. (2) En materia de empleabilidad, que es la otra oferta dispuesta para esta población, el acceso a esta prestación contempla participar en actividades son capacitación en oficio, formación en gestión de emprendimiento e intermediación laboral⁴⁶.
- b) En el caso de personas que se encuentren cumpliendo condena con el beneficio de libertad condicional, o con indulto conmutativo y para la población que proviene del sistema cerrado y se encuentra en proceso de eliminación de antecedentes, o en aclaración prontuarial que se encuentra con un periodo menor a seis meses desde el cumplimiento de condena: se establece un proceso de intervención que está definido por su nivel de riesgo de reincidencia y necesidades de intervención. De este modo, en aquellas personas que han sido evaluadas con nivel de riesgo de reincidencia medio, alto o muy alto, se contempla el desarrollo de actividades de intervención psicosocial criminológica que serán realizadas mediante intervenciones individuales o grupales que existan dentro de la oferta de intervención⁴⁷.

Para la elaboración del plan de integración se establece un plazo máximo de 30 días corridos, los que pueden ser prorrogables hasta en 15 días corridos adicionales, en casos de personas que se evalúen en factores de riesgo de reincidencia delictiva (población proveniente del sistema cerrado). La solicitud de prórroga debe ser autorizada por la Jefatura del Centro.

Tabla 2: Tipo de población y componentes del programa susceptibles de ejecutar

Tipo de población		Características de la población	Intervención psicosocial criminológica	Integración Socio Comunitaria	Mejoramiento de la empleabilidad
Población que ya cumplió condena	D.L. N°409 y ODP	Proveniente del sistema abierto y cerrado con fecha de cumplimiento de condena superior a 6 meses	No	SI	SI
		Proveniente del sistema cerrado con fecha cumplimiento de condena inferior a 6 meses	SI * Solo para la población con medio, alto y muy alto riesgo de reincidencia	SI	SI
Población que aún cumple condena	Libertad Condicional e Indulto	Con nivel de riesgo medio, alto y muy alto	SI	SI	SI
		Con nivel de riesgo muy bajo y bajo	No	SI	SI

4.- Ejecución del Plan de Integración

La ejecución del Plan de Integración contempla la realización de las actividades de manera organizada y coherente con la jerarquización inicial de las necesidades propuestas en la síntesis de la evaluación, de acuerdo a criterios técnicos que consideren la disponibilidad de

⁴⁶ Actividades que están descritas en el manual del Programa de Apoyo a la Integración Social (PAIS).

⁴⁷ Ídem.

oferta en el C.A.I.S o en la red local, la urgencia que presenta la persona por resolver esa necesidad y el tiempo disponible para su abordaje.

Es importante destacar la importancia de construir una relación de trabajo entre el/la profesional de programa y el/la usuario/a en base a un entendimiento y respeto mutuo que permita la consecución de las actividades del plan de integración y el acceso al apoyo postpenitenciario solicitado. En este mismo sentido, cualquier intervención propuesta debe incorporar a las personas como agentes protagónicas de su cambio, reconociendo y reforzando los avances en el proceso de reinserción, esto debido a que las personas van aumentando su sentimiento de autoeficacia y la posibilidad de alcanzar los logros esperados, cuando quienes están a su alrededor empiezan a verlo y por sobre todo empiezan a reconocerlo. De ahí la importancia del refuerzo positivo como de la implementación de actividades simbólicas que den cuenta de los logros alcanzados durante su participación en el programa de intervención.

La modalidad de intervención podrá combinar actividades individuales, grupales y de derivación a la oferta programática intersectorial a desarrollarse con una frecuencia de intervención acorde a las necesidades de la persona partícipe de la intervención.

- a) En el caso de la población que proviene del sistema abierto, y se encuentra adscrita al Decreto Ley N°409 para el proceso de eliminación de antecedentes, o bien se encuentra en proceso de aclaración prontuarial; en conjunto con la población del sistema cerrado, que se encuentra en proceso de eliminación de antecedentes, o en aclaración prontuarial, habiendo cumplido condena en un periodo mayor a seis meses, la supervisión de la ejecución del plan podrá estar condicionada al cumplimiento de cada uno de las actividades previstas en el plan, teniendo sesiones espaciadas y con un tipo de control y supervisión acorde a la agencia de cada una de las personas. De acuerdo a lo mencionado previamente, las actividades contempladas en la integración sociocomunitaria, pueden incluir consejería e intervención individual y/o familiar, focalizándose en fortalecer la integración de las personas, especialmente, en las áreas de vivienda, salud, vinculación sociofamiliar, cultura, artes y deporte, así como obtener asistencia jurídica. Por su parte, las actividades para el mejoramiento de la empleabilidad, contemplan la participación en cursos de capacitación en oficios, formación en gestión de emprendimiento, intermediación laboral y apresto laboral.
- b) En el caso de la población que proviene del sistema cerrado y se encuentren cumpliendo condena con el beneficio de libertad condicional, o con indulto conmutativo y que fue evaluada con nivel de riesgo de reincidencia medio, alto o muy alto, además de ejecutar actividades en materia de mejoramiento de la empleabilidad, o integración sociocomunitaria (éstas últimas también están dirigidas a las personas con muy bajo y bajo riesgo de reincidencia), desarrollará actividades relacionadas a la intervención psicosocial criminológica especializada, las que pueden considerar intervenciones individuales o grupales, focalizadas en el abordaje de los factores criminógenos que promueven el delito, y se vinculan específicamente con la finalidad de disminuir el riesgo de reincidencia.

En el caso de la población de mujeres que son atendidas por los C.A.I.S es importante recordar que todas las actividades que se planifiquen deben adecuarse a sus particularidades, sobre todo en el caso de aquellas que son jefas de hogar o que tengan a su cargo el cuidado de niños/as y otros familiares, deben considerar horarios y tiempo de duración, e implementarse de modo continuo; y pueden ser ejecutadas de manera individual y/o grupal. Considerando que el enfoque de género no se limita solo a esta población, esta indicación también es válida para el caso de la población masculina que se encuentra en estas mismas condiciones.

Es así como los procesos técnicos deben incorporar las temáticas que aluden a la condición de género, tal como la maternidad e historias de vulnerabilidad/victimización, entre otras vivencias que sean pertinentes, debiendo articular la red intersectorial cuando éstas áreas no sean posibles de abordar por el equipo del C.A.I.S. Debe realizarse un acompañamiento que ofrezca, por ejemplo, actividades que permitan acceso a salud mental, de prevención de futuras vulneraciones, ofreciendo mecanismos de actuación frente a la dinámica familiar (en el caso de riesgo de sufrir violencia en el contexto de pareja), desarrollo de habilidades

parentales u otros factores que pueden afectar la continuidad del proceso de cambio y constituirse en factores que lleven a una reincidencia y/o fracaso de la intervención.

La etapa de ejecución del plan de integración podrá tener una extensión máxima de 10 meses desde la aprobación de este.

5.- Egreso

Esta etapa corresponde a la fase final del proceso de intervención, en la cual se espera que la persona haya alcanzado los objetivos propuestos en el Plan de Integración, realizando el análisis, revisión y refuerzo de los ámbitos abordados durante la ejecución del programa, especialmente de los logros alcanzados y las habilidades desarrolladas, evaluando la evolución en las necesidades detectadas inicialmente y los avances registrados en el plan de integración, ya sea por la adquisición de habilidades como por encontrarse inserto/a en los ámbitos que fueron definidos durante el proceso de intervención.

Esta etapa considera las acciones de reevaluación o evaluación final del caso para evaluar los cambios pre y post participación en el programa, y la elaboración de un informe de egreso, que implica lo siguiente:

- Evaluación de necesidades en el ámbito de la empleabilidad y/o necesidades de integración sociocomunitaria, lo que permitirá evaluar la efectividad de la intervención. En el caso de la población a la que se haya evaluado riesgo de reincidencia al ingresar al programa, deberá incluirse, además, la evaluación de los factores criminógenos a su egreso mediante el mismo instrumento utilizado en la valoración inicial (IGI). Esta reevaluación debe estar contenida en el informe de egreso, el cual debe detallar los resultados de la evaluación final respecto a la evaluación inicial, identificando así, los aspectos que se vieron modificados.
- La elaboración de un informe de egreso a toda la población intervenida por el programa, que deberá indicar los logros obtenidos en la evaluación final para cada objetivo establecido en el Plan de Integración, y de acuerdo a los componentes abordados en él. Este informe permite sistematizar el proceso de intervención desarrollado, pero además permite identificar todos aquellos ámbitos o áreas de intervención que no pudieron ser abordados o bien, fueron abordados y no alcanzaron los cambios esperados.

El tiempo considerado para esta etapa es de un (01) mes previo al término de la participación en el programa, período en el cual el/la profesional de programa en conjunto con el/la usuario/a podrán visualizar los logros alcanzados y promover el desarrollo autónomo de aspectos que puedan requerir mayor profundización. Asimismo, en el marco de la intervención con perspectiva de género, además de los objetivos planteados en las diversas áreas, será posible evaluar más focalizadamente los avances que se realizaron de acuerdo a las necesidades específicas detectadas en este ámbito, principalmente en términos de adquisición de mayor autonomía e independencia, acceso a atención en al ámbito de la física y/o mental, asesoramiento jurídico, adquisición de habilidades respecto a parentalidad, entre otros.

Eventualmente, el plazo precedentemente señalado podrá extenderse, en la medida que sea pertinente y se cuente con un saldo de tiempo que permita realizar este ajuste del proceso de egreso.

Capítulo V

Supervisión técnica y monitoreo

La supervisión técnica hace referencia a un proceso sistemático de control, seguimiento, evaluación, orientación, asesoramiento y formación, orientada en último término, a asegurar la calidad y mejora continua de los procesos y tareas propias del sistema postpenitenciario, principalmente en lo relativo a la atención e intervención de sus usuarios/as. En esta línea, la existencia de mecanismos de supervisión formalmente establecidos son un elemento fundamental para disminuir espacios de discrecionalidad profesional arbitraria en los procesos administrativos y técnicos realizados por los C.A.I.S.

Por otro lado, entendemos el monitoreo como un proceso continuo de recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos, con la finalidad de observar y verificar el cumplimiento de metas, avance y desempeño de las actividades que conforman los diversos procedimientos de este subsistema.

La supervisión técnica y monitoreo de las acciones realizadas por el sistema postpenitenciario está a cargo de distintas instancias a nivel nacional, regional y local, las que serán descritas en el presente capítulo, las que comenzarán a regir una vez entre en funcionamiento el Programa de Apoyo a la Integración Social (P.A.I.S). Posteriormente, profundizaremos en la supervisión técnica de la intervención postpenitenciaria, dada la relevancia de este proceso en la reinserción social de nuestros/as usuarios/as.

1.- INSTANCIAS DE SUPERVISIÓN NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

1.1.- NIVEL NACIONAL: DEPARTAMENTO POSTPENITENCIARIO

Las funciones de monitoreo y supervisión del Departamento Postpenitenciario están señaladas en la Res. Ex N°860, del 08 de febrero de 2018, definiéndose específicamente las siguientes:

- Diseñar, proponer, supervisar y controlar las orientaciones técnicas y normativas para la ejecución de acciones conducentes a la reinserción social de personas que han cumplido sus condenas.
- Generar, de conformidad a la legislación vigente, bases de datos estadísticos de las personas que han cumplido sus condenas.

Por otro lado, entre los objetivos de Control de Beneficios de Reinserción del Departamento, desde el punto de vista normativo, jurídico y estadístico, se encuentran:

- La sistematización, monitoreo y consolidación del registro mensual de controles de medidas postpenitenciarias;
- La elaboración de series⁴⁸ e informes estadísticos mensuales y anuales de las medidas postpenitenciarias;
- Colaborar en el desarrollo de estudios de población postpenitenciaria que contribuyan a mejorar las acciones del departamento;
- Supervisar y orientar a las unidades de control de medidas postpenitenciarias y Direcciones Regionales, respecto del cumplimiento de instrucciones, normativas y procesos administrativos relativos al Decreto Ley N°409, Libertad Condicional y las Oficinas de Diagnóstico Prontuario.

1.2.- NIVEL REGIONAL: DIRECCIONES REGIONALES

Según la Resolución Exenta N°910 de 2018, la Unidad Técnica Regional tendrá entre sus funciones, supervisar y controlar los programas y acciones de reinserción social que se llevan a cabo en el sistema postpenitenciario de la región, de conformidad a las normas y

⁴⁸ Las series estadísticas hacen referencia a informes en los cuales se vierten datos por periodos de tiempo, relativas a cualquiera de las medidas postpenitenciarias, y que se desarrollan ya sea, a partir de demandas de autoridades del Servicio o para desarrollar proyecciones estadísticas de población.

orientaciones técnicas impartidas por la Subdirección Técnica, velando por el mejoramiento permanente del régimen postpenitenciario. Dentro de sus tareas, específicas se encuentra coordinar, supervisar y evaluar en la región, los planes y programas de asistencia de las personas que, habiendo cumplido sus condenas, requieran de apoyo para su reinserción social.

En este contexto, la Unidad Técnica Regional debe designar a un profesional que desarrolle funciones relativas a la supervisión del cumplimiento de las Orientaciones Técnicas e Instructivos emanados desde el nivel central, con el objetivo de fortalecer y mejorar los procesos técnicos, denominado Encargado/a Postpenitenciario Regional. Las funciones y responsabilidades de dicho funcionario serán abordadas en el capítulo siguiente.

1.2.- NIVEL LOCAL: CONSEJO TÉCNICO Y OTROS CARGOS

A nivel local, es decir al interior de los C.A.I.S., C.R.S. u otras Unidades de control, las funciones de supervisión y monitoreo están a cargo tanto de ciertos profesionales específicos como del Consejo Técnico.

1.2.1.- Consejo Técnico

Conforme lo indica el Decreto Supremo N°518 de 1998, y la Resolución Exenta N°11.523 del 19 de noviembre de 2012, el Consejo Técnico es un órgano colegiado, cuyo objetivo es asesorar, proponer y articular el correcto funcionamiento de los programas. En el sistema postpenitenciario, este se encuentra conformado por el/la Jefe/a del C.A.I.S., el/la Encargado/a de Programas y, si correspondiere, el/la Encargado/a del Control de Medidas. La asistencia de este último integrante será requerida por el/la Jefe/a del C.A.I.S., en atención a los asuntos a ser tratados en la respectiva sesión. Sumado a lo anterior, podrán participar profesionales especializados de Gendarmería de Chile o pertenecientes a otras instituciones, que puedan entregar asesoría técnica en determinadas materias atendida su ciencia, aptitudes y grado de conocimiento en materias de discusión propias del Consejo Técnico.

Respecto de las funciones del Consejo Técnico, éstas están descritas en el artículo 16° de la resolución exenta antes mencionada, y entre las cuales se destaca:

- Asesorar al/la Jefe/a y equipo técnico del C.A.I.S., en los programas, o proyectos diseñados y ejecutados para la población atendida por éste.
- Asesorar al/la Jefe/a del C.A.I.S., en relación a la formulación, desarrollo y evaluación de programas laborales diseñados para la población beneficiaria.
- Proponer y realizar actividades de capacitación interna, conforme a intereses y necesidades del equipo técnico del C.A.I.S.
- La formulación del plan de trabajo anual, monitoreo y evaluación permanente de las personas condenadas o usuarios/as según correspondiere.
- De la misma forma, deberá considerarse integradas todas aquellas funciones y responsabilidades establecidas en las normas técnicas y legales que regulen el funcionamiento de programas postpenitenciarios, con especial consideración de aquellas relacionadas con la gestión del beneficio de Libertad Condicional.

1.2.2.- Otros cargos de nivel local

A nivel local, al interior de los C.A.I.S., se puede identificar una serie de cargos que desempeñan, entre sus funciones, labores de supervisión y monitoreo, tales como:

- Jefe/a Técnico/a Local del C.A.I.S.
- Encargado/a Técnico de Programas de Intervención
- Encargado/a de Control de Beneficios de Reinserción

Las funciones y responsabilidades específicas asociadas a estos cargos serán desarrolladas en el capítulo pertinente.

2.- SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA INTERVENCIÓN POSTPENITENCIARIA

El propósito de la supervisión de las distintas etapas, procesos y productos técnicos contemplados en la intervención postpenitenciaria persigue *asegurar la calidad y efectividad de las distintas prestaciones provistas a la población intervenida*, a la vez *que promover el aprendizaje y entrenamiento de habilidades interpersonales y técnicas*. Tanto los procesos técnicos e indicaciones que se detallan a continuación, comenzarán a regir una vez entre en funcionamiento el Programa de Apoyo a la Integración Social (P.A.I.S).

La supervisión técnica debe ser una actividad regular durante la totalidad de las etapas o fases de la intervención postpenitenciaria –ingreso, evaluación, diseño y ejecución del Plan de Integración, egreso-, programada, sistemática y organizada, y dirigida principalmente a cautelar la correcta ejecución de los lineamientos de intervención como al entrenamiento y evaluación de las competencias de los/as profesionales en un escenario de colaboración y aprendizaje, por parte del Encargado/a Técnico/a de Programa (o quien la jefatura designe) y/o el Consejo Técnico.

Operacionalmente, este proceso se desarrollará en un marco de respeto y colaboración, de manera presencial, a distancia o mixta e involucrará una figura en calidad de supervisor/a y un/a profesional supervisado/a en los establecimientos penales del sistema postpenitenciario del país.

Por lo tanto, la supervisión de la intervención debe diseñarse y programarse por parte del/la Encargado/a Técnico/a de Programa y/o el Consejo Técnico en conjunto con el/a profesional de intervención, asegurando que la gestión de caso de todas las personas intervenidas en el/los programa/s postpenitenciario/s sea acompañada y supervisada técnicamente por alguna de las figuras indicadas anteriormente, ajustándose tanto a las características del caso –por ejemplo, nivel de riesgo de reincidencia y factores asociados, necesidades de integración social y/o empleabilidad, condiciones de responsividad, etc.- como a las habilidades interpersonales y técnicas del/la profesional responsable de la gestión.

Con el propósito de contar con medios de verificación de las distintas acciones desarrolladas respecto de los componentes de la actividad de supervisión técnica –incluyendo la retroalimentación- se deberá considerar la utilización de las pautas y formatos establecidos para esos fines por el Departamento Postpenitenciario, registrarse en el sistema de registro de la información convenido para la intervención postpenitenciaria y adjuntarse en el expediente individual de la persona que participa de esta intervención.

A continuación, se desarrollarán los procesos de supervisión técnica involucrados en las distintas etapas o fases de la intervención postpenitenciaria.

2.1.- ETAPA DE INGRESO

En esta fase, las funciones de supervisión técnica y administrativa pueden dirigirse a la verificación de saldo de condena suficiente (en el caso de la población que cumple condena) y de plazo máximo desde la fecha de egreso del establecimiento penitenciario de cumplimiento respecto de todas aquellas personas invitadas a participar de la oferta programática, a la comprobación del desarrollo de las gestiones administrativas contempladas en esta fase y a la constatación de la firma del Consentimiento Informado de manera previa al inicio formal del proceso de evaluación.

Además, la figura que cumpla funciones de supervisión en esta etapa podrá asesorar al/la Jefe/a del Centro respecto de la distribución y asignación definitiva de personas interesadas en participar de la oferta programática dentro del equipo profesional del programa.

2.2.- ETAPA DE EVALUACIÓN DE NECESIDADES

El objetivo principal de la supervisión técnica en esta etapa consiste en retroalimentar el proceso de evaluación, específicamente respecto de la *congruencia* entre los resultados de la evaluación y los antecedentes criminológicos y psicosociales disponibles sobre la persona ingresada, junto con la *verificación* que los ámbitos evaluados coincidan con los posibles

componentes ofertados por el programa de acuerdo a la subpoblación de origen de la persona evaluada.

Las acciones contempladas en la supervisión técnica consideran la retroalimentación a los resultados del proceso de evaluación (por ejemplo, el riesgo de reincidencia estimado, necesidades de integración sociocomunitaria o condiciones para la empleabilidad) como la revisión por parte de la figura encargada de la supervisión de los antecedentes disponibles y consultados por parte del/la profesional de intervención, evaluando y orientando los criterios técnicos utilizados y el correcto uso de los instrumentos empleados en la evaluación, corrigiendo todos aquellos aspectos que parezcan de interés para ajustar los resultados respecto de los antecedentes disponibles.

En todos los casos, además, deberá supervisarse la coherencia entre los resultados obtenidos y la síntesis de evaluación propuesta por el/la profesional de intervención, documento que finalmente contendrá el análisis y sistematización de los hallazgos del proceso.

2.3.- ETAPA DE DISEÑO DEL PLAN DE INTEGRACIÓN

Referente a la supervisión técnica en este momento del proceso de intervención, el/la profesional de programa de intervención será responsable de presentar al Consejo Técnico la propuesta de Plan de Integración preliminarmente diseñada, con el objetivo de recibir su aprobación o la retroalimentación que orientará las modificaciones sugeridas (si resulta pertinente) en este espacio de supervisión por parte del órgano supervisor.

Por lo tanto, la función del Consejo Técnico será principalmente la de revisar y aprobar el Plan de Integración con la información técnica disponible, debiendo considerar:

- La coherencia entre los resultados del proceso de evaluación, los hallazgos presentados en la síntesis de evaluación, y las necesidades de intervención especializada, de integración social y/o para el mejoramiento de la empleabilidad contempladas en el Plan de Integración, verificando la fundamentación técnica que respalda su incorporación en la propuesta.
- La jerarquización de necesidades y objetivos a abordar de acuerdo a la conceptualización de caso de caso desarrollada.
- La formulación de los objetivos de intervención, examinando tanto su pertinencia respecto de los resultados de la evaluación desarrollada como la calidad de su formulación.
- La coherencia entre los objetivos, las actividades propuestas, los indicadores de logro y la frecuencia de intervención, considerando el nivel de riesgo de reincidencia general estimado y/o las necesidades establecidas tanto de integración sociocomunitaria como de empleabilidad y/o las consideraciones de responsividad identificadas.

2.4.- ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTEGRACIÓN

La supervisión técnica a la gestión de caso en esta fase deberá precaver que la intervención se desarrolle desde modelos y enfoques que sustentan al programa postpenitenciario y contemple estrategias, actividades y técnicas de intervención respaldadas desde la evidencia empírica respecto de intervención con población penitenciaria y postpenitenciaria, dentro de las cuales destaca la Entrevista Motivacional (McMurrin, 2009; Austin, Williams y Kilgour, 2011; Marshall y Marshall, 2017) y el enfoque Cognitivo-Conductual (Milkman y Wanberg, 2007; Craig, Dixon y Gannon, 2013). En este contexto, es que la supervisión técnica deberá especialmente evaluar que la intervención se inicie una vez que el estadio motivacional —o disposición al cambio respecto de la necesidad a abordar— permita sostener la adherencia a la intervención.

En caso contrario, la supervisión técnica buscará promover la implementación de intervenciones motivacionales específicas respecto de quienes no consideran la posibilidad de la gestión de una necesidad de integración sociocomunitaria (por ejemplo, derivación a la red intersectorial), de mejoramiento de la empleabilidad (por ejemplo, participación en actividades de capacitación o intermediación laboral) o el cambio de una necesidad criminógena particular o que, de acuerdo al proceso de evaluación, aumente la probabilidad de reincidencia o dificulte el proceso de reinserción social.

Además, la figura que ejerza la supervisión técnica deberá monitorear variables como la frecuencia de intervención, el desarrollo de actividades para la gestión de las necesidades identificadas en el Plan de Integración, etc.

Parece importante indicar también la importancia de establecer por parte de los/as profesionales involucrados/as en la actividad de supervisión técnica una planificación de esta actividad, transversal al periodo de intervención, que facilite tanto la retroalimentación como la implementación y seguimiento de eventuales adecuaciones al Plan de Integración orientadas a su enriquecimiento.

2.5.- ETAPA DE EGRESO

Esta etapa corresponde a la fase final de la intervención postpenitenciaria y se orienta principalmente por el análisis de los contenidos abordados durante la participación en el programa y el refuerzo de las competencias desarrolladas. Este proceso de revisión considera, por lo tanto, una evaluación de egreso (o final) y la elaboración de un informe de egreso que sistematice el proceso desarrollado.

En consecuencia, las funciones de supervisión técnica y administrativa en esta fase se focalizarán en orientar al/la profesional de programa de intervención respecto de las estrategias adecuadas para la consolidación de aprendizajes, autogestión de necesidades y vinculación con la red intersectorial, principalmente, promoviendo la autonomía y agencia de la persona.

Capítulo VI

Área de Redes, Educación y Cultura

El Área de Redes, Educación y Cultura depende de la sección de Gestión Técnica y Programas del Departamento Postpenitenciario y es la responsable de orientar, generar y desplegar pautas de trabajo en materia de **difusión, apoyo para la firma de convenios y gestión de redes intersectoriales**, que permitan a los Centros de Apoyo para la Integración Social (C.A.I.S.), dar a conocer el funcionamiento del sistema Postpenitenciario y su oferta programática, tanto a nivel interno como externo.

Las acciones del área de redes, educación y cultura, están dirigidas a la población del sistema postpenitenciario que se encuentra eliminando antecedentes penales o en proceso de aclaración prontuarial; personas beneficiadas con la libertad condicional o con el indulto conmutativo; así como a la población penal que se encuentra próxima a cumplir su condena en Establecimientos Penitenciarios, Centros de Reinserción Social y otras Unidades Penales y Especiales del país; además de aquellos/as que cumplieron sus condenas, pagaron sus multas y egresaron del sistema penitenciario y se están en libertad.

Los objetivos del área de redes, educación y cultura están dirigidos a responder a la necesidad de integración social de las personas que participan en el sistema postpenitenciario, o bien que se encuentran próximas a cumplir condena y son los siguientes:

- a) Diseñar, proponer, coordinar y ejecutar acciones de difusión para promocionar el sistema Postpenitenciario, tanto a nivel interno como externo en coordinación con la Unidad de Comunicaciones del Servicio.
- b) Supervisar las actividades del **plan de difusión**, que desarrollan los C.A.I.S., de acuerdo a la oferta disponible (prestaciones) en el sistema postpenitenciario, a nivel nacional y local.
- c) Gestionar y fortalecer las **redes intersectoriales con instituciones públicas y privadas**, a través de coordinaciones y firma de convenios, tanto a nivel nacional como local, de acuerdo a los lineamientos institucionales de Gendarmería de Chile.
- d) Diseñar, coordinar y gestionar la ejecución de acciones y actividades en educación y cultura, tanto para población femenina como para población masculina, del sistema postpenitenciario, de acuerdo a las necesidades que presentan las personas.

Funciones área de redes, educación y cultura

Dentro de las funciones del área de redes, educación y cultura está el asesorar a la Jefatura del Departamento Postpenitenciario en materias comunicacionales, que consideren la formulación de estrategias de participación, divulgación y promoción permanente (intervención en seminarios, capacitaciones, etc.) acerca de los beneficios y servicios de la política de integración social que lleva a cabo el sistema Postpenitenciario, considerando para ello la generación de soporte gráfico de apoyo para la gestión de difusión que realiza el Departamento y los C.A.I.S., así como también gestionar reuniones con entidades afines a Gendarmería que permitan firmar convenios de colaboración y cooperación que beneficien a hombres como a mujeres que son parte del sistema postpenitenciario y que requieren de acciones diferenciadas, de acuerdo a sus necesidades y distinciones en torno al género.

Asimismo, el área considera entre sus funciones el apoyo permanente a las directrices que entregue la Subdirección de Reinserción Social y que impliquen la coordinación entre Departamentos de su dependencia, con el objetivo de dar a conocer la labor de reinserción social que lleva a cabo la institución. En este mismo sentido, deberá favorecer las acciones que velen por el cumplimiento de las metas definidas por la autoridad, a través de la entrega de información o la generación de material que apoye la gestión de logro. También deberá coordinarse con las diferentes secciones del Departamento para cumplir con las actividades de difusión solicitadas por la autoridad institucional.

A su vez, el Departamento Postpenitenciario, por medio del área de redes, educación y cultura se coordinará con la Unidad de Comunicaciones de la Dirección Nacional, para el diseño del material informativo, el que debe contener información relevante tanto para mujeres como para hombres, de acuerdo a sus necesidades en el ámbito Postpenitenciario.

El material desarrollado será despachado a los respectivos C.A.I.S., de acuerdo a las actividades comprometidas en el plan de difusión, este último elaborado por el/la Encargado/a de Redes de cada Unidad Postpenitenciaria y considera a su vez las condiciones presupuestarias del Departamento. Cada vez que desde el nivel central se remita folletería u otro, los C.A.I.S. deberán enviar una "certificación de recepción", que se adjuntará en el oficio de despacho. Ésta es una exigencia institucional, puesto que el Departamento debe, a su vez, justificar gastos y dar cuenta de la distribución de cada uno de los elementos que envía.

En el ámbito regional, deberá orientar y supervisar a los C.A.I.S. en la elaboración de los Planes de Difusión que deben ejecutar para aumentar la adscripción al Decreto Ley N°409; el conocimiento de la oferta programática y sobre las funciones de la O.D.P., de manera presencial o a través de plataformas informáticas. Estas coordinaciones se realizarán con los/as Encargados/as de Redes de los C.A.I.S. y los/as Coordinadores/as Postpenitenciarios Regionales y para ello se ejecutarán reuniones semestrales, con el fin de mejorar, modificar o mantener las actividades de difusión, evaluar el avance de la gestión de convenios y de redes intersectoriales, así como también la nivelación de estudios de las personas, teniendo en cuenta la diferenciación entre la población masculina y la femenina. A su vez, el área de redes, educación y cultura resguardará que las demás acciones que se estén ejecutando en esta materia de vinculación con el mundo público y privado consideren las necesidades laborales, tanto de hombres como de mujeres, para lograr una intermediación laboral eficaz. Para lo anterior, el área velará por el cumplimiento del estándar en materia de género. La evidencia indica que los procesos para la reinserción social, deben estar diferenciados según categoría de género, ya que las mujeres que han sido condenadas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en comparación a la población masculina. Éstas presentan una historia de marginalización, precariedad laboral y baja escolarización, por lo que las acciones en materia de vinculación con el medio, las redes y la generación de convenios, deben ser desarrollada con esta mirada.

También el área tiene entre sus funciones responder a actividades que pudiera encomendar la Jefatura del Departamento, que no se encuentren definidas en este documento, pero que formen parte de los objetivos generales y específicos de la institución.

A. Plan de difusión

La difusión y la promoción de las acciones que lleva a cabo el sistema postpenitenciario, constituyen labores de un proceso educativo y reflexivo, que pretende contribuir a formar nuevas visiones y a generar propuestas que conduzcan a cambios en la valoración al sistema, influyendo positivamente en los actores que participen del proceso. Por esta razón, el plan de difusión es uno de los pilares fundamentales de las tareas que desarrolla en esta materia cada uno de los C.A.I.S. del país.

El plan de difusión es el documento que plasma el diseño y organización de las actividades que permiten dar a conocer las labores del sistema Postpenitenciario a través de charlas informativas. Tiene como objetivo principal ejecutar un conjunto de tareas orientadas a entregar información respecto de las acciones de integración social del sistema Postpenitenciario.

De los objetivos específicos del plan, se encuentra en primer lugar, la difusión de los criterios de ingreso para el proceso de eliminación de antecedentes penales para la población próxima al cumplimiento de su condena en los sistema abierto y cerrado; también para quienes poseen las condiciones necesarias para adscribirse al Decreto Ley N°409 y se encuentran en libertad; además de aquellas personas que requieren orientación para aclarar el prontuario penal.

En segundo lugar, el plan de difusión debe entregar información de las acciones para la integración social del sistema postpenitenciario, que están dirigidas a hombres y mujeres que conforman la población específica.

Los objetivos del plan deben ser abordados en conjunto con el/la Coordinador/a Postpenitenciario regional. En la eventualidad que se considere la publicación de las actividades en los medios de comunicación, se debe solicitar el apoyo de la Unidad de Comunicaciones de la dirección Regional, previa notificación al Departamento Postpenitenciario.

El grupo objetivo es conformado, en primer lugar, por las personas que están próximas a cumplir condena y que a su vez cumplen con los requisitos para la eliminación de antecedentes penales, además de quienes se encuentran postulando al beneficio de libertad condicional. En segundo lugar, se encuentran hombres y mujeres sujetos al sistema Postpenitenciario, ya sea en proceso de eliminación de antecedentes (Decreto Ley N°409), que han sido beneficiadas con la libertad condicional pre y post modificación legal, quienes están regularizando su situación prontuarial en la Oficina de Diagnóstico Prontuario (O.D.P.) y aquellas que obtuvieron el indulto conmutativo.

En lo que respecta a los contenidos del plan de difusión, éste se compone principalmente de acciones de difusión e información relativas al quehacer postpenitenciario. Es así que incluye las actividades que deben ser desarrolladas de forma continua a lo largo del año, en términos de cobertura, procurando dar a conocer información relativa a las prestaciones que entregan los C.A.I.S., con enfoque de género, dirigida a su población objetivo, como a funcionarios/as del Servicio y a la comunidad en su conjunto (red del servicio público, así como instituciones privadas), las que puedan ser potenciales colaboradores del Sistema Postpenitenciario.

De esta manera cada C.A.I.S. incorporará un cronograma para la implementación del plan de difusión, el que debe ser remitido al Departamento Postpenitenciario, de acuerdo a las fechas que determinen las Orientaciones Técnicas emanadas desde la Subdirección de Reinserción Social cada año.

Además de todo lo anterior, el desarrollo del plan de difusión considera las etapas de diseño o elaboración, planificación (establecida en un cronograma), ejecución y evaluación, el que debe incluir el envío de los medios de verificación al Departamento Postpenitenciario.

Elaboración

De forma coherente, los canales de difusión a utilizar deberán ser lo más masivos posibles y de fácil acceso para la población objetivo, procurando abordar las temáticas a partir de elementos que efectivamente motiven, interesen y orienten a mujeres y hombres que tienen escaso acceso a la información.

De esta manera, la elaboración del plan de difusión debe considerar la entrega de la información de manera directa, por lo que es fundamental separar canales de difusión y espacios de difusión. En este sentido, se espera dar a conocer las acciones del sistema postpenitenciario a través de canales adecuados (entrega de folletería, envío de correos electrónicos, página web, etc.) y espacios correctos para la promoción (reuniones, charlas, ferias empresariales, etc.), de acuerdo al tipo de población a la cual está dirigida. En este sentido se considerará que los videos, la folletería, el contenido de las charlas y todas las demás actividades de difusión, estén desarrolladas con enfoque de género. Lo anterior debe estar regulado de acuerdo con la realidad regional.

La elaboración del plan debe contemplar como mínimo dos (2) actividades mensuales de difusión al interior de los Establecimientos Penitenciarios y/o Centros de Reinserción Social y dos (2) actividades mensuales de difusión dirigidas a la comunidad, teniendo en cuenta que éstas deben estar diferenciadas de acuerdo a la población a la que está dirigida. Lo anterior será debidamente calendarizado y especificado.

Una vez elaborado el plan de difusión, será la jefatura de cada C.A.I.S. quien remita el documento, vía correo electrónico al área de redes, educación y cultura a redes.postpenitenciario@gendarmeria.cl en el formato establecido para tal efecto y en la fecha definida en las Orientaciones Técnicas emanadas desde la Subdirección de Reinserción Social cada año.

El documento deberá contener la siguiente información:

- Nombres responsables: Jefatura, Encargado/a de Redes C.A.I.S.
- Identificación: título del plan de difusión
- Cronograma: planificación mensual de las actividades
- Firma: Jefatura del C.A.I.S. debe firmar y timbrar documento

Cada plan de difusión incorporará el nombre de la unidad penal, institución o espacio de difusión en la que realizará la actividad, además del nombre, dirección, teléfono, email, región, la población a la cual está destinada la acción y la cobertura estimada. Se espera finalmente una descripción detallada en el documento y su cronograma.

Aprobación

Una vez recibidos los Planes de Difusión de los C.A.I.S., por el área de redes, educación y cultura, ésta consolidará los reportes en una planilla Excel, para poder evaluarlos, considerando para ello las siguientes acciones:

- a) El Departamento Postpenitenciario analizará las propuestas y evaluará la pertinencia de las actividades enviadas.
- b) El Departamento Postpenitenciario formalizará mediante Oficio dirigido al director regional, con copia al C.A.I.S. respectivo, la aprobación del plan de difusión, el cual se transformará en una exigencia en términos de su cumplimiento, tanto para el C.A.I.S. como para la Dirección Regional (representada por el Coordinador/a Postpenitenciario) que visó el respectivo documento.

Ejecución

Cada C.A.I.S. deberá llevar un registro de las actividades que ejecute y que hayan sido debidamente incorporadas al cronograma de su plan de difusión, constituyéndose dicha anotación en el medio de verificación de las acciones realizadas y comprometidas. Para estos efectos se enviará en las Orientaciones Técnicas el formato correspondiente para informar de la labor desarrollada que se denominará "Formato registro actividades Plan de Difusión" y contendrá la siguiente información:

- Unidad ejecutora
- Fecha
- N° participantes
- Institución donde se realizó la actividad
- Profesional a cargo
- Fono contacto
- Objetivo de la actividad
- Breve descripción
- Material entregado
- Nómina de participantes
- Registro fotográfico
- Firma funcionario que realizó la actividad

Excepcionalmente, en el caso de presentarse un inconveniente que imposibilite realizar alguna de las actividades consideradas en el plan de difusión, el C.A.I.S. debe informar sobre el particular al área de redes, cultura y educación, vía correo electrónico redes.postpenitenciario@gendarmeria.cl antes de la fecha comprometida para la ejecución de la acción, indicando las razones que motivan la suspensión y el plazo de reprogramación.

Los C.A.I.S. deberán llevar un registro de asistencia y de entrega de material de difusión, especialmente en cuando se trate de difusiones en establecimientos penitenciarios. En esta situación, las personas privadas de libertad que concurren a la actividad deberán firmar la lista de asistencia una vez recibida la folletería. En el caso que situaciones externas a la institución impidan desarrollar las acciones en forma presencial (COVID-19), se enviará mediante ORD. la folletería a la Unidad Penal, la cual acusará recibo de ésta mediante correo electrónico dirigido a la jefatura de la Unidad Postpenitenciaria. La información de la participación en las acciones, se llevará en el documento denominado "Registro de asistencia actividades de difusión" (sólo para actividades presenciales), que considerará lo siguiente:

- Nombre actividad
- Unidad ejecutora
- Lugar de la difusión
- Fecha de la actividad
- Funcionario del C.A.I.S. a cargo de la actividad
- Información de quién recibe la charla: apellidos, nombres, RUT, firma, recepción de folletería (SI/NO)
- Firma funcionario que realizó la actividad

Para realizar la actividad de difusión en los establecimientos del sistema cerrado y abierto, el equipo del Área Técnica del C.A.I.S. debe coordinarse anticipadamente con el equipo del Área Técnica de cada unidad en la que se desarrollará la charla informativa. En este caso **no deberá entenderse como la mera entrega física de materiales, sino que deberá ir siempre acompañada de la orientación técnica necesaria.**

Los C.A.I.S. remitirán al área de redes, educación y cultura, un reporte de las actividades de difusión desarrolladas, durante **los primeros cinco días hábiles** del mes siguiente que se informa (ejemplo, las actividades de enero se envían los primeros cinco días hábiles de febrero). Dicha información se despachará en un anexo que se consignará cada año en las Orientaciones Técnicas respectivas y que se describió en los párrafos anteriores. Esto

deberá ser remitido a través de correo electrónico a redes.postpenitenciario@gendarmeria.cl. De aprobarse la información, ésta será enviada a la Unidad de Comunicaciones de la Dirección Nacional para su eventual difusión a través de los canales institucionales disponibles.

Herramientas para la Ejecución del Plan de Difusión

Charlas

El/la Encargado/a de Redes deberá incorporar como parte de las actividades a ejecutar, charlas de promoción para el ingreso de nuevas personas al proceso para la eliminación de antecedentes penales, Decreto Ley N°409 (lo anterior considera únicamente a personas próximas a cumplir sus condenas en el sistema cerrado y sistema abierto. Asimismo, a quienes hayan sido beneficiados/as con la libertad condicional pre y post modificación legal; aquellos/as que se encuentren con indulto conmutativo y usuarios/as que estén aclarando su prontuario penal en la Oficina de Diagnóstico Prontuario (O.D.P.). Por otro lado, se deben desarrollar acciones de promoción a la población que ya cumplió condena, teniendo en cuenta la diferenciación por género.

De esta manera las actividades que se realicen, deberán estar enfocadas en la prestación de servicios de acuerdo al tipo de población. En el caso de las mujeres privadas de libertad, las charlas considerarán la difusión de la labor del sistema Postpenitenciario para dicho grupo específico: oferta programática; derivación a la red intersectorial en materia de salud, vivienda, acceso a planes educacionales; gestión de convenios en materia de talleres, capacitación y colocación laboral que se ajusten a las necesidades y requerimientos de las mujeres.

- En el caso de las personas privadas de libertad, el/la Encargado/a de Redes de cada CAIS deberá realizar gestiones con el Área Técnica y la Oficina de Estadística de cada Unidad Penal para obtener la nómina actualizada de personas condenadas próximas al egreso (un mes para el término de la condena) y planificar charlas de difusión en conjunto. Se deberá realizar igual procedimiento con los Centros de Reinserción Social (C.R.S.).
- En el caso de las personas que ya cumplieron sus condenas y pagaron sus multas, el/la Encargado/a de Redes deberá planificar y realizar actividades masivas, ya sea en Plazas de Justicia, instancias como los denominados Gobierno en Terreno u otros espacios, promoviendo el Decreto Ley N°409 y la oferta programática de los C.A.I.S., dando a conocer las ventajas de dirigirse a dichos Centros de Atención. Estas acciones se realizarán preferentemente de manera presencial, sin embargo, también podrán desarrollarse de manera virtual.
- A su vez, el/la Encargado/a de Redes de cada C.A.I.S. deberá planificar en conjunto con las Áreas Técnicas de cada unidad penal, la participación en a lo menos dos Consejos Técnicos en el periodo de un año, donde se expongan los alcances del Decreto Ley N°409; oferta programática de los C.A.I.S.; la modificación al Decreto Ley N°321 y la Ley N°21.124 y el funcionamiento de las Oficinas de Diagnósticos Prontuario (O.D.P.), dirigidas a profesionales y funcionarios de los establecimientos penitenciarios.

Entrega de material de difusión: folletería (trípticos, dípticos, afiches)

La folletería tradicional es la más utilizada por nuestro Sistema, debido a que se trata de material personalizado, que se entrega "mano a mano", permitiendo conocer de forma más cercana, al público al cual va dirigido el mensaje.

Las piezas gráficas deben incorporar información relativa a los procedimientos y mecanismos que administrativos para la eliminación de antecedentes, además de la información relativa a mejorar su integración social al momento de su egreso.

Además, cada una de estas piezas deben tener en cuenta los lineamientos comunicacionales que entreguen las autoridades gubernamentales, de acuerdo a la política pública de reinserción social.

Es necesario hacer presente que todo material de difusión debe ser previamente visado por la Unidad de Comunicaciones de la Dirección Nacional, por lo cual sólo se imprimirá -en el caso de la folletería- una vez que sea debidamente autorizado. Luego será remitido a cada uno de los centros de apoyo. En consecuencia, los C.A.I.S. no podrán elaborar material con recursos propios sin realizar la consulta previa al Departamento Postpenitenciario.

En cuanto a prioridades, la folletería estará destinada en primer lugar a internos/as próximos al cumplimiento de sus condenas en los Establecimientos Penitenciarios y a personas que se encuentren en condiciones de eliminar antecedentes penales. La cantidad que el Departamento despache a sus unidades dependientes variará en función de la programación que cada C.A.I.S. haya realizado en su Plan de Difusión y al número de usuarios/as que atiende, así como también de acuerdo al presupuesto fijado por la autoridad.

Medios masivos de promoción

- a) Página Web (internet e intranet): éste es un elemento central que sirve, no sólo para entregar información directa de las acciones que se realizan a nivel institucional, sino que se constituye en una plataforma de comunicación posible con la comunidad en general y, por tanto, su alcance es eventualmente masivo. El objetivo principal de utilizar esta herramienta es dar a conocer el Sistema Postpenitenciario y mostrar las acciones que realizan los Centros de Apoyo para la Integración Social. La nueva era de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) y la importancia gradual del ahorro de costos, son dos factores que dan relevancia a la publicación de las actividades de difusión a través de este medio tecnológico.
- b) Videos: el video testimonial es una herramienta fundamental, por cuanto permite contar experiencias, historias y biografías, emitir opiniones y actitudes desde los/as propios/as usuarios/as, desde la experiencia de empresarios que contribuyen a la reinserción social entregando capacitación y trabajo y, desde la propia perspectiva institucional.

Cada C.A.I.S. deberá mostrar los videos institucionales remitidos por el Departamento Postpenitenciario o los realizados a nivel regional, previa consulta al nivel central y se emplearán especialmente en reuniones con empresarios, seminarios y actividades protocolares donde sea posible su exhibición.

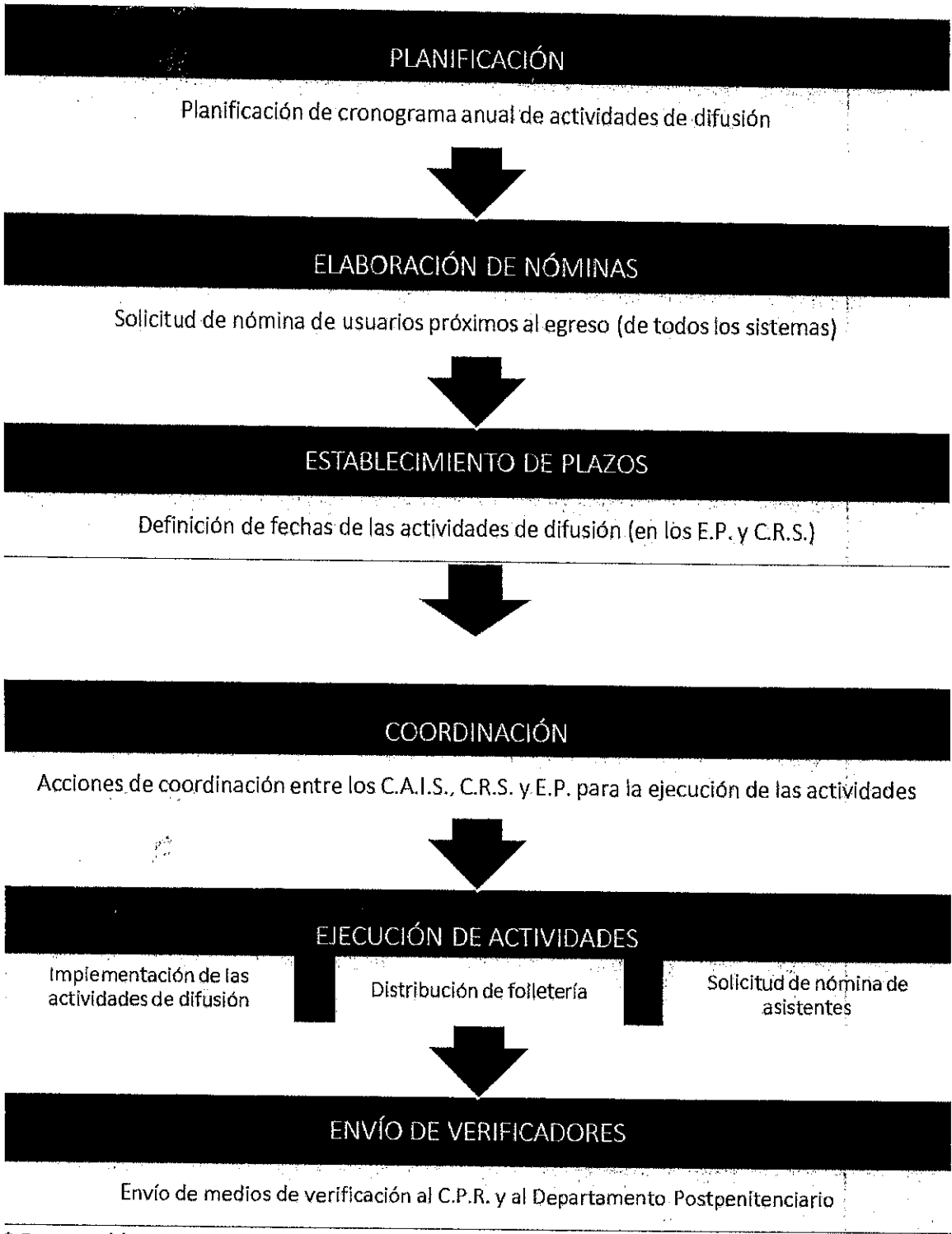
Evaluación

Con el objetivo de mantener, mejorar, modificar o reemplazar las acciones contenidas en el Plan de Difusión de los C.A.I.S. y conocer si el mensaje entregado al público objetivo es eficiente, es que la evaluación resulta fundamental a la hora de tomar decisiones comunicacionales y en materia presupuestaria. Por ello se considerarán las siguientes acciones desde el nivel central:

- a) Un equipo del área de Redes, educación y cultura realizará supervisiones aleatorias a las actividades de difusión que los C.A.I.S. desarrollen en los establecimientos del sistema cerrado y abierto. De esta acción se levantará un Acta que será remitida al Director Regional. El propósito de esta labor es dar a conocer la forma en que las dependencias postpenitenciarias ejecutan el trabajo de difusión y rescatar las "buenas prácticas", para su eventual réplica en el Sistema.
- b) La supervisión verificará, entre otros aspectos, el mensaje entregado por el C.A.I.S. a la población objetivo, la utilización del material disponible y la cantidad de participantes.
- c) A partir de esta evaluación, se podrá determinar mejoras en la forma de entregar la información a las personas sobre la eliminación de antecedentes penales, la Libertad Condicional, respecto de la oferta programática y el apoyo administrativo que realiza la Oficina de Diagnóstico Prontuario.

En el siguiente cuadro se da cuenta de las acciones descritas en los párrafos anteriores que permitirán un entendimiento gráfico de lo expresado para el desarrollo del Plan de Difusión

Figura 2: Proceso de difusión



- * E.P.: Establecimientos Penitenciarios
- * C.R.S.: Centros de Reinserción Social
- * C.P.R.: Coordinador Postpenitenciario Regionales

B. Gestión de redes y convenios

Como se estableció en este apartado, el área de redes, educación y cultura tiene como función el apoyar las tareas de reinserción social, para la disminución de la reincidencia delictual. En esta línea, además del plan de difusión, el/la Encargado/a de Redes debe gestionar y articular las redes disponibles en el sector público y privado, que permitan apoyar las necesidades de las personas que se encuentran adscritas al sistema postpenitenciario. Lo anterior se realiza teniendo en cuenta que las prestaciones que entrega Gendarmería son limitadas en comparación a los requerimientos de la población que ingresa a los C.A.I.S.

El principal objetivo de la gestión de redes será la activación de recursos mancomunados para el logro de fines comunes como la colocación laboral, la capacitación, el apoyo social, jurídico, en materia de género, la orientación para el acceso a la educación y la derivación asistida a las redes intersectoriales, entre otras.

En este sentido, el área de redes, educación y cultura, trabaja para generar una red que permita que el sector público y privado otorgue oportunidades de apoyo social, educacional, laboral, de capacitación, orientación jurídica y en materia de género, la derivación oportuna a la atención primaria de salud, así como a entidades que trabajan el consumo problemático de alcohol y drogas y el contacto con instituciones que apoyan la labor de reinserción social. En este escenario, el/la Encargado/a de redes del C.A.I.S., con el apoyo del Departamento Postpenitenciario debe gestionar convenios de colaboración y cooperación, teniendo en cuenta que las prestaciones estén definidas de acuerdo al ámbito de requerimiento según tipo de población. De esta manera, tanto mujeres como hombres, cuentan con una línea de derivación de acuerdo a sus propias necesidades, lo que permite ampliar sustantivamente las posibilidades de integración social de las personas que eliminan antecedentes penales; que se encuentran aclarando su prontuario en la Oficina de Diagnóstico Prontuario (O.D.P.); de quienes obtuvieron la Libertad Condicional pre modificación Legal y de aquellos beneficiados con la Ley N°21.124. De aquí la importancia de que no se trate sólo de actos comunicacionales sino herramientas de gestión trascendentes.

Redes Intersectoriales

En la actualidad, existe un alto consenso en entender la reinserción social como un proceso que requiere del trabajo interrelacionado entre actores e instituciones, con el fin de incidir en la seguridad pública. En este sentido, la relación con el sector privado (empresas), constituye un elemento fundamental a la hora de promover procesos de desarrollo a partir del apoyo en el ámbito del empleo y las posibilidades de entregar nuevas condiciones laborales que impacten en la situación de vida de las personas.

De esta manera, parte de los objetivos de la gestión de redes es facilitar la vinculación entre las personas del sistema postpenitenciario y su comunidad, sobre todo en el caso de quienes se encuentran en una situación vulnerable, luego de egresar de una condena, ya sea del sistema cerrado o del sistema abierto. El vínculo se realizará a través de herramientas socio-ocupacionales, potenciando las capacidades, por medio de capacitación y talleres de empleabilidad, en el marco del proceso de integración social.

La red intersectorial, tanto en el caso de la población masculina como femenina, se debe articular en función de las necesidades y ámbitos de reinserción de cada una de ellas, así como está definido en el marco conceptual de estas normas técnicas. Los aspectos en los cuales se debe garantizar la oferta son en el área de educación, salud, empleo, capacitación, apoyo en el ámbito familiar y comunitario.

En este contexto, la colaboración público-privada se establece como fundamental, entendida como una forma de focalizar los recursos de acuerdo a las necesidades de la población del sistema postpenitenciario.

El enfoque propuesto contiene una serie de requerimientos e implicancias, importantes de recordar:

- La gestión de redes se constituye como una estrategia esencial para el Sistema Postpenitenciario, por cuanto representa una mirada transversal a todo el proceso de atención/intervención que desarrollan los profesionales del Departamento. Esta acción se materializa en la derivación que hace el profesional a cargo de intervención a alguna de las actividades que gestionó el/la Encargado/a de Redes, de acuerdo a las necesidades que presenta cada una de las personas que se encuentran en el sistema Postpenitenciario. En este sentido, es importante señalar que los requerimientos de las personas deben ser abordados desde un marco de confianza, empatía y comunicación efectiva. La habilidad transversal de escucha activa facilita la concreción de soluciones más expeditas y deben relevar la corresponsabilidad y la mirada estratégica de las redes intersectoriales.
- El modelo de redes intersectoriales, debe responder a un proceso de atención, orientación e intervención, relativo a la entrega de prestaciones sociales y comunitarias. Esta acción debe propiciar la activación simultánea de las redes familiares-personales

(primarias) y las institucionales (secundarias) fomentando permanentemente la participación de ambas.

- En el caso de las redes institucionales, es vital que el equipo discrimine a qué nivel requiere activarlas. Esto constituye una decisión importante en la medida que incide directamente en las estrategias que se desplegarán, ya sea para adherir a redes existentes, convocar nuevas o para activar coordinaciones específicas y focalizadas.
- En este contexto, Gendarmería a través del/la Encargado/a de Redes del C.A.I.S., gestionará la conformación de Mesas de Trabajo con los diferentes actores intersectoriales regionales, que permitan abordar las necesidades de las personas del sistema postpenitenciario, para su derivación asistida.

De los Convenios

Las alianzas público-privadas constituyen una estrategia de actuación que ha adquirido creciente importancia en los últimos años. Éstas se basan en el convencimiento de que, para lograr resultados en materia de seguridad pública, es necesaria la colaboración de diferentes actores tales como, los organismos estatales, las empresas y también la sociedad civil.

Así, la generación de Convenios con entidades públicas y privadas significa una fuente de apoyo trascendental para la gestión de los C.A.I.S. en la medida que permite materializar fórmulas de cooperación como, por ejemplo, la generación de oportunidades de capacitación y de oferta laboral a usuarios/as, la instalación de oficinas en los municipios para el control de firma para la eliminación de antecedentes, entre otros.

Para la gestión de convenios es necesario tener en cuenta las siguientes etapas:

Primera Etapa: Definición de criterios

La distribución geográfica de los C.A.I.S., es un aspecto fundamental al momento de definir los criterios para iniciar una gestión de firma de convenio, debido a que las particularidades regionales generan diferencias en la oferta, tanto empresarial como estatal. Es así, como encontramos diversidad de áreas laborales y de servicios, como por ejemplo empresas mineras en el norte, como también montos de subsidio mayores para la vivienda en el extremo sur.

Para que esta labor sea efectiva, los C.A.I.S. deben establecer los siguientes criterios:

- a) Priorización de las necesidades de los/as usuarios/as en materia de servicios requeridos, tanto de quienes eliminan antecedentes penales y participan en los/as programas de intervención, como de los que firman por la Libertad Condicional pre y post modificación legal; así como también de quienes se encuentran aclarando su prontuario en la Oficina de Diagnóstico Prontuario (O.D.P.) del C.A.I.S.
- b) Consideración de la lejanía o distancia de los/as usuarios/as con un Centro o Unidad donde dirigirse a firmar por el Decreto Ley N°409.
- c) Análisis de las necesidades educacionales y culturales de usuarios y usuarias que les permita nivelar estudios para adscribirse al Decreto Ley N°409 o acceder a las diferentes modalidades educacionales de quienes participan en los programas de intervención postpenitenciarios, aquellos que se controlan por la Libertad Condicional pre modificación legal y los beneficiados con la Ley N°21.124, así como también los que se encuentran aclarando su prontuario en la Oficina de Diagnóstico Prontuario (O.D.P.) del C.A.I.S.
- d) Definición de necesidades de capacitación de los/as usuarios/as, para su colocación laboral, de manera de orientar los convenios con Organismos Técnicos que sirvan de apoyo para los beneficiarios del sistema.
- e) Determinar los requerimientos laborales de los/as usuarios/as.

- f) Definir necesidades de apoyo social, vivienda, orientación jurídica y de género, entre otras materias.

Segunda Etapa: Gestión

La certeza de la firma de un convenio dependerá de la coordinación que exista entre los actores involucrados que trabajan para la concreción de este objetivo. Por ello, resultará fundamental que el/la Encargado/a de Redes del C.A.I.S. o quien designe la jefatura de dicha Unidad para estos efectos desarrolle las gestiones mancomunadamente con el/la Coordinador/a Postpenitenciario regional, considerando que será el/la directora/a Regional de Gendarmería de Chile quien firmará el documento.

Para una mayor efectividad de las acciones, los C.A.I.S. deberán tener en cuenta las siguientes gestiones:

- a) La jefatura del C.A.I.S., o quien designe para tal efecto, de preferencia el/la Encargado/a de Redes, será el/la coordinador/a de los convenios, tendrá a cargo la gestión, ejecución y seguimiento de los convenios.
- b) El/la Encargado/a de Redes del C.A.I.S. debe coordinarse con la Unidad Técnica Regional (Coordinador/a Postpenitenciario) para apoyar el desarrollo de esta labor.
- c) El/la Encargado/a de Redes del C.A.I.S. debe gestionar reuniones con municipalidades, Fundaciones, servicios afines y/o empresas, para estudiar de manera conjunta la posibilidad de firmar un convenio de colaboración.
- d) Posterior a dichas reuniones, el/la Encargado/a de Redes del C.A.I.S. debe levantar las respectivas Actas que incluyan nómina y firma de participantes.
- e) El/la Encargado/a de Redes del C.A.I.S. debe enviar un proyecto de convenio a las entidades con las cuales sostuvieron las reuniones para que, posteriormente, sea derivado a la respectiva Área Jurídica de la dirección Regional para visto bueno.
- f) La jefatura del C.A.I.S. deberá coordinar con la autoridad regional la suscripción y firma final del convenio, la cual podrá ser de manera presencial o virtual, dependiendo de las condiciones sanitarias del momento.

Tercera Etapa: Ejecución

En este punto, el C.A.I.S. debe estar organizado con la Unidad Técnica Regional y a través del/la Coordinador/a Postpenitenciario, gestionar la tramitación del convenio al Área Jurídica de la Dirección Regional de Gendarmería y mantener informada a la contraparte de las acciones que se están realizando.

Dentro de las prioridades de ejecución están las siguientes acciones, que son las mínimas esperadas, pero que podrán variar de acuerdo a las necesidades de los usuarios y usuarias:

- a) Cada C.A.I.S. debe firmar como mínimo 1 convenio cada año, ya sea con municipios, entidades afines, Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC), empresas, Fundaciones y otros.
- b) Cada C.A.I.S. debe firmar a lo menos 1 convenio cada año con una entidad educacional que permita nivelación de estudios a los/as usuarios/as.

Cuarta Etapa: Evaluación y Seguimiento

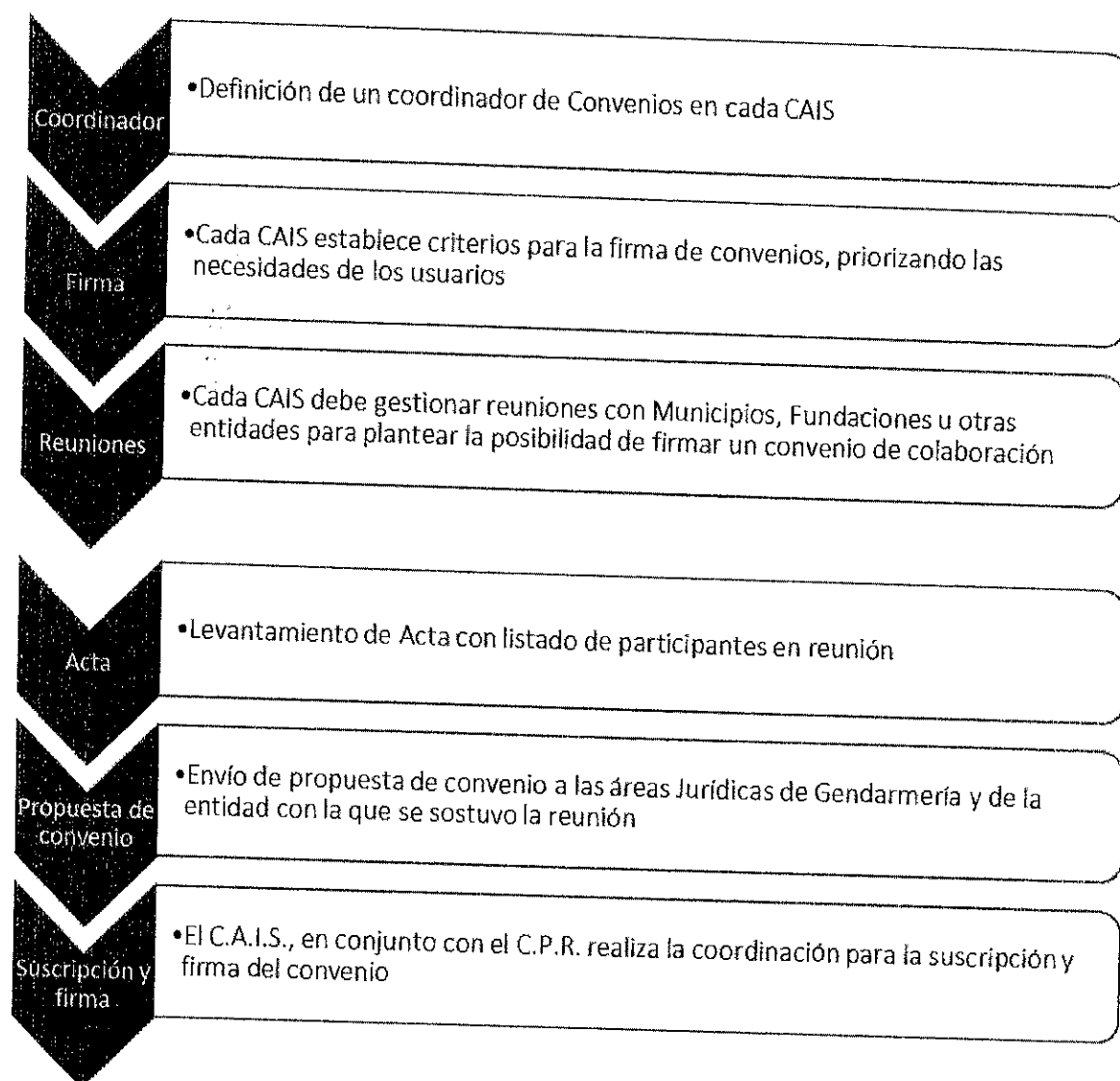
La gestión y firma de los convenios debe tener una continuidad en el tiempo y sacar el mejor provecho del trabajo realizado, por tal motivo se debe procurar obtener beneficios de los que ya están en ejecución, para luego continuar con los que se solicitará cada año.

- a) El/la Encargado/a de Redes del C.A.I.S. o quien designe la jefatura deberá enviar al correo redes.postpenitenciario@gendarmeria.cl, en forma semestral la información que contiene la planilla solicitada para tales efectos, la que se encuentra en las Orientaciones Técnicas que emanan de la Subdirección de Reinserción Social, la cual incorpora los siguientes datos:
- Nombre coordinador/a del convenio del C.A.I.S.
 - Email coordinador/a del convenio del C.A.I.S.
 - Nombre de la institución con la que se firma el convenio
 - Fecha de la firma del convenio
 - Nombre coordinador/a del convenio de la entidad externa
 - Dirección, fono fijo, celular, email
 - Objetivo del convenio
 - Carácter del convenio (laboral, salud, social, educacional, etc.)
 - Alcance del convenio (nacional, regional, local)
 - Vigente o no vigente
 - Cantidad de beneficiarios/as
- b) El/la Encargado/a de Redes del C.A.I.S. o quien designe la jefatura deberá remitir el convenio firmado al Departamento Postpenitenciario al correo electrónico redes.postpenitenciario@gendarmeria.cl. incorporando los datos al registro de la planilla mencionada en la letra a)
- c) El área de redes, educación y cultura del Departamento Postpenitenciario llevará un registro nacional de Convenios actualizado semestralmente con la información que reporten los C.A.I.S.
- d) El/la Encargado/a de Redes del C.A.I.S. deberá hacer un seguimiento de la efectividad de los convenios suscritos, considerando para ello el número de beneficiados.

Proceso de Generación de Convenios

En el siguiente cuadro se da cuenta de las acciones más importantes que deben tener en consideración los Centros de Apoyo para la Integración Social, C.A.I.S. para poder llevar a cabo la gestión de convenios.

Figura 3: Proceso de gestión de convenios



* C.P.R.: Coordinador Postpenitenciario Regional

De las Actividades de Integración Social Masivas

Estas actividades tienen como fin dar a conocer el Sistema Postpenitenciario en el sector público y privado, como parte de la estrategia de los C.A.I.S., para apoyar la integración social de los/as usuarios/as en materia de capacitación, colocación laboral y apoyo de las redes intersectoriales, contribuyendo también a atender las necesidades regionales del empresariado en lo que se refiere a mano de obra.

Encuentros con el Mundo Público y Privado

Para el efectivo desarrollo de estas actividades, deberá existir un trabajo mancomunado entre el/la Encargado/a de Redes del C.A.I.S. y el/la Coordinador/a Postpenitenciario, para obtener de estas acciones colocaciones laborales y capacitaciones, entre otras, que beneficien a los/as usuarios/as de toda la región, especialmente cuando existe más de una Unidad en la zona.

Las dependencias del sistema Postpenitenciario, propenderán a gestionar las siguientes acciones para la ejecución:

- Cada C.A.I.S. deberá organizar un encuentro con el mundo público y privado durante el primer semestre de cada año. En caso de que no pueda realizarse en este período, mediante correo electrónico dirigido al/la jefe/a del Departamento Postpenitenciario con copia a redes.postpenitenciario@gendarmeria.cl, el C.A.I.S. informará y solicitará autorización para modificar la actividad y presentar una fecha alternativa que no exceda el mes de agosto de cada anualidad.

- b) De existir recursos institucionales asociados a esta actividad y para ser realizada de forma presencial, los C.A.I.S. procurarán que se obtenga la mayor oferta de colocaciones laborales y capacitaciones, para los/as usuarios/as postpenitenciarios/as de parte de los participantes al encuentro.
- c) Ejecutada la actividad, el/la Encargado/a de Redes del C.A.I.S. deberá enviar los contratos de los/as usuarios/as y el compromiso de capacitación en el formato establecido en las Orientaciones Técnicas emanadas de la Subdirección de Reinserción Social al correo electrónico redes.postpenitenciario@gendarmeria.cl, los cuales contendrán como mínimo la siguiente información:
- Contratos Laborales
 - ✓ Nombre contratado
 - ✓ RUT
 - ✓ Tiempo contratación
 - ✓ Nombre empresa
 - ✓ Dirección
 - ✓ Teléfono
 - ✓ Sueldo definido
 - Capacitaciones
 - ✓ Nombre empresa capacitadora
 - ✓ Título de la capacitación
 - ✓ Cantidad de ofertas de capacitación
 - ✓ Duración de la capacitación
 - ✓ Materiales que entrega el organismo
- d) Cualquier situación externa que pueda afectar la ejecución de estas actividades se deberá informar oportunamente al Departamento Postpenitenciario, al correo redes.postpenitenciario@gendarmeria.cl indicando motivos y posibles soluciones, considerando para ello la realización de éstas bajo la modalidad virtual.

Gestión de Ferias Laborales

Estas actividades son una positiva vitrina laboral para las personas que buscan empleo, por lo tanto, resultará fundamental una efectiva coordinación entre el/la Encargado/a de Redes del C.A.I.S. y los organismos regionales que llevan a cabo estas acciones.

Se proponen los siguientes puntos para el logro de oportunidades laborales para los/as usuarios/as postpenitenciarios:

- a) El/la Encargado/a de Redes de cada C.A.I.S. deberá coordinar la participación y/o realización de a lo menos 1 Feria Laboral anual para promover el contacto con el mundo empresarial, con el fin de conseguir cupos laborales para usuarios y usuarias.
- b) Para el cumplimiento de este tipo de actividades, se deberá verificar la situación sanitaria que exista a nivel país, con el objetivo de coordinarse con los servicios respectivos, que permitan llevarla a cabo en forma virtual.
- c) El/la Encargado/a de Redes del C.A.I.S. deberá solicitar el apoyo de la Unidad Técnica Regional, cuando corresponda, a través del/la Coordinador/a Postpenitenciario.

Gestión de Otras Actividades: Seminarios, Capacitaciones

En el contexto de las acciones que permiten posicionar el Sistema Postpenitenciario en el mundo público y privado, así como también a nivel institucional, es importante considerar la participación o ejecución de este tipo de actividades con el apoyo de las Direcciones Regionales y que sean adecuadas a la realidad de la zona.

Para tal efecto, se espera que el trabajo de coordinación entre los/as Encargados/as de Redes de los C.A.I.S. y los/as Coordinadores/as Postpenitenciarios, vaya en la siguiente línea:

- a) Cada C.A.I.S. deberá gestionar actividades en las que se entregue información sobre el Decreto Ley N°409, la Ley N°21.124, los programas de intervención postpenitenciarios, tanto a funcionarios/as de la institución como al público externo.
- b) Se podrán realizar estas actividades en forma presencial como virtual, de acuerdo a las condiciones sanitarias que se presenten en el momento.
- c) La gestión de estas actividades debe iniciarla el/la Encargado/a de Redes del C.A.I.S. con apoyo del/la Coordinador/a Postpenitenciario de la Unidad Técnica Regional respectiva.
- d) El/la Encargado/a de Redes del C.A.I.S. deberá informar al área de redes, educación y cultura del Departamento Postpenitenciario sobre la realización de este tipo de actividades con el objetivo de levantar la necesidad de participación de la jefatura de la dependencia del nivel central.

Capítulo VII

Funciones y responsabilidades

1.- Gendarmería de Chile

Gendarmería de Chile es el Servicio Público dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tiene por finalidad "atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que, por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que les señala la ley" (*Artículo 1. Ley Orgánica de Gendarmería de Chile*).

1.1.-DEPARTAMENTO POSTPENITENCIARIO

Como ya se señaló anteriormente el rol del Departamento Postpenitenciario está definido en la Res. Ex N°860, del 08 de febrero de 2018 estableciendo que: "El Departamento Postpenitenciario tiene por objeto gestionar los planes y programas de asistencia de las personas que, habiendo cumplido sus condenas, requieran de apoyo para su reinserción social."

Este Departamento debe apoyar el proceso de reinserción social de aquellas personas que hayan cumplido sus condenas o estén bajo la modalidad de Libertad Condicional e indulto conmutativo, desarrollando programas de intervención que tiendan a disminuir sus probabilidades de reincidencia delictual.

Son tareas específicas del Departamento Postpenitenciario, de acuerdo a lo establecido en la resolución precedentemente señalada, las siguientes:

- a. Diseñar, proponer, ejecutar coordinar y controlar según corresponda, las políticas, estrategias, planes, programas y acciones conducentes a la reinserción social de las personas que han cumplido sus condenas.

- b. Diseñar, proponer, supervisar y controlar las orientaciones técnicas y normativas para la ejecución de acciones conducentes a la reinserción social de personas que han cumplido sus condenas.
- c. Generar, de conformidad a la legislación vigente, bases de datos estadísticos de las personas que han cumplido sus condenas.
- d. Ejecutar las demás tareas que les sean encomendadas en el ámbito de su competencia.

Entre los objetivos del Departamento Postpenitenciario se encuentra el determinar las directrices técnicas de la oferta programática destinada a implementarse en los programas de intervención, con el propósito de facilitar los procesos de reinserción e integración social de usuarios/as que conforman la población atendida por el sistema, los que se comprenden como una estrategia consistente en la progresiva recuperación de vínculos con personas, grupos e instituciones por parte de sujetos que retornan a espacios cotidianos de interacción social después de vivir un período de privación de libertad, o de quienes egresan del cumplimiento de penas sustitutivas.

El propósito de esta progresividad es la restitución de derechos y potenciamiento de habilidades, permitiendo a las personas penadas transitar desde el Subsistema cerrado, semiabierto y/o abierto al Subsistema Postpenitenciario, facilitando la integración social de las personas que debe atender.

1.2.- DIRECCIONES REGIONALES

Como ya se abordó en el capítulo anterior, las Direcciones Regionales están encargadas de la conducción administrativa, técnica y operativa de Gendarmería de Chile en cada región, y sus funciones están normadas en la Resolución Exenta N°910 de 2018. Por su lado, respecto de la población postpenitenciaria, la Unidad Técnica Regional debe designar, a un profesional encargado de la supervisión técnica y coordinación regional de las unidades postpenitenciarias de la región. Este profesional es el/la Encargado/a Postpenitenciario Regional, y sus funciones son las siguientes:

- a. Realizar supervisiones técnico-administrativas al/los C.A.I.S. de la región, a fin de verificar el correcto funcionamiento de los programas de intervención postpenitenciarios, permitiendo el adecuado cumplimiento de compromisos, tanto en materia de intervención como de metas regionales.
- b. Elaborar Informes de Supervisión a ser remitidos al Departamento Postpenitenciario.
- c. Colaborar en la coordinación de actividades de intermediación laboral de los C.A.I.S. locales.
- d. Colaborar en la coordinación con redes locales intersectoriales.
- e. Coordinar la ejecución de actividades culturales destinadas a usuarios/as y realizar el seguimiento que corresponda para que el resultado sea exitoso.
- f. Realizar seguimiento a la adquisición y ejecución oportunas de cursos de capacitación en oficio y/o auto emprendimiento dirigidos a los/as usuarios/as postpenitenciarios/as.
- g. Resolver situaciones de contingencia local que afecten el debido funcionamiento del C.A.I.S. local.
- h. Revisar y remitir todos los registros definidos por el Subsistema Postpenitenciario (bases de datos, SENCE, capacitaciones a profesionales, etc.) del C.A.I.S. local.
- i. Gestionar y coordinar actividades que involucran derivación de usuarios/as desde los Subsistemas Cerrados y Abierto al Postpenitenciario.
- j. Coordinar con un/a persona responsable de cada Unidad Penal/C.R.S./C.E.T. el envío de documentación e información que se requiera.
- k. Solicitar y consolidar la nómina de las personas próximas a cumplir condena al responsable en cada Unidad Penal/C.R.S./C.E.T., para evaluar la factibilidad de ser población postpenitenciaria.
- l. Coordinar con el Área Técnica de cada Unidad Penal/C.R.S./C.E.T. y con el C.A.I.S. las actividades de difusión del Subsistema Postpenitenciario.
- m. Supervisar la realización de las actividades de difusión, resguardando contar con los respaldos correspondientes (Oficios, Nomina de Asistencia y otros).
- n. En los casos que corresponda, coordinar el envío oportuno desde las Unidades de origen, de toda información que resulte pertinente para que las personas ingresen a programas de intervención postpenitenciarios, tales como:

- i. Última valoración de riesgo e informes realizados en la Unidad de origen.
- ii. Certificación de capacitaciones realizadas.
- iii. Certificación de escolaridad obtenida en reclusión.
- iv. Último informe psicosocial de postulación a beneficios (en caso de ser pertinente).
- o. Verificar el cumplimiento de las actividades, tareas y normativas e instrucciones institucionales con el fin de asegurar la correcta aplicación de las medidas, como asimismo, asegurar los derechos de los usuarios y usuarias.
- p. Recepción, validación y consolidación de las estadísticas de Control de beneficios de Reinserción, desde las unidades de control, para su posterior remisión al Departamento Postpenitenciario de acuerdo a las instrucciones y plazos que éste determine.

1.3.- CENTROS DE APOYO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL (C.A.I.S.)

La Resolución Exenta N°8.930 de 2013 crea los Centros de Apoyo para la Integración Social (C.A.I.S.), cuyo objetivo es apoyar la reinserción social brindando un soporte postpenitenciario a la población que egresa al medio libre, mediante la implementación y ejecución de programas y proyectos sociales de asistencia, cultura y promoción social. Dichos Centros dependen administrativamente de la respectiva Dirección Regional, y técnicamente del Departamento Postpenitenciario, según se instruye en la Resolución Exenta N°910, del 13 de febrero de 2018, del Director Nacional de Gendarmería de Chile.

En cada C.A.I.S. es posible distinguir ciertos cargos, que tienen a la base un perfil específico, y que desarrollan funciones y tareas que serán descritas a continuación.

1.3.1.- JEFE/A TÉCNICO/A LOCAL

El/a Jefe/a Técnico/a Local es un/a funcionario/a público, titulado en una institución de educación superior en alguna carrera de las ciencias sociales, de preferencia psicología y trabajo social (o asistente social), o bien terapeuta ocupacional que acredite formación y/o experiencia en intervención con población infractora de ley.

Dicho profesional es el responsable de supervisar técnica y administrativamente los procesos de gestión de caso llevados a cabo con los usuarios/as de los C.A.I.S. por los Profesionales de programa de Intervención.

En la Res. Ex N°910 de 2018, se establece que el Jefe de Técnico Local del C.A.I.S. tendrá las siguientes tareas específicas, en lo relativo a la intervención:

- a. Orientar, dirigir y supervisar técnicamente al equipo de profesionales de intervención, cautelando que el Modelo de gestión de caso y la normativa técnica se cumpla en los términos definidos.
- b. Asesorar al Jefe de C.A.I.S. en materia de planes y programas de reinserción.
- c. Organizar el funcionamiento y distribución de carga laboral del equipo profesional bajo su responsabilidad.
- d. Participar y conducir los Consejos Técnicos.
- e. Planificar y guiar las reuniones de análisis de casos con el equipo de profesionales de intervención y gestionar los acuerdos y resoluciones adoptadas.
- f. Controlar el cumplimiento de compromisos institucionales en materia de intervención.
- g. Planificar y ejecutar reuniones de trabajo con los profesionales, relativos al proceso de intervención.
- h. Proponer mejoras en los planes y programas de reinserción, así como para la formación técnica de los profesionales de intervención.
- i. Realizar otras funciones encomendadas por la jefatura.

1.3.2.- ENCARGADO/A TÉCNICO/A DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

En caso que la cantidad de población participante de Programas de Intervención en el C.A.I.S. lo requiera, se podrá contar con la presencia de un/a Encargado/a Técnico/a de Programas de Intervención, cuyas tareas se refieren específicamente al apoyo y supervisión técnica de los procesos de gestión de casos de los usuarios/as de Programas.

Este/a profesional debe cumplir con los requisitos técnicos establecidos en la Res. Ex. N°910 para Jefe Técnico Local, es decir, profesional del campo de las ciencias sociales, psicólogo/a o trabajador/a social, con experiencia acreditable en gestión de programas de tratamiento a personas infractoras y como supervisor de equipos técnicos, responsable de supervisar el trabajo de profesionales de programas postpenitenciarios en lo que refiere a los procesos relacionados con la gestión de caso y la intervención especializada de las personas que participan en dichos programas, cautelando la adhesión a los lineamientos técnicos desarrollados en la norma técnica, verificando su correcta ejecución y adecuamiento a la normativa legal y técnica vigente.

Son funciones específicas del/la Encargado/a Técnico/a de Programas de Intervención:

- a) Orientar y asesorar en las decisiones técnicas derivadas de la identificación de necesidades de intervención especializada, integración social y/o mejoramiento de la empleabilidad efectuadas por profesionales de programas y la elaboración de planes de integración.
- b) Supervisar los procesos de intervención individual y grupal, así como el desarrollo de los programas especializados, controlando el adecuado cumplimiento de las directrices técnicas e indicaciones normativas de los mismos.
- c) Supervisar que los informes y otros productos del proceso de gestión de casos que se remitan a unidades interna y/u organismos externos instancias cumplan con los estándares técnicos y normativos establecidos vigentes.
- d) Realizar otras funciones asociadas a su cargo, encomendadas por su Jefatura directa.

1.3.3.- PROFESIONAL DE PROGRAMA DE INTERVENCIÓN

El/a Profesional de Programa de Intervención es un/a funcionario/a público/a, titulado/a en una institución de educación superior en una carrera de las ciencias sociales -de preferencia Psicología y Trabajo Social (o Asistente social), o bien Terapeuta Ocupacional-, que acredite formación o experiencia en intervención con población infractora de ley.

El/a profesional de Programa de Intervención es el/la encargado/a de realizar las acciones dentro del marco de la gestión de caso, llevada a cabo con la población objetivo del Subsistema Postpenitenciario, en el marco de los programas de intervención y apoyo postpenitenciario.

Son tareas específicas del/la Profesional de Programa de Intervención:

- a. Participar y/o asesorar las actividades de invitación a la población objetivo, en orden a motivar su participación en los procesos de intervención.
- b. Gestionar el ingreso formal de los/as postulantes a los programas de intervención.
- c. Realizar la valoración inicial de necesidades de los/as postulantes a procesos de intervención y Programas Especializados, de acuerdo a lo establecido en los lineamientos técnicos.
- d. Elaborar y presentar ante Consejo Técnico un Plan de Integración del/la usuario/a, conforme a la valoración inicial, con objetivos y acciones medibles, verificables y acotados al tiempo de intervención.
- e. Ejecutar el Plan de Integración de acuerdo a la priorización de los objetivos y acciones, focalizándose en los factores dinámicos de intervención y las necesidades presentes en el/a usuario/a en los ámbitos de la integración sociocomunitaria y/o mejoramiento de la empleabilidad.
- f. Efectuar intervenciones técnicas individuales y grupales que propicien el cambio y adopción de conductas prosociales en el/la usuario/a, que reduzcan la reincidencia

delictiva y favorezcan los procesos de integración sociocomunitaria y/o en el ámbito de la empleabilidad.

- g. Facilitar el acceso de los/as usuarios/as a las redes sociales y comunitarias del entorno, que favorezcan su reinserción social, en coordinación con el Encargado/a de redes.
- h. Fomentar la integración de los/as usuarios/as a programas de Capacitación en Oficio y Autoemprendimiento e iniciativas educativas, que permitan fortalecer sus condiciones de empleabilidad e inserción laboral.
- i. Desarrollar seguimiento al proceso de intervención, permitiendo ajustar los objetivos y acciones de acuerdo a las características y condiciones de los/as usuarios/as.
- j. Consignar y actualizar la totalidad de los antecedentes de los/as usuarios/as en las planillas virtuales como así también en la carpeta física de respaldo.
- k. Efectuar acciones en terreno, ya sea entrevistas domiciliarias, gestión de redes y/o entrevistas con empresas, de acuerdo a los requerimientos de los procesos de intervención de los/as usuarios/as.
- l. Participar de Consejos Técnicos, reuniones técnicas y de coordinación con el equipo de trabajo.
- m. Realizar otras funciones asociadas a su cargo, encomendadas por su Jefatura directa.

1.3.4.- ENCARGADO DE REDES, DIFUSIÓN Y GESTIÓN DE CONVENIOS

El/a Encargado/a de Redes, Difusión y Gestión de Convenios es un/a profesional o funcionario/a de Gendarmería, designado/a por la jefatura de cada uno de los C.A.I.S., que tenga habilidades comunicacionales, sociolaborales, proactividad y conocimientos de escucha activa.

Dentro de las labores que debe realizar el/a funcionario/a está el asistir a la jefatura del C.A.I.S. y al Delegado de Libertad Condicional (DLC) en la coordinación de las derivaciones de las personas beneficiadas con la Libertad Condicional y en la gestión de la difusión del sistema postpenitenciario, para la adscripción al Decreto Ley N°409, como de la participación en los programas de intervención, estableciendo redes y convenios con entidades u organismos que entreguen capacitación y colocación laboral para los/as usuarios/as postpenitenciarios, incentivando, por una parte, el ingreso a la eliminación de antecedentes penales y por otra, disminuyendo la reincidencia delictual.

Son tareas específicas del/a Encargado/a de Redes, Difusión y Gestión de Convenios del C.A.I.S.

- a. Elaborar y gestionar un plan de difusión de actividades para informar sobre las acciones de apoyo e integración social que dispone el C.A.I.S., para toda su población.
- b. Coordinar con el/a Delegado/a de Libertad Condicional (DLC), las derivaciones de las personas en Libertad Condicional a la red intersectorial.
- c. Mantener una constante comunicación con el/a Coordinador/a Postpenitenciario Regional para la gestión del trabajo conjunto cuando corresponda.
- d. Gestionar actividades y reuniones para proveer al sistema Postpenitenciario de una oferta programática en materia de derivación a las redes de apoyo y además que permitan la firma de convenios que promuevan la inserción social, con entidades públicas y privadas para facilitar la reinserción social (encuentros empresariales, Seminarios, capacitaciones, Ferias Laborales, etc.).
- e. Informar, orientar y realizar seguimiento de las derivaciones de los/as usuarios/as en materia educacional.
- f. Mantener actualizados los catastros de difusión, redes intersectoriales, convenios, educación y de las contrapartes a nivel regional.
- g. Entregar apoyo a las diferentes instancias técnicas del C.A.I.S.

- h. Reportar al Departamento Postpenitenciario las actividades solicitadas en las Orientaciones Técnicas emanadas de la Subdirección de Reinserción Social relativas al Área.
- i. Otras actividades que pudiera encomendar el/la jefe/a del C.A.I.S. o que sean solicitadas por el Departamento Postpenitenciario.

1.3.5.- ENCARGADO/A DE CONTROL DE BENEFICIOS DE REINserCIÓN

Sus funciones son "gestionar y monitorear los procesos de ingreso, control y egreso del Decreto Ley N°409, Libertad Condicional, Indulto Conmutativo⁴⁹ y de la Oficina de Diagnóstico Prontuario. Deberá estar a cargo de un funcionario con conocimientos de estadística, informáticos, procedimientos legales y administrativos, que gestione la información cuantitativa y cualitativa (Res. Ex. N°910, de 23 de febrero 2018)"

Sus tareas específicas corresponden a:

- a. Distribuir tareas y prioridades de ejecución a los Operadores/as del control de Decreto Ley N°409, Libertad Condicional, Indulto Conmutativo y de la Oficina de Diagnóstico Prontuario.
- b. Supervisar el proceso de ingreso, control y egreso de eliminación de antecedentes en el Decreto Ley N°409, Libertad Condicional, Indulto Conmutativo y de la Oficina de Diagnóstico Prontuario que ejecutan los/las operadores del C.A.I.S.
- c. Reportar actividades y elaborar informes a las instancias competentes que lo requieran.
- d. Resguardar que la estadística o cualquier otra información que se entregue sobre la medida de control Decreto Ley N°409, Libertad Condicional, Indulto Conmutativo y de la Oficina de Diagnóstico Prontuario, sean remitidas a nivel regional y/o central en los plazos instruidos y con arreglos a los mecanismos y metodologías establecidas.
- e. Realizar una estadística de buena calidad, asegurando la exactitud de la información, la confiabilidad y transparencia de la gestión administrativa que se realiza en los C.A.I.S. y Unidades de control del país.
- f. Participar en los consejos técnicos para revisión de situaciones relativas a usuarios/as Decreto Ley N°409, Libertad Condicional, Indulto Conmutativo y de la Oficina de Diagnóstico Prontuario.
- g. Proponer a la Jefatura del C.A.I.S. ajustes y mejoras que procedan respecto a las actividades, procesos y procedimientos de control de Decreto Ley N°409, Libertad Condicional, Indulto Conmutativo y de la Oficina de Diagnóstico Prontuario ejecutado en el C.A.I.S. Además, realizar otras funciones asociada al cargo o encomendadas por su jefatura.

1.3.6.- OPERADOR/A DE DECRETO LEY N°409

Sus funciones corresponden a gestionar y ejecutar todos los procedimientos administrativos de las fases de ingreso, control y egreso de eliminación de antecedentes a través de Decreto Ley N°409, con conocimientos de estadística, informáticos, procedimientos legales y administrativos.

Sus tareas específicas corresponden a:

- a. Ejecutar procedimiento administrativo de la fase de ingreso a la eliminación de antecedentes de Decreto Ley N°409:
- Orientar e informar sobre requisitos del Decreto Ley N°409 para eliminar antecedentes.

⁴⁹ Respecto del/la Operador de Indulto Conmutativo, se toma la decisión de no describir sus funciones en estas Normas Técnicas, dado el bajo número de casos que actualmente persiste, y que, como ya se mencionó anteriormente, corresponde a una población que debe ser egresada pero los tribunales no se han pronunciado al respecto. En la práctica, las funciones de Operador/a de indulto fueron asumidas indistintamente por Operadores/as del Decreto Ley N°409 y Decreto Ley N°321, dependiendo de la disponibilidad de personal en cada unidad.

- Revisión del extracto: si este está completo, se registra e ingresa al libro correspondiente y al sistema informático (SEA). Si el extracto está incompleto se deriva a la oficina de diagnóstico prontuario con la finalidad de aclarar el cumplimiento de causas que se encuentran sin certificación.
 - Reintegrar a los usuarios/as que manifiestan la voluntad de retomar control que realizaron con anterioridad.
 - Reportar actividades y elaborar informes a las instancias competentes que lo requieran.
 - Resguardar que la estadística o cualquier otra información que se entregue sobre la medida de control Decreto Ley N°409.
 - Realizar una estadística de buena calidad, asegurando la exactitud de la información, la confiabilidad y transparencia de la gestión administrativa que se realiza en los C.A.I.S. y Unidades de control del país.
 - Proponer al/la encargado/a de normas ajustes y mejoras que procedan respecto a las actividades, procesos y procedimientos de control de Decreto Ley N°409 ejecutado en el C.A.I.S.
- b. Ejecutar procedimiento administrativo de la fase de control de eliminación de antecedentes de Decreto Ley N°409:
- Solicitar extracto de filiación y antecedentes al registro civil, al menos dos veces al año.
 - Controlar la firma mensual (de modo manual o informático) en un establecimiento de Gendarmería (C.A.I.S., C.R.S. o Unidad Penal).
 - Clasificar y actualizar los libros del periodo de control.
 - Revisar libros o sistema informático (SEA) para verificar el cumplimiento de los controles mensuales del/la usuario/a.
 - Gestionar traslados y autorizaciones de los controles de Decreto Ley N°409.
 - Realizar rescate de usuarios/as con posibilidad anulación por abandono.
 - Ejecutar procedimiento administrativo respecto a la justificación de ausencia a control mensual, las cuales pueden ser aceptadas o no aceptadas, evaluadas en Consejo Técnico.
 - Recepcionar y despachar correspondencia relativa al control de Decreto Ley N°409.
 - Reportar actividades y elaborar informes a las instancias competentes que lo requieran.
 - Resguardar que la estadística o cualquier otra información que se entregue sobre la medida de control Decreto Ley N°409.
 - Proponer al/la encargado/a de normas ajustes y mejoras que procedan respecto a las actividades, procesos y procedimientos de control de Decreto Ley N°409 ejecutado en el C.A.I.S.
- c. Ejecutar procedimiento administrativo de la fase de egreso de eliminación de antecedentes de Decreto Ley N°409:
- Preparar el expediente completo de los/as usuarios/as para su envío al SEREMI de Justicia y Derechos Humanos.
 - Enviar el expediente completo de lo/as usuarios/as al SEREMI de Justicia y Derechos Humanos.
 - Ejecutar procedimiento administrativo respecto al rechazo del expediente o devolución del expediente por razones administrativas.
 - Orientación al usuario/a por recurso de reposición en caso de rechazo de eliminación.
 - Operar el Sistema de Eliminación de Antecedentes (S.E.A.), egresar a usuarios/as de este sistema y de los libros.

1.3.7.- OPERADORA DE OFICINA DE DIAGNÓSTICO PRONTUARIAL

Sus funciones corresponden a gestionar y ejecutar todos los procedimientos administrativos de las fases de ingreso, control y egreso de la Oficina de Diagnóstico Prontuarial, con conocimientos de estadística, informáticos, procedimientos legales y administrativos.

Son tareas específicas a este cargo:

- a. Ejecutar procedimiento administrativo de la fase de ingreso a la Oficina de Diagnóstico Prontuarial:
 - Revisar el extracto y hacer las derivaciones pertinentes en caso de que el extracto esté incompleto.
 - Elaborar un plan de trabajo para la aclaración prontuarial, donde se establecen los compromisos de los/las usuarios/as y los compromisos de la institución.
 - Resguardar la estadística o cualquier otra información que se entregue sobre la Oficina de Diagnóstico Prontuarial.
 - Realizar una estadística de buena calidad, asegurando la exactitud de la información, la confiabilidad y transparencia de la gestión administrativa que se realiza en los C.A.I.S., C.R.S. y Unidades de control del país.
 - Proponer al/la encargado/a de normas ajustes y mejoras que procedan respecto a las actividades, procesos y procedimientos de la O.D.P.
- b. Ejecutar procedimiento administrativo de la fase de control y de aclaración prontuarial:
 - Llevar a cabo el control administrativo mensual.
 - Realizar las tareas de diagnóstico y aclaración de Prontuario Penal a aquellas personas que no pueden acceder directamente al Sistema de Eliminación de Antecedentes, entregando una orientación diversificada en temáticas complementarias post-egreso: alzamiento orden de arraigo, eliminación hoja de vida del conductor, restitución de derechos ciudadanos, etc.
 - Solicitar por oficio los antecedentes necesarios para la aclaración prontuarial.
 - Prestar atención preferencial a los/as usuarios/as beneficiarios/as de la Red de Protección Social, u otros.
 - Recepcionar y despachar la correspondencia relativa a la Oficina de Diagnostico Prontuarial.
 - Reportar actividades y elaborar informes a las instancias competentes que lo requieran.
 - Resguardar la estadística o cualquier otra información que se entregue sobre la Oficina de Diagnóstico Prontuarial.
 - Realizar una estadística de buena calidad, asegurando la exactitud de la información, la confiabilidad y transparencia de la gestión administrativa que se realiza en los C.A.I.S., C.R.S. y Unidades de control del país.
 - Proponer al/la encargado/a de normas ajustes y mejoras que procedan respecto a las actividades, procesos y procedimientos de la oficina de diagnóstico prontuarial en el C.A.I.S.
- c. Ejecutar procedimiento administrativo de la fase de egreso de Oficina de Diagnostico Prontuarial:
 - Incorporar documentación al expediente (certificaciones que dan por cumplida la/s pena/s).
 - Derivar e ingresar a Usuarios/as al Decreto Ley N°409, cuando corresponda, abonando las firmas del periodo que estuvo en aclaración prontuarial.

- Remitir nuevo extracto de filiación y antecedentes penales donde se establezca el cumplimiento de las penas que aclaró en la oficina de diagnóstico prontuario.

1.3.8.- OPERADORA DE LIBERTAD CONDICIONAL (previa modificación legal)

Sus funciones corresponden a gestionar y ejecutar todos los procedimientos administrativos de las fases de ingreso, control y egreso de del Beneficio de Libertad Condicional, con conocimientos de estadística, informáticos, procedimientos legales y administrativos

Son tareas específicas a su cargo:

a. Ejecutar procedimiento administrativo de la fase de pre ingreso e ingreso al beneficio de Libertad Condicional:

- Cotejar lista de aprobados del Sistema Interno con resoluciones recibidas desde las Unidades Penales.
- Verificar correspondencia entre residencia informada en resolución y jurisdicción territorial del C.A.I.S. De no existir correspondencia, derivar al C.A.I.S. asociado al domicilio fijado en resolución e informar al liberto/a condicional.
- Recepcionar al liberto/a condicional, diferenciar ingreso por regular o recurso de amparo (ambos por resolución).
- Realizar ingreso administrativo (derechos y deberes - ingreso al módulo de L.C. – enrolamiento tótem – registro en el libro de control)
- Informar del ingreso nuevo en la estadística mensual.
- Recepcionar expediente físico tanto técnico como de la Oficina de registro y control de la población penal, que es derivado desde la Unidad Penal que egresa el/a liberto/a.

b. Ejecutar procedimiento administrativo de la fase de control del Beneficio de Libertad Condicional:

b.1. Procesos Comunes

- Ejecutar el control de firma semanal mediante el libro de control y el escaneo de cédula o chequeo de huella dactilar en Sistema Informático (Módulo de Libertad Condicional). El proceso de control de firma implica la previa confirmación de identidad mediante contrastación de cédula de identidad.
- Revisión diaria Módulo de Libertad Condicional para detectar ausencias injustificadas por 2 semanas consecutivas. Realizar el cotejo correspondiente en el Libro de Firma, y descartar la existencia de prisión preventiva o nueva condena en aquellos casos, en el Sistema Interno.
- Si no hay información institucional que justifique las ausencias, tomar contacto con liberto/a o familiar para saber si existe una situación que amerite justificarse, y si procede, informar a la Comisión de Libertad Condicional para la toma de decisiones.

b.2. Gestión administrativa-aplicación de beneficios- Ley N°19.856

- Corroborar que el decreto se encuentra en el expediente del/la liberto/a y que esté registrado en el Sistema Interno.
- Calcular nueva fecha de egreso y registrar en el Sistema Interno.
- Actualizar la fecha de egreso en el visor del expediente, y en el archivo, mover el expediente según la nueva fecha de egreso.

b.3. Gestión administrativa – Aplicación Art. 8° Decreto Ley N°321.

- Realizado el ingreso administrativo, verificar la fecha de cumplimiento de la mitad del saldo de condena en el Sistema Interno.

- Verificar si existe Decreto de Rebaja de condena de la Ley N°19.856 aprobada y cargada al sistema interno.
- 90 días antes de la fecha de cumplimiento del medio saldo de condena verificar los requisitos que indica la ley.

b.5. Gestión administrativa – tratamiento casos de trasladados

Traslados temporales:

- Recibir y gestionar las solicitudes de traslado temporales de los/as libertos/as condicionales que se controlan en el C.A.I.S. o Unidad de Control.
- En caso de ser autorizado el traslado temporal, mover el expediente del/la liberto/a al archivo de traslados temporales ordenándolo por plazo o tiempo de permiso.
- Remitir reporte respecto al desarrollo del proceso de cumplimiento e informar cualquier situación extraordinaria que se presentara en dicho periodo, al término del plazo autorizado.
- Tomar contacto con el/a liberto/a condicional para averiguar si es que no se gestionó un traslado permanente sin aviso o si se presentó algún tipo de contingencia que impidiese la presentación en la unidad de control.

Traslado Definitivo:

- Remitir solicitud de traslado a la Corte de apelaciones respectiva.
 - Recepcionar resolución de la Corte de Apelaciones.
 - Informar a la nueva unidad de control el traslado del/la liberto/a.
 - Registrar en el Módulo de Libertad Condicional, el que, de manera automática, mueve el caso como vigente en la unidad nueva.
 - Remitir el expediente individual a la nueva unidad para continuar con su control
- c. Ejecutar procedimiento administrativo de la fase de egreso de Beneficio de Libertad Condicional

c.1. En general:

- Revisar constantemente las fechas de egreso de los/as libertos/as condicionales.
- Remitir certificado de cumplimiento de condena a la Comisión de Libertad Condicional
- Remitir certificado de cumplimiento de condena a Tribunal que condenó.
- Informar a libertos/as sobre el Decreto Ley N°409.
- Cerrar administrativamente el expediente del caso.

c.2. Egreso por nueva condena:

- Revisar diariamente los listados de personas imputadas en el Módulo de Libertad Condicional y en el sistema SIRS.
- Recibida la resolución de nueva condena, solicitar la revocación del beneficio a la Comisión de Libertad Condicional.
- Recepcionar la resolución de la Comisión de Libertad Condicional, si ésta determina revocación por nueva condena.
- Egresar del Módulo de Libertad Condicional al/la liberto/a por causal de nueva condena.
- Cerrar expediente físico egresando por causal de nueva condena y remitir a la unidad penal que cumplirá saldo de condena.

2.- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

De acuerdo con el artículo 2° del Decreto con Fuerza de Ley N°3 de 2017, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a esta Cartera de Estado, le corresponde, entre otras funciones:

- Letra g): formular políticas, planes y programas sectoriales para el tratamiento penitenciario y la rehabilitación del condenado;
- Letra h): controlar el cumplimiento de las políticas, planes y programas de su sector, y evaluar sus resultados;

- Letra i): dictar normas e impartir instrucciones a la que deben sujetarse sus servicios dependientes y fiscalizar su cumplimiento;
- Letra ñ) prevenir medidas para prevenir el delito por medio de planes de reinserción social;
- Letra r): estudiar los antecedentes y proponer, cuando corresponda, la concesión de los beneficios previstos en el Decreto Ley N°409.

En virtud de estos mandatos legales, la Subsecretaría de Justicia, a través de la División de Reinserción Social lleva adelante una serie de acciones en directa colaboración con Gendarmería de Chile. En lo relativo al ámbito post penitenciario, se mencionan las siguientes:

- Establecer políticas que favorezcan la reinserción social de las personas que se encuentran en proceso de eliminación de antecedentes penales y con el beneficio de la libertad condicional e indulto conmutativo.
- Impartir las normas técnicas que sean necesarias para el funcionamiento del sistema postpenitenciario, evaluar su funcionamiento y cumplimiento de resultado.
- Fiscalizar el sistema de libertad condicional, formulando lineamientos para el proceso de supervisión.
- Monitorear a partir de estadísticas, las postulaciones para el proceso de eliminación de antecedentes penales, que se realizan a través de cada Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos.
- Respecto a la eliminación de antecedentes penales, cuando la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos mediante Resolución Exenta resuelve el rechazo del Recurso de Reposición interpuesto en los casos en que ésta haya rechazado conceder el beneficio contemplado en el Decreto Ley N°409, le corresponde a la División de Reinserción Social elaborar la propuesta de resolución del Recurso Jerárquico presentado, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59 inciso 6° de la Ley N°19.880.

Por otra parte, el Decreto Ley que establece la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dispone en su artículo 9 letra b) que "le corresponden a los Secretarios Regionales Ministeriales de Justicia y Derechos Humanos, además de las atribuciones y obligaciones establecidas en la legislación vigente, otorgar el beneficio establecido en el Decreto Ley N°409, de 1932, sobre regeneración y reintegración del penado a la sociedad, cuando se trate de personas residentes en la región".

De esta forma, verificado el cumplimiento de los requisitos legales, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos respectiva otorgará el beneficio contemplado en el Decreto Ley N°409, de 1932, mediante una Resolución Exenta, cuya copia se remitirá al Servicio de Registro Civil e Identificación, a fin que este proceda a la destrucción material del prontuario penal.

Referencias

- Andrews, D. A. y Bonta, J. (2010). *The Psychology of Criminal Conduct*, Fifth Edition: Matthew Bender & Company, Inc. New Providence, NJ.
- Austin, K. P., Williams, M. W. M., & Kilgour, G. (2011). The effectiveness of motivational interviewing with offenders: An outcome evaluation. *New Zealand Journal of Psychology*, 40(1), 55-67.

- Baker, K. (2017). Professional decision-making and risk assessment. Work Product of the 164th International Training Course "Effective Measures for Treatment, Rehabilitation and Social Reintegration of Juvenile Offenders". Resource material series no. 101. Tokyo, Japan.
- Bottoms, A.E. and Shapland, J. (2011) 'Steps towards desistance among male young adult recidivists', in S. Farrall et al. (eds) *Escape Routes*. London: Routledge, 43-80.
- Comité Asesor para la Reinserción Social (2018). Documento de Diagnóstico y Recomendaciones del subcomité Fortalecimiento del Sistema Postpenitenciario. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Covington, S. (2007). The relational theory of women's psychological development: Implications for the criminal justice system. In Zaplin, R. (Ed.), *Female offenders: Critical perspectives and effective interventions*, 2nd ed.
- Craig, Leam A. and Gannon, Theresa A. and Dixon, Louise, eds. (2013) *What Works in Offender Rehabilitation: An Evidence-Based Approach to Assessment and Treatment*. Wiley-Blackwell, Chichester.
- Droppelmann, C. (2015). Entre la delincuencia y la convencionalidad: Desistimiento y persistencia en el delito en una muestra de adolescentes infractores de ley. En *Trayectorias de Jóvenes Infractores de Ley: Investigaciones Sobre Población Adolescente*, ISUC y FSCM, 53-73.
- Farrall, Stephen, 2002: *Rethinking what Works with Offenders*. Cullompton, Devon: Willan Press.
- Fundación Paz Ciudadana (2016). Estudio sobre los niveles de exclusión social en personas privadas de libertad. Santiago-Chile.
- Gendarmería de Chile (2019). Normas Técnicas Sistema Postpenitenciario. Subdirección Técnica.
- Gendarmería de Chile (s/a). Compendio de Normas que Regulan el Cumplimiento de Penas en el Sistema Postpenitenciario: Indulto General conmutativo y Libertad Condicional.
- Gendreau, Paul, 1996: *Offender Rehabilitation: What We Know and What Needs to be Done*. *Criminal Justice and Behavior* 23: 144-161
- Instituto de Sociología, PUC (2017). Antecedentes para la implementación de programas de intervención especializados en reinserción social para la población penal adulta. Informe final.
- Larroulet, P., Droppelmann, C., Del Villar, P., Daza, S., Figueroa, A. & Osorio, V. (2020). Who Is Transitioning out of Prison? Characterising Female Offenders and Their Needs in Chile. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 9(1), 112-125.
- Maldonado, F. (2014). Informe en derecho sobre algunos problemas prácticos e interpretativos en la aplicación del Decreto Ley N°409, de 1932, del Ministerio de Justicia, sobre regeneración y reintegración del penado a la sociedad, y la Ley N°19.856, de 2003, que crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta.
- Marshall, W. L., & Marshall, L. E. (2017). The treatment of adult male sex offenders. In D. P. Boer, A. R. Beech, T. Ward, L. A. Craig, M. Rettenberger, L. E. Marshall, & W. L. Marshall (Eds.), *The Wiley handbook on the theories, assessment, and treatment of sexual offending* (pp. 1227-1243). Wiley Blackwell.
- Maruna, S. & Farrall S. (2004). Desistance from Crime: A Theoretical Reformulation. *Kolner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 43: 171-194.
- McMurrin, M. (2009). Motivational interviewing with offenders: A systematic review. *Legal and Criminological Psychology*, 14(1), 83-100.
- McNeill, F. (2016). The Collateral Consequences of Risk. En Trotter, et al. (eds.) *Beyond the Risk Paradigm in Criminal Justice* First Edition. Macmillan Education, UK.

- McNeill, F., & Weaver, B., (2010). Changing Lives? Desistance Research and Offender Management. Scottish Centre for Crime and Justice. Research Report No. 3/2010.
- Milkman, H., & Wanberg, K. (2007). Cognitive-behavioral treatment: A review and discussion for corrections professionals NIC# 021657. Washington, DC: U.S. Department of Justice.
- Ministerio de Desarrollo Social (2019). Sistematización de experiencia de la residencia transitoria para mujeres que han estado privadas de libertad. Informe Final. Fundación Mujer Levántate.
- Ministerio de Justicia (1874). Código Penal.
- Ministerio de Justicia (1925). Decreto Ley N°321, que establece la libertad condicional para los penados.
- Ministerio de Justicia (1925). Decreto Ley N°645, sobre el Registro General de Condenas.
- Ministerio de Justicia (1926). Decreto N°2.442, que fija el texto del Reglamento de la Ley de Libertad Condicional.
- Ministerio de Justicia (1932). Decreto Ley N°409, que establece normas relativas a reos.
- Ministerio de Justicia (1943). Ley N°7.421, Código Orgánico de Tribunales.
- Ministerio de Justicia (1960). Decreto N°64, que Reglamenta la Eliminación de Prontuarios Penales, de Anotaciones, y el Otorgamiento de Certificados de Antecedentes.
- Ministerio de Justicia (1974). Decreto Ley N°463, que dispone que los organismos, instituciones y entidades de los sectores público y privado, incluidas las municipalidades, deberán solicitar a la oficina central de identificación de Santiago los antecedentes que indica.
- Ministerio de Justicia (1979). Decreto Ley N°2.859, que fija Ley Orgánica de Gendarmería.
- Ministerio de Justicia (1980). Decreto Ley N°3346, que fija el texto de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, texto refundido por medio del DFL3 del año 2017.
- Ministerio de Justicia (1981). Ley N°18.050, que Fija Normas Generales para Conceder Indultos Particulares.
- Ministerio de Justicia (1983). Ley N°18.216, que Establece Penas que Indica como Sustitutivas a las Penas Privativas o Restrictivas de Libertad.
- Ministerio de Justicia (1998). Decreto N°518, que Aprueba "Reglamento de Establecimientos Penitenciarios".
- Ministerio de Justicia (2003). Ley N°19.856, que crea un Sistema de Reinserción Social de los Condenados sobre la Base de la Observación de Buena Conducta.
- Ministerio de Justicia (2004). Ley N°19.927 que modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en Materia de Delitos de Pornografía Infantil.
- Ministerio de Justicia (2012). Ley N°20.588, que establece indulto general.
- Ministerio de Justicia (2012). Ley N°20.603, que modifica la Ley N°18.216, que Establece Medidas Alternativas a las Penas Privativas o Restrictivas de Libertad.
- Ministerio de Justicia (2013). Ley N°20.685, que agrava penas y restringe beneficios penitenciarios en materia de delitos sexuales contra menores de edad.
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2010). Manual de Procedimientos Decreto Ley N°409.
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2017). Política Pública de Reinserción Social, estado actual y proyecciones. Santiago, Chile.

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2018). Documento de diagnóstico y recomendaciones 2018. Subcomité Fortalecimiento del Sistema Postpenitenciario. Santiago, Chile.
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2019). Ley N°21.214, que modifica el Decreto Ley N°321 que establece la libertad condicional a las personas que cumplen una condena privativa de libertad.
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2020). Decreto Supremo N°338, que aprueba el reglamento del Decreto Ley N°321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad y modifica el Decreto Supremo N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios.
- Ministerio de Relaciones Exteriores (2009). Ley N°20.357, que tipifica Crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio y Crímenes y Delitos de Guerra.
- Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (2012). Ley N°20.580, que modifica la Ley N°18.290, aumentando las sanciones por Manejo en Estado de Ebriedad, Bajo la Influencia de Sustancias Estupefacientes o Sicotrópicas, y Bajo la Influencia del Alcohol.
- Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (2014). Ley N°20.770, que modifica la Ley del Tránsito, en lo que se refiere al delito de manejo en estado de ebriedad, causando lesiones graves, gravísimas o, con resultado de muerte.
- Ministerio del Interior (1984). Ley N°18.314, que determina Conductas Terroristas y fija su penalidad.
- Ministerio del Interior y Seguridad Pública (2012). Ley N°20.594, que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de dichas inhabilidades.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (1999). Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (2003). Ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
- Nilsson, A. (2003). Living conditions, social exclusion and recidivism among prison inmates. *Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention*, 4, 57-83.
- Organización de Naciones Unidas (2011). Resolución 65/229, Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok).
- Organización de Naciones Unidas (2015). Resolución 70/175, Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos (Reglas Nelson Mandela).
- Politoff et. al (2004). *Lecciones de Derecho Penal Chileno Parte General*, Chile, Ed. Jurídica Santiago de Chile.
- Salisbury E.J. & Van Voorhis P. (2009) Gendered pathways. A quantitative investigation of women probationers' paths to incarceration. *Criminal Justice and Behavior* 36(6): 541-566.
- Sampson R. J. & Laub, J. H., (2016) Turning Points and the Future of Life-Course Criminology: Reflections on the 1986 Criminal Careers Report. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 53 (3): 321-335.
- Secretaría Regional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Región Metropolitana y Gobierno Regional Metropolitano (2018). Manual de Procedimientos. Modelo de gestión de casos para la reinserción. Programa de Reinserción Volver a Empezar. Santiago, Chile.
- Serin R. y Lloyd C. (2017). Understanding the Risk Need, Responsivity (RNR) model and crime desistance perspective and integrating them into correctional practice. National Institute of Corrections (NIC).

Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2017), Guía para la incorporación del enfoque de Derechos Humanos en políticas públicas.

Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2020), Catálogo de recomendaciones de Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas al Estado de Chile.

Wakefield, S. y Uggen, C. (2010). Incarceration and stratification. Annual Review of Sociology, (36), 387-406.

2.- Instrúyase al personal de Gendarmería de Chile, respecto de la aplicación obligatoria del contenido de las normas técnicas aplicables al proceso de eliminación de antecedentes penales, al beneficio de la libertad condicional y al beneficio del indulto conmutativo, que en este acto administrativo se aprueban.

3.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de conformidad a lo establecido en el literal h, del artículo 2, del DFL N°3, de 2016, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, establece a esta Cartera de Estado, entre funciones, *"controlar el cumplimiento de las políticas, planes y programas sectoriales y evaluar sus resultados"*, para lo cual podrá solicitar la información que se requiera para evaluar el cumplimiento de esta normativa técnica.

4.- **PUBLÍQUESE** el presente acto administrativo en la sección "Actos con efectos sobre terceros" del Portal de Transparencia Activa de la Subsecretaría de Justicia.

Anótese, Comuníquese y Archívese.



SEBASTIÁN VALENZUELA AGÜERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (S)

Lo que transcribo para su conocimiento
Le saluda atentamente:



Ma. Loreto González Lazo
Subsecretaria de Justicia (S)

Distribución:

- Dirección Nacional de Gendarmería de Chile;
- **Subdirección de Reinserción Social de Gendarmería de Chile;**
- Departamento Postpenitenciario Gendarmería de Chile;
- Gabinete Ministro de Justicia y Derechos Humanos;
- Gabinete Subsecretario de Justicia;
- División Reinserción Social;
- Unidad de Fiscalía, Subsecretaría de Justicia;
- Sección Partes, Archivo y Transcripciones.

DOCUMENTO TRANSCRITO
CONFORME A SU ORIGINAL